

**NUEVAS GUERRAS Y ECONOMÍA: ANÁLISIS DEL CONFLICTO
COLOMBIANO (1990-2002)**

INGRID JOHANNA PIÑERES ROZO

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
BUCARAMANGA
2005**

**NUEVAS GUERRAS Y ECONOMÍA: ANÁLISIS DEL CONFLICTO
COLOMBIANO (1990-2002)**

INGRID JOHANNA PIÑERES ROZO

Trabajo de grado para optar al título de Economista

**Director
FERNANDO ESTRADA GALLEGO**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
BUCARAMANGA
2005**

AGRADECIMIENTOS

A ti que creces en mi corazón hasta que llegue a ser tu imagen perfecta.
A ti que cumples los deseos de mi corazón y hoy me has traído hasta aquí.
Simplemente gracias no pueden ser... Toda mi vida en gratitud.
No olvides la obra de tus manos.

A mi padre, mi apoyo y ahora más que nunca mi mayor respaldo.
A mi madre, formadora de mi carácter... volvamos a ser amigas.

A dos personas especiales...
Héctor... Sin su ayuda esto hubiera tardado mucho más... estoy aprendiendo buenas lecciones.
Leíto... admiro tu incondicionalidad. Gracias por hacerme benefactora de ella.

A los que de una u otra forma estuvieron conmigo...
Esperanza, Fernando, Osquitar, Sergio, David, "La Panza", Raulete, "La Pipa".

A toda mi familia, a mis amigos.... "La raza"...

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	14
1. MARCO TEÓRICO	19
1.1 MARCO CONCEPTUAL	24
1.1.1 La perspectiva de guerra clásica según Clausewitz	24
1.1.2 La Guerra y el Siglo XX	27
1.2 EL CONCEPTO DE LA NUEVA GUERRA EN MARY KALDOR	29
1. 2.1 Las identidades: contornos particularistas	32
1.3 LA TEORÍA DE LA GUERRA EN COLOMBIA	34
1.5 COLOMBIA EN EL MARCO DE LA NUEVA GUERRA	44
2. LA NUEVA GUERRA Y LOS ACTORES ARMADOS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA	53
2.1 LA GUERRA COLOMBIANA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO	55
2.2 CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DEL CONFLICTO COLOMBIANO	61
2.2.1 Los escenarios de la guerra	73
2.3 EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL CONFLICTO	77
2.3.1 Las lógicas territoriales	77
2.3.2 Evolución de las lógicas económicas y geográficas	80
2.3.2.1 Urbanización del conflicto	84

3. IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA	87
3.1 INCIDENCIA DEL GASTO MILITAR EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA	99
3.1.1 Incidencia del GFP en el crecimiento económico	102
3.2 CONFLICTO, ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	104
3.2.1 El GFP y su incidencia en la economía	110
3.2.1.1 El efecto del GFP en la Inversión	110
3.2.1.2 El efecto del GFP en la deuda externa	114
4. NARCOTRÁFICO Y ECONOMÍA DE GUERRA	119
4.1 ALCANCES DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y EL GASTO ANTIDROGAS EN COLOMBIA	125
4.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA DE LAS DROGAS	135
4.3 CONFLICTO ARMADO Y NARCOTRÁFICO	139
4.3.1 El escenario del narcotráfico y el conflicto	141
5. DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO COLOMBIANO	152
5.1.1 El plan Colombia	158
5.2 COYUNTURA PRESENTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO ANTE EL CONFLICTO ARMADO	159
5.2.1 Internacionalización del conflicto	173
CONCLUSIONES	176
BIBLIOGRAFÍA	181
ANEXOS	190

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:	Expansión de grupos armados subversivos en los noventa	68
Figura 2:	Expansión del conflicto y relevancia de sus causas iniciales	69
Figura 3:	Poder explicativo de las causas objetivas	70
Figura 4:	Poder disuasivo del Estado	70
Figura 5:	Homicidios vs. Pobreza	91
Figura 6:	Pobreza vs. tasa de homicidios	92
Figura 7:	Tasa de homicidios e índice de aprehendidos	95
Figura 8:	Aumento del pie de fuerza y tasas de homicidios	105
Figura 9:	Evolución del GFP	106
Figura 10:	Condiciones sociopolíticas para invertir	111
Figura 11:	Inversión para el periodo 1980 – 2001 (Millones de pesos)	113
Figura 12:	Gasto Público en Defensa, Salud y Educación (\$ millones constantes de 1946)	116
Figura 13:	Ingresos por café vs. Ingresos por narcotráfico	124
Figura 14:	Cultivos de coca en Colombia	126
Figura 15:	Participación promedio del gasto del Estado colombiano entre 1995 y 1999	130
Figura 16:	Participación de los gastos antidrogas de Colombia en el PIB	132
Figura 17:	Gastos del Estado colombiano en la Reducción de la Oferta de Drogas Ilícitas. En pesos constantes de 1999	133
Figura 18:	Aspersión cultivos de coca 1994 – 2002	134
Figura 19:	Cultivos ilícitos y presencia guerrillera	143
Figura 20:	Presencia Paramilitar	144
Figura 21:	Tasa de homicidios en Colombia por cien mil habitantes	148

Figura 22:	Cultivos ilícitos y número de secuestros	148
Figura 23:	Cultivos ilícitos y número de guerrilleros	150
Figura 24:	Intensificación del conflicto y expansión del narcotráfico	151
Figura 25:	Datos trimestrales del número de muertos y Heridos totales en eventos del conflicto	163
Figura 26:	Datos trimestrales de número de ataques por grupo	164
Figura 27:	Datos trimestrales de número de encuentros por grupos	165
Figura 28:	Datos anuales de número de bajas relacionados con acciones de grupos paramilitares	168
Figura 29:	Ataques y choques guerrilleros por grupo	170

LISTA DE CUADROS

Cuadro I:	Viejas guerras vs nuevas guerras	52
Cuadro II:	Cultivos de coca en la región andina	120
Cuadro III:	Cultivos ilícitos establecidos en el país a comienzos del 2000	123
Cuadro IV:	Correlaciones entre los cultivos ilícitos y variables seleccionadas	145

LISTA DE ANEXOS

APÉNDICE A.	Ingresos de factores colombianos	190
APÉNDICE B.	Aportes en Defensa	193

TITULO

NUEVAS GUERRAS Y ECONOMÍA: ANÁLISIS DEL CONFLICTO COLOMBIANO (1990-2002)*

AUTOR

INGRID JOHANNA PIÑERES ROZO**

PALABRAS CLAVES

NUEVA GUERRA
GASTO EN FUERZA PÚBLICA
ECONOMÍA DE GUERRA

NARCOTRÁFICO
ACTORES ARMADOS
CONFLICTO INTERNO
COLOMBIANO

RESUMEN

A partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001, el mundo comenzó a identificar el contraste entre las guerras de otros tiempos y las actuales. Éstas últimas difieren de las anteriores por sus objetivos, métodos de lucha y modos de financiación. Esta investigación intenta comprender el conflicto armado colombiano desde esta perspectiva internacional y a partir del análisis de la profesora Mary Kaldor, que define estas luchas como “nuevas guerras”, ya que su interpretación corresponde a este tipo de guerra que se desarrolla al interior de los Estados y que no se rige por las leyes que anteriormente conducían la guerra.

Sus actores rehuyen el combate frontal, adoptan la estrategia de ataque-huída y su principal arma es el terror y el desplazamiento. La financiación de estas guerras se da a través del vínculo con el mercado globalizado y la apropiación de recursos tanto de actividades productivas de la economía, como del tráfico de drogas y armas, principalmente. Aparece una lógica económica propia de la guerra que la convierte en una actividad rentable para sus partícipes y que aumenta su autonomía financiera – militar, desencadenando una prolongación de hostilidades y un incremento de sus efectos devastadores. La guerra se convierte en un fin en sí mismo.

Por tanto, la economía del país se afecta por la guerra, en medio de un proceso que concentra más dinero en manos criminales, impone una economía del saqueo y exige cada vez más aumentos del gasto en Fuerza Pública. El crecimiento económico se afecta y por ende, la senda de acumulación y el desarrollo de la nación.

*Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Economía. Director: Fernando Estrada

TITLE

NEW WARS AND THE ECONOMY: ANALYSIS OF THE COLOMBIAN CONFLICT
(1990-2002)*

AUTHOR

INGRID JOHANNA PIÑERES ROZO**

KEY WORDS

NEW WAR
COST OF PUBLIC DEFENSE
ECONOMY OF WAR

DRUG DEALER
ARMED COMBATANT
INTERNAL COLOMBIAN CONFLICT

RESUME

After the problems of September 11, 2001, the world began to identify the difference between the wars of the past and those happening now. The latest differ from those before in their objectives, rules of engagement and modes of finance.

This research attempts to understand the armed Colombian conflict from its international perspective and from analysis of Professor Mary Kaldor, that defines these battles as "new wars", her interpretation already corresponds to this type of war that has grown inside countries and that doesn't follow the rules of conduct of former wars.

These combatants don't want face to face combat, they adopt the strategy of attack and run and their principal weapon is terror and displacement of the population. Financing these wars comes from the global market and the appropriation of funds principally comes from the productive activities of the economy, such as drug and arms trafficking. It appears to be a form of economic activity that appropriates and augments the self-financing of the military conflict, prolonging hostilities and increasing its devastating effects. The war then turns in on itself.

So, the economy of the country is affected by the war, in part by the process of putting more money in the hands of criminals, induces an economy of extortion and increases the costs of public defense. The growing economy is thus affected and by consequence, so is, the road to accumulation of wealth and the development of the nation.

* Graduate Work

** Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Economía. Director: Fernando Estrada

INTRODUCCIÓN

Poco a poco el mundo se ha creado la comprensión social acerca de que la guerra es sinónimo de salvajismo, especialmente a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001.

El terrorismo es el término que más se asocia con ella, pero aunque está universalmente condenado, no está definido. Este término se ha politizado y las definiciones dependen de la ideología y los intereses nacionales. Su significado tiene tantas acepciones como intereses políticos existen. Una definición sencilla de terrorismo es dominación por el terror y la utilización de la violencia como instrumento para infundir miedo. Pero ¿quién es un terrorista?. En palabras del jefe de redacción de Reuters: “Todos sabemos que lo que para uno es un terrorista, para otros es un combatiente por la libertad”. Cada uno tiene su propia causa y cada uno procura imponerla, sin importar los medios a través de los cuales lo persiga.

No obstante, lo indudable es que terrorismo es una representación contemporánea que se ha convertido en la herramienta principal de un nuevo tipo de violencia organizada propia de la actual era de globalización, y que se califica como “nueva guerra”. “Nueva” porque se distingue de las percepciones comunes sobre la guerra de una época anterior; y “guerra” porque subraya el carácter político de este tipo de violencia, pese a que implica un desdibujamiento de la distinción formal de la guerra.

La mayor parte de la literatura al respecto proviene del estudio de la profesora británica Mary Kaldor, experta en conflictos, que ha sido la primera en calificar este tipo de lucha como nueva guerra. El resto de investigaciones la señala como guerra interna, guerra civil, conflicto de baja intensidad o guerra informal. Sin embargo, hay consenso respecto a su significación: es

un tipo de guerra que se desarrolla al interior de los Estados que no tuvo una declaración manifiesta de guerra como tal en sus inicios y se fortalece en los espacios que la falta de autoridad estatal cede.

Los actores que la protagonizan marchan bajo la representación de un movimiento que adquiere significado a través de la inseguridad y el miedo de estar amenazados por etiquetas diferentes. Rehuyen el combate frontal y a cambio adoptan la estrategia de ataque-huída. El uso del terror es el arma que más provecho les significa en la relación costo-beneficio y no reconocen pautas legales para la regularización del conflicto. Ahora, lo que se hace por motivos económicos o políticos, no es fácil de establecer.

Mantienen vínculos con la economía mundial y se benefician de la apropiación de recursos en el marco de algunas actividades de crecimiento económico y acelerado despegue, pero que se desarrollan en medio de atrasos estatales que rezagan las normas e instituciones sociales. En Colombia estas actividades suelen ser bienes primarios como el oro, el petróleo, las esmeraldas, el banano o la coca que se han desarrollado súbita e intensamente, pero en regiones apartadas.

En resumen, se puede establecer un contraste entre las nuevas guerras y las de otros tiempos en lo que respecta a sus objetivos, métodos de lucha y modos de financiación.

El análisis de la nueva guerra tiene características muy particulares al caso colombiano dado que el conflicto que sufre es una mezcla de guerra, crimen, intereses económico-políticos y debilidad histórica del Estado para ejercer su autoridad. Sin embargo, este panorama adquiere especiales connotaciones ante dos hechos cruciales: Primero, la irrupción del narcotráfico como factor que ha impulsado el conflicto no sólo porque su negocio en sí implica violencia, sino también en la medida en que ha fortalecido la autonomía económica, política y militar de los actores armados con un apoyo

políticamente ambiguo que respalda tanto a grupos de izquierda como de extrema derecha, según su conveniencia.

Segundo, el debilitamiento de la justicia que ha permitido el avance de la impunidad y el afianzamiento en el colectivo criminal de que las posibilidades de recibir castigo son mínimas. En ese sentido, el crimen alimenta el crimen.

En medio de la complejidad de estas circunstancias, este trabajo es un intento por entender la dimensión de la guerra colombiana en el mundo globalizado posterior al 11 de septiembre que consigue entrelazar elementos de juicio para comprender cómo se desarrolla su dinámica en el contexto del mundo actual. Particularmente, este estudio resalta las nuevas investigaciones sobre el conflicto y la violencia que sugieren que ciertas explicaciones tradicionales están equivocadas. Por ejemplo, Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada dicen que si se continúa pensando que la guerra y la violencia son consecuencias de una sociedad injusticia y excluyente, en las negociaciones con la guerrilla se aceptará una transformación total para la sociedad colombiana. Entonces, este ya no sería un fin por alcanzar mediante la democracia de dicha sociedad, sino de un grupo con escasa representatividad en el país. De otro lado, la aceptación de la cultura violenta como falla estructural de la sociedad, según estos mismos autores, induce al derrotismo y al fatalismo impidiendo la construcción de una visión objetiva para encarar los problemas nacionales.

A partir de estas ideas se expone en el primer capítulo la tesis que enmarca la descripción contemporánea de la guerra, ya que, como se ha dicho, el conflicto colombiano es un ejemplo de lo que Mary Kaldor definió como nueva guerra. A su vez se expone la distinción de este nuevo tipo de lucha con el concepto clásico de la guerra.

En el segundo capítulo, se hace una comparación del conflicto armado de Colombia en el marco de Latinoamérica, y a partir de allí se definen las características y antecedentes sobre sus partícipes.

En el tercer capítulo se relacionan las observaciones analíticas correspondientes a la economía de guerra y, por supuesto, los efectos sobre el crecimiento económico. Como ya se dijo, se destacan dos aspectos en particular: la debilidad de la justicia y el impulso del fenómeno del narcotráfico en la escalada del conflicto; entretanto que factores como la pobreza y la desigualdad parecen tener una menor capacidad explicativa.

El cuarto capítulo menciona las principales características estructurales del narcotráfico, a la vez que identifica su incidencia en la guerra como uno de los principales detonantes en materia de violencia e impulsor en recursos financieros.

Por último, el quinto capítulo revela el panorama actual de los últimos meses referentes a la coyuntura que plantea el conflicto para el gobierno Uribe Vélez.

En los contenidos generales de investigación sobre el tema del conflicto colombiano existen muchos esfuerzos encaminados a mejorar la comprensión de su naturaleza, dinámica y evolución. Sin embargo, este trabajo parte de un enfoque diferente que surge del cambiante contexto geopolítico mundial definido por la cruzada antiterrorista, la lucha antidroga y el orden globalizador. En él, Colombia hace parte de la descripción del tipo de guerras que surgieron en los años ochenta y noventa, y que se diferencian de las viejas guerras entre Estados en sus objetivos, medios y economía. Por estas razones, la tarea que se ha propuesto aquí es identificar los aspectos que coinciden con esta comprensión, y de este modo abrir el

debate para una perspectiva diferente de la relación de la guerra colombiana en la escena mundial.

1. MARCO TEÓRICO

El estudio del conflicto colombiano tiene dificultades analíticas para su explicación a la hora de entrar en el terreno político-militar que lo circunscribe. Después de los hechos del 11 de Septiembre de 2001 el contexto geopolítico de la guerra en el mundo cambió drásticamente, y hoy por hoy enfrentamientos civiles con aires sediciosos, como el colombiano, son analizados con el recelo de un sistema que se reconoció vulnerable a la mano del terrorismo. Los tipos de conflicto bélico actuales han cambiado por completo, según el planteamiento principal que retoma este estudio desde el argumento de Mary Kaldor, en cuanto a que son enfrentamientos globalizados, sin fronteras y sin bandos estatales organizados, pero ante todo, porque son guerras donde la principal víctima es la población civil. Este tipo de conflicto es denominado por Mary Kaldor “nuevas guerras”, designadas así para distinguirlas de las guerras de tipo clásico entre Estados representadas por el estilo expuesto por el militar Karl Von Clausewitz.

Hasta fines del siglo XX el análisis de los conflictos, encabezado por el pensamiento estratégico clásico de Karl Von Clausewitz, definía la guerra como una lucha entre Estados o coaliciones de Estados con ejércitos organizados, una economía de la guerra basada en los recursos de cada Estado y objetivos políticos definidos (Clausewitz, 1999). Para satisfacer las necesidades de la guerra se formalizaron los recursos fundamentales de impuestos y disciplina militar que dieron lugar a la conformación de las naciones-Estado modernas en Europa; y la estrategia militar, que hacía énfasis en la dimensión y en la movilidad, fue la respuesta a la necesidad creciente de organización racional y doctrina científica. La guerra fría fue la culminación de esta lógica de guerra, y la nueva guerra se generaliza a partir

de entonces a raíz de las consecuencias de hechos cruciales como la caída del muro de Berlín tras la caída de dicha guerra (Kaldor, 2001). Las nuevas guerras han nacido en el mundo de los años ochenta y noventa diferenciándose de las anteriores guerras (viejas guerras) que se libraban entre Estados en términos de las motivaciones, fines, métodos de lucha y financiación.

Según Román Ortiz (1998), en la órbita de los países socialistas la corrupción, el despotismo, la anarquía, la dificultad de reemplazar líderes históricos, la emigración rural a ciudades económicamente desequilibradas, la pérdida del sistema de potencia-tutores de la guerra fría, e inclusive el poder destructivo de las epidemias crearon el contexto apto para que lo primitivo y mafioso se entrecruzaran en la composición de los Estados aun en formación. El vacío político alimentado por la espiral que configura la pérdida de ingresos y la ilegitimidad de muchos de estos gobiernos sumado al desorden creciente y la fragmentación militar, según Kaldor, fueron el fundamento de la nueva guerra, distinguiéndose por su carácter específico: lo local tiene repercusiones en muchos niveles del orden mundial. La nueva guerra es una lucha de exclusión con diversidad de actores militares que rehuyen el combate convencional provocando más muertes entre la población civil que entre los propios combatientes, y que además no reconocen ninguna regulación o legislación internacional al conflicto.

Hasta ahora las nuevas guerras sucedían fuera de los linderos de Occidente o en espacios fronterizos, pero con el ataque terrorista a Estados Unidos en 11 de Septiembre de 2001, la violencia globalizada dio en la médula del sistema capitalista. La guerra ascendió a los extremos y allí la guerra se convierte en "un estado de violencia salvaje, descentralizada y generalizada" (Ramoneda, 2001). Este tipo de conflicto implica que hay una fusión de la

violencia política y cotidiana, donde la ruptura del aparato estatal y el caos propio del desorden civil crean las condiciones para una impunidad descomedida que también es aprovechada e incrementada por la delincuencia común; así la separación entre organizaciones criminales y organizaciones políticas violentas tiende a difuminarse. Si los delincuentes se distancian de los insurgentes en que su fin persigue el beneficio económico, y los segundos se centran en alcanzar objetivos políticos, esta separación se orienta a deshacerse, desde la óptica de Mary Kaldor. El tráfico de narcóticos en el caso colombiano es muy ilustrativo en este sentido, aunque no es el único. El conflicto libanés también vivió lo propio en un escenario donde terroristas, delincuentes, guerrilleros y paramilitares se vieron involucrados en actividades ilegales para financiarse.

También es muy común la práctica de actividades delictivas como el secuestro y la extorsión que difícilmente se puede identificar si han sido cometidas por una organización de fundamento político o solamente criminal. Inclusive, algunos grupos mafiosos tienden a acrecentarse y politizarse en la medida proporcional que crecen sus intereses, tal como aconteció con el advenimiento de la ofensiva política y militar de los cárteles de la droga contra el acuerdo de extradición entre Colombia y los EE.UU. a mediados de los años ochenta.

La visión contemporánea de la nueva guerra que propone Kaldor asocia la poca asistencia del Estado con la presencia de rebeldes que construyen un aparato paraestatal alternativo y que se opone a la administración gubernamental entendida como legítima. Cuando una fuerza intenta sobreponerse a la otra, se da la lucha por monopolizar el control sobre la población y el territorio en disputa. Bajo este panorama se conforman los enfrentamientos producto de las insurrecciones liberales y nacionalistas del siglo XXI, las revoluciones anticoloniales o los conflictos resultantes de la

posguerra fría que, según esta autora, a diferencia de las anteriores se convierten en formas de guerra que se gestan ahora en el interior de los Estados. También se diferencian de las “viejas guerras” en que los aspectos que se ponen sobre la línea de enfrentamiento no son de política exterior sino disparidades de fundamento ideológico o discrepancias sobre la definición de administración política que necesita una nación. Las luchas se entablan sin una declaración formal de guerra. No hay límites territoriales y la división entre combatiente y civil se disuelve, por lo cual todos son objetivos. Los intereses se miden en términos de cuántos individuos se puedan contar en la conversión a una determinada causa, y es aquí donde la guerra y la política dejan de ser continuación una de la otra para convertirse en una sola fusión.

En algunos casos el papel del Estado como única fuente legítima de violencia ha sido sustituido por una gama de grupos y facciones que se adjudican funciones paraestatales sobre cierta zona del territorio o la población. Estas pugnas se dan entre un número indefinido de núcleos de poder independientes que disponen de intereses propios, y recursos militares y económicos para impulsarlos. La seguridad interior se deprime y una parte de la población ante la inoperancia estatal asume la responsabilidad de su propia seguridad y consecución de objetivos por medio del uso de las armas.

Otro aspecto sobresaliente en la Nueva Guerra señalado por la autora está asociado con la debilidad del Estado que ha sido puesto en evidencia con el resurgimiento de vigorosas solidaridades subnacionales o transnacionales (movimientos separatistas como los kurdos, chechenos o etarras, por ejemplo). El debilitamiento de la maquinaria gubernamental y su creciente crisis de legitimidad han hecho emerger el clan, la tribu, la etnia o la religión como principales ejes de cohesión política capaces de escindir Estados. El caso más apropiado que representa este proceso ha sido la ruptura de la

antigua Yugoslavia; en otros continentes la fuerza de la raza y la religión han motivado divisiones como en Sudán, mientras en la sociedad árabe el fundamentalismo desempeña el papel de enlace entre esferas que difieren de nacionalidades. La progresiva debilidad de los aparatos gubernamentales, se vio especialmente en los países del antiguo bloque soviético y del mundo subdesarrollado. Sin apoyo financiero y militar de las potencias que sostenían algunos países, sus identidades estatales se debilitaron, como el caso de Somalia y Etiopía.

Al debilitamiento de la estructura estatal se suma el desarrollo del armamento portátil, los explosivos y los sistemas de comunicación que han multiplicado el poder de destrucción de asociaciones localizadas dedicadas tanto a la delincuencia común como al terrorismo, entendido éste en términos de Michael Walzer “no solamente como la matanza de gente inocente, sino también como la irrupción del miedo en la vida cotidiana y la inseguridad en los espacios públicos... es el resultado de manos visibles: un proyecto organizacional, una elección estratégica, una conspiración para matar e intimidar” (Walzer, 2001: 12). Kaldor relaciona este aspecto diciendo que la economía dentro de estos conflictos hace que su sostenimiento se convierta en una actividad rentable tanto para los poderosos que buscan mantener su maquinaria bélica como para los pequeños que, como los campesinos cocaleros colombianos, prestan su apoyo a los guerrilleros a cambio de protección contra las operaciones antidrogas del gobierno.

En la geografía mundial los conflictos de Sierra Leona, Albania, Afganistán o la misma Colombia se desarrollan en la línea de la llamada nueva guerra, pero en versión más intensa y evidente, y cada uno con sus propias singularidades. No fue sino hasta el final de la confrontación Este-Oeste cuando algunos de los procesos de descentralización de la violencia en el

mundo africano y europeo aumentaron, se agudizaron y extendieron. Después de la retirada de los soviéticos, Afganistán se había convertido en un territorio de lucha de ejércitos privados con una unidad provisional aparente bajo el régimen 'talibán'. En Somalia se desvaneció todo vestigio de Estado y fue sustituido por una maraña de feudos y 'señores de guerra'. En Liberia la guerra a manos de varios actores tribales apenas ha permitido sobrevivir a la república africana, y Europa no ha quedado tampoco al margen de este tipo de lucha si se recuerda el caso del estado albanés cuando sucumbió en 1997. En América Latina, Colombia representa tal vez el ejemplo más evidente de la nueva guerra y estado de violencia generalizado con un conflicto que tiene raíces casi cincuenta años atrás en un país rural, bipartidista (Frente Nacional) y, por lo tanto, excluyente, de economía agraria y basado en la producción de productos primarios como el café, que vio surgir movimientos guerrilleros (FARC, ELN, M-19) en el contexto que demarcaba el éxito de la revolución cubana.

1.1 MARCO CONCEPTUAL

1.1.1 La perspectiva de guerra clásica según Clausewitz.

Desde la hipótesis que categoriza al conflicto bélico en el siglo XX la guerra es concebida como una pugna entre Estados que rivalizan por intereses propios. Es la actividad social que incluye la organización y movilización de hombres con la finalidad de aplicar violencia física, y que a su vez exige la regulación de ciertos tipos de relaciones sociales, por lo cual posee su propia lógica. En un sentido más conveniente y conceptual, la guerra es el acto de violencia que pretende dominar al enemigo (Estado) por un interés particular,

pero político y definible (Clausewitz, 1999). En el ámbito exclusivo de la política nacional del Estado, ha sido definida explícitamente por Karl Von Clausewitz como la continuación de la política con otros medios (violentos y sangrientos), que no deben intervenir más que como un último recurso para cortar el nudo de los conflictos insolubles. De hecho, la guerra no está subordinada a la política (como el militar al civil), sino que está descrita como su máxima expresión, su perfección momentánea.

Con Clausewitz dos argumentos fundamentales se desplazan en sentidos paralelos. En el orden militar, la violencia es necesaria cuando las condiciones o cambios que un actor político busca no son realizables a través de los medios políticos, económicos o psicológicos. En la otra dirección, concerniente a la política, los métodos sociopolíticos pueden mejorar de manera importante las posibilidades de obtener los objetivos esperados sobre el enemigo. De este modo, el esfuerzo político-militar puede ser una potente combinación de vías y medios para controlar y resolver un conflicto. Con este propósito, la contribución de la fuerza militar para conseguir las metas estratégicas es esencial, pero no necesariamente es directa. Es decir, las operaciones militares son el apoyo de las acciones políticas de los objetivos estratégicos.

En la relación guerra – formación del Estado moderno, la concepción clásica de la guerra en la tesis de Clausewitz destaca que la sociedad europea sostuvo el tipo de contienda con la que logró la construcción de su Estado moderno territorial, centralizado, racionalizado y jerárquicamente ordenado. En dicha consolidación del Estado Europeo la guerra es un fenómeno que se inicia entre los siglos XV y XVIII con las luchas feudales, y que atraviesa por fases sucesivas: desde las guerras ligadas al poder estatal absolutista hasta las revolucionarias instauradoras del Estado. Cada fase tuvo una modalidad bélica diferente, con tipos de fuerzas militares, estrategias y técnicas

divergentes. En las etapas iniciales de la formación del Estado Europeo, los ejércitos que se formaron para las guerras carecían de estabilidad e identidad hasta que se hicieron permanentes, especializados y profesionales garantizando su control por parte del Estado. Los individuos de las nacientes fuerzas armadas estatales se convirtieron en el agente de la autoridad racional y legal.

A partir de este momento, según Clausewitz, se inició la monopolización de la violencia legítima inherente al Estado moderno. Sus intereses se convirtieron en justificación auténtica de la guerra y se crearon normas que definieron dicha legitimidad, entre las que se estableció el respeto por la población civil. Para financiar los ejércitos permanentes, se debió regularizar la administración, la fiscalidad y los préstamos, y así surgió la base de una actividad económica legítima. Se generó conciencia del Estado como la institución responsable de las fronteras territoriales y la creación de leyes propias.

Al finalizar el siglo XVIII la guerra era una actividad social caracterizada por la distinción entre lo público y lo privado, lo interno y lo externo, lo económico y lo político, lo civil y lo militar en la que el Estado quedó reconocido como el portador legítimo de las armas y la violencia, pero sobre todo surgió una distinción entre el tiempo de guerra y el tiempo de paz. El autor en mención limitaría la noción de la guerra como “la tendencia hacia los extremismos que interactúa con todos los niveles de la razón, el azar, la estrategia y la emoción que existe en un concepto de beligerancia absoluta” (Clausewitz, 1999: 98). Con esta lógica de la guerra Clausewitz identificó acciones recíprocas entre el Estado, el ejército y el pueblo contra un enemigo común representado por otro Estado.

Del pensamiento estratégico de la guerra en este autor aparecen teorías como la del *desgaste* y de la *maniobra* que se hacen mutuamente complementarias, e ideas que llevaron a concluir que la movilización y aplicación de la fuerza eran los factores más importantes para definir el resultado de la guerra. De la teoría a la práctica, las alianzas ayudarían a intensificar la fuerza de ataque y cuando éstas hicieron más rígidas se consolidaron cuando se dio inicio a la primera guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial se partió la distinción entre lo interno y lo externo, y quedó claro que llevar a cabo guerras de forma individual y unilateral ya no era posible para ningún país, a menos que se tratara de una superpotencia.

A partir de las disposiciones hipotéticas de Karl von Clausewitz quedó en la conciencia mundial que la trinidad de factores que promulgó su teoría como intrínsecos a toda guerra si se cumplen: el objetivo político, la pasión popular y los instrumentos operacionales. El éxito de cada uno depende de la interacción con los otros dos elementos, y resulta en la credibilidad de los objetivos políticos, la motivación ulterior, y la buena voluntad de la población para sufrir los sacrificios necesarios, siempre y cuando perciba la legitimidad del objetivo ulterior de la guerra.

1.1.2 La Guerra y el Siglo XX.

La codificación de las leyes de guerra en el siglo XX ayudó a demarcar la guerra legítima y a posicionarla como un instrumento racional de la política del Estado. La dimensión y la movilidad, la organización y la doctrina fueron elementos señalados por Clausewitz como claves para identificar la racionalidad y estrategia del enemigo. No obstante, no ha sido sino hasta este siglo cuando la guerra se ha acercado a su noción teórica con la posible

utilización de armas infalibles como las nucleares, donde se empiezan a difuminar los límites entre lo militar y lo civil, los combatientes y los no combatientes, y donde también se pone en tela de juicio la distinción entre guerra y paz. La justificación de la guerra en virtud del interés del Estado se empieza a disipar y los partidarios y participantes de la guerra poseen diversas razones individuales, aunque la violencia legítima les dé un objetivo común en el qué creer. Ante esta contingencia la justificación se convierte en heroica: el patriotismo en la primera guerra mundial y la lucha contra el mal en la segunda, pero lo importante, según Clausewitz, es que a la hora de sostener una guerra importa la medida en que los que participan en ella observan el objetivo del conflicto como legítimo.

Según el planteamiento de Mary Kaldor muchas guerras irregulares posteriores a la segunda mitad del siglo XX fueron el preludeo de formas de guerra que estaban dejando atrás el objetivo político y definido, y serían el modelo predominante para los nuevos perfiles de violencia socialmente organizada, y si antes lo más importante que se jugaba en cualquier conflicto era la legitimidad o el derecho moral a gobernar y la habilidad para reaccionar apropiadamente al cambio de las circunstancias políticas, psicológicas y militares, en los nuevos tipos de guerra este objetivo se distorsiona o disipa.

En el siglo XX también se dio la redención del pensamiento de Clausewitz por cuenta de la importancia que adquirió la población en el eje del conflicto al verse convertida en el foco de gravedad y la fuente primaria de la fuerza física, psicológica y moral de una nación-estado (Rangel, 2001: 25).

1.2 EL CONCEPTO DE LA NUEVA GUERRA EN MARY KALDOR

Las guerras clásicas contuvieron en sí mismas los orígenes de un nuevo tipo de violencia organizada propia del proceso de globalización; la globalización explicada por unos como el medio en el que se está madurando una sola comunidad mundial y en la que los Estados nacionales están quedando en el rezago, que como proceso no es el ocaso del Estado sino su metamorfosis. Esta ha sido la manifestación dentro de la cual Kaldor halla el contexto matizante del fenómeno de la nueva guerra.

El tipo de conflicto bélico actual ha cambiado para Mary Kaldor y ha de ser reconocido en un mundo donde el corazón de su sistema se vio agredido por un adversario, en gran medida invisible, representado en la ideología de la amenaza y que no conoce límites de acción pues “pareciendo omnipresente en el tiempo y el espacio, ninguna acción intemperante de su parte puede ser descartada” (Lock, 2003). Por esta razón esta nueva comprensión del conflicto bélico adquiere una singular connotación en el contexto geopolítico mundial y el trasfondo imperativo moral de la comunidad internacional y estadounidense, empeñadas en contrarrestar y prevenir colectivamente cualquier tipo de perturbación o enfrentamiento con presunción de terrorismo.

La denominación de este prototipo de lucha para Kaldor continúa siendo ‘guerra’ porque conserva y enfatiza el carácter político de la guerra, pero es ‘nueva’ porque se separa de las percepciones tradicionales sobre la guerra (Lock, 2003). Como paradigma de violencia implica un desvanecimiento de las diferenciaciones entre guerra, crimen organizado y violaciones en gran escala de los derechos humanos, y aunque en su mayoría estas guerras se dan en el ámbito local, generan repercusiones transnacionales. La guerra de

Irak, en el momento presente, y la alianza Estados Unidos, España e Inglaterra es el último vestigio de guerra clásica, la excepción en un modelo que va de salida, al menos aquellas formas de guerra para las cuales fueron elaboradas las reglas y la normatividad que las conducía durante el pasado con el propósito de circunscribirlas.

En estas circunstancias el escritor Pizarro Leongómez considera dadas las múltiples transformaciones generadas por la globalización (revolución de las comunicaciones, del transporte y de los sistemas financieros), así como la proliferación de armas convencionales y no convencionales de destrucción masiva como un cambio en la naturaleza del terrorismo (Leongómez, 2003: 43). En términos de Mary Kaldor esto quiere decir que las nuevas guerras se han interpretado desde el contexto de la globalización debido a la intensificación de las interconexiones políticas, económicas, militares y culturales a escala mundial. Reflejan un vacío de poder que es típico de los periodos de transición en la historia mundial o nacional (debilitamiento de los gobiernos) y surgen en el contexto de la erosión de la autonomía del Estado o del monopolio de la violencia legítima. No ha sido sino hasta el final de la guerra fría y los últimos acontecimientos mundiales que el tema de la seguridad ha tenido una reestructuración profunda con severas implicaciones para pensar los temas sobre este desmoronamiento de los Estados nacionales (Estrada, 2003: 128).

La hipótesis de Fernando Cubides es otra teoría que expone que se suman los efectos adyacentes como la corrupción, la ineficacia y la violencia cada vez más privatizada generando situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito que trae como consecuencia el creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo

(Cubides, 1999: 151-201). Theda Skocpol apoya en este sentido la argumentación de que los alzamientos armados ocurren como resultado de una crisis ubicada en las estructuras y en la situación represiva del Estado, y se agrava cuando la inconformidad por la situación económica se politiza rápidamente (Skocpol, 1979).

Las nuevas guerras tienen objetivos relacionados con la política de identidades, utilizan la nueva tecnología, toman nuevas maneras de combatir y han incorporado la lógica de la guerra a la marcha de la economía. No tienen una solución posible a largo plazo dentro de lo que Mary Kaldor ha llamado política de identidades, y la insistente forma de ver estas luchas desde el punto de vista tradicional de la guerra clásica ha hecho infructuosa la solución para restaurar la totalidad de la legitimidad de los Estados que las libran. En este sentido el primer y más comprensivo paso de una nación para comprender su conflicto es tener la plena perspectiva de su situación conflictiva y las más importantes amenazas para su seguridad.

Para Mary Kaldor las nuevas guerras o conflictos armados internos estallan debido a la suma de condiciones de orden económico, político, social e internacional, no obstante que aunque traten de ser resueltas dichas condiciones, *no implica la solución del conflicto que se sufre*. Sin embargo, por sí solas estas condiciones no son suficientes para que una confrontación rebelde se desarrolle, aunque no existe un consenso de opiniones para determinar las causas del surgimiento y los factores que determinan la dinámica y los agentes que dan lugar a una lucha rebelde. Desde esta óptica, las condiciones económicas, aún cuando son precarias, no se constituyen en una variante detonante de la revolución. Para Mary Kaldor por sí sola la interpretación económica no es suficiente para explicar el absoluto salvajismo de las nuevas guerras y su condición social depredadora.

1. 2.1 Las identidades: contornos particularistas.

En el análisis político de las nuevas guerras de la mencionada autora el recrudescimiento de lo que ella denomina identidades particularistas, no puede entenderse en términos tradicionales: indudablemente es un fenómeno que reacciona contra los procesos de la globalización que destruyen las divisiones culturales y socioeconómicas que definían los modelos políticos característicos de la era moderna.

El nuevo tipo de guerra es interpretado por Kaldor en relación con este desplazamiento mundial y aunque, por ejemplo, las formas de lucha puedan disfrazarse de nacionalismo tradicional, no hay que olvidar que son fenómenos contemporáneos que tienen autores y rasgos anónimos. En este sentido, Kaldor estima que la globalización ha desintegrado las culturas de organización vertical convirtiéndolas en horizontales y procedentes de redes transnacionales con estructuras que se asemejan a una tela de araña, aunadas a una combinación de cultura internacional y al mismo tiempo local, como consecuencia de la naciente reafirmación de esas particularidades locales.

Como política de las nuevas guerras esta tendencia acata objetivos que están relacionados con la reivindicación del poder sobre la base de las identidades aparentemente tradicionales: nación, tribu, religión o clanes. Es un proceso que al mismo tiempo contiene globalización y localización, integración y fragmentación, homogeneización y diferenciación, a lo que se suma la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. Los niveles mundiales de organización económica se han expandido considerablemente debido a este carácter global de las finanzas y la tecnología. Paralelamente, ha habido un crecimiento en las redes

transnacionales y no gubernamentales de carácter informal, y un aumento explosivo de las organizaciones, los acuerdos y los organismos reguladores del ámbito internacional.

No obstante las anteriormente mencionadas agrupaciones reguladoras del ámbito internacional, dentro de la tendencia particularista, no corren a la par de la politización, es decir, no constituyen la base de comunidades políticas en la que puedan fundarse nuevas formas de poder; el individualismo y la desorientación social, debido a la carencia de normas, las caracterizan y cualquier interpretación de la política de identidades particularistas puede ser transcrita como una reacción política ante la impotencia de los Estados modernos de movimientos asociados a una identidad étnica, racial o religiosa con el propósito de luchar por el poder estatal. Las identidades son explicadas por Kaldor en el sentido del uso de etiquetas como cosas con las que el individuo nace y no se pueden cambiar, son inalienables, o que quieren imponerse voluntariamente o por la fuerza, pero que buscan la reivindicación política del poder estatal a partir de la etnia, la tribu, el ideal político, etcétera. Sin embargo, existen las excepciones a esta regla que han sido locales y capaces de establecer su forma de poder.

Las identidades tienden a ser fragmentadoras y excluyentes, y se consideran a menudo un retroceso al pasado, un regreso a las identidades primitivas, temporalmente desplazadas o suprimidas por las doctrinas modernizadoras; y los movimientos por ellas representados adquieren significado a través de la inseguridad y el miedo de estar amenazados por etiquetas diferentes. Por ello, la política de identidades supone una discriminación psicológica contra los que tienen un rótulo diferente.

1.3 LA TEORÍA DE LA GUERRA EN COLOMBIA

Particularizando el concepto de la nueva guerra de Mary Kaldor al ámbito nacional a continuación se hará una revisión de los estudios sobre el tema que hacen conocidos autores como Mauricio Rubio (1999; 2001), Malcom Deas (1995), Fernando Gaitán (1995), Hernando Gómez Buendía (1999), Alfredo Rangel (1999; 2000), Fabio Sánchez y Jairo Núñez (1999) y Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada (2000; 2001), entre otros.

Empezando con el planteamiento de Mauricio Rubio (2001), que se remite al pensamiento de Marx para destacar la importancia de la comprensión de condiciones de vida, sociales, políticas o económicas como determinantes del comportamiento de los individuos, este autor se enfoca hacia las condiciones políticas (tipo de régimen de gobierno y proceso de democratización), enfatizando que la idea de los años sesenta en que los sistemas democráticos eran relativamente inmunes a las revueltas sociales se instaló en la literatura destacando que las revoluciones con éxito han surgido desde la monarquía tradicional, dictaduras militares o gobiernos coloniales.

A partir de los ochenta nace un racionamiento que según el mencionado autor proclama que las revoluciones sociales ocurren como resultado de una crisis en la estructura de los regímenes y que las presiones militares de los países más desarrollados sirven de componente transformador a estas crisis y que en últimas, persisten por la resistencia a promover reformas agrarias o por la misma incapacidad represiva del Estado.

Sin embargo, en la hipótesis de Rubio no sólo las condiciones políticas explican el surgimiento y consolidación de las organizaciones suscritas a las revoluciones subversivas. Este argumento deja de lado que existe de fondo una explicación que surge del contexto social, en que el ejercicio de la violencia y la búsqueda de beneficios económicos favorecen la proliferación de organizaciones con fines depredatorios y violentos que subsisten a costa del debilitamiento, y hasta desaparición de quienes ataca. En este sentido puede ser entendido el accionar de las organizaciones narcotraficantes que llegaron a disputar en forma abierta la legitimidad y el poder del Estado colombiano durante los noventa.

Por otro lado, apartándose de este camino político señalado por Rubio, autores como Boris Salazar y Maria del pilar Castillo (2001), retoman el análisis basado en la decisión individual de delinquir que nace de la criminología clásica iniciada a finales del siglo XVIII para explicar como el rebelde al confrontarse con la decisión de apartarse o enfrentar al sistema legal establecido, como actor racional, evalúa los posibles riesgos y beneficios vinculados con dicha conducta. Este es el tipo de enfoque asociado generalmente con la teoría económica del crimen y la teoría de juegos que para estos autores aplica al caso colombiano, primordialmente en aspectos que enuncian que las conductas de los actores que escenifican el conflicto son producto de proceso racionales, y no de irracionalidad o predisposición cultural hacia la violencia.

Otra hipótesis que analiza el origen del conflicto la exponen varios autores entre los que se destaca Hernando Gómez Buendía (1999) y plantea que la causa del comportamiento violento del colombiano se debe a su propia naturaleza y a características perversas de la sociedad y cultura. Así el exceso de racionalidad individual y la carencia de racionalidad colectiva

causa la desintegración social que trae consigo la violencia, o incluso la “cultura mafiosa” que impera en el país, en medio de la cual juegan un papel importante el narcotráfico, la corrupción y toda suerte de abusos privados y públicos.

En cuanto a la supuesta perennidad de la violencia, esta visión plantea que existe continuidad entre los episodios innegablemente violentos que han ocurrido a través de la historia colombiana; desde los horrores de la conquista hasta las caóticas guerras civiles de la república y los conflictos del siglo XX. Es decir, así se concluye que Colombia siempre ha sido un país violento (Bushnell 1992:12; Amaya Pulido, 2000).

Malcom Deas (1995), que cuestiona la perennidad de la violencia y que “los colombianos son violentos por naturaleza”, sugiere que el punto crucial de esta visión tradicional se debe discutir mediante el examen de las estadísticas sobre el nivel de homicidios y otros crímenes en los distintos momentos de la vida colombiana. Así, Fernando Gaitán (1995) presentó estimativos de las tasas de homicidios a lo largo del siglo XX y concluyó que fueron moderadas: oscilaron alrededor de un promedio cercano a veinte muertos por cada cien mil habitantes. En las guerras civiles, como es de esperarse, la cifra era mayor.

Después de la guerra civil de los Mil Días (1899 - 1902), que fue particularmente violenta, siguió un período en el que las tasas de homicidios fueron bajas¹. De 1937 a 1947 las tasas anuales de homicidios se ubicaron entre 7 y 11 por cien mil habitantes. Cifras semejantes a Bulgaria y Escocia. Entre 1948 y 1965 se presentó el período de La violencia y sus secuelas posteriores. Las tasas anuales llegaron a 39 por cien mil habitantes en 1952

¹ Este hecho ha sido descrito por numerosos analistas de la historia colombiana: Bushnell (1992), Deas (1995), Gaitán (1995).

y a 46 en 1958; y descendieron a 22 por cien mil habitantes en los setenta. Esta última aunque alta no hubiera permitido alcanzar un lugar tan sobresaliente en la escala mundial, según Gaitán sería semejante a la que han tenido recientemente Ecuador, Jamaica, Estonia y Rusia.

La tasa anual de homicidios comenzó a ascender nuevamente en la segunda mitad de los años setenta y llegó al máximo de 86 por cien mil, en 1991; mucho más alta que la máxima observada durante La violencia, la mayor de la historia en Colombia. Posteriormente bajó a 56 en 1998, una cifra aun muy elevada bajo cualquier comparación internacional (Montenegro y Posada, 1995). En conclusión, la existencia de largos periodos con bajas tasas de homicidios prueba que la violencia no ha sido un fenómeno permante en la vida colombiana, según este reporte de Gaitán. Aun con guerras civiles y los episodios de violencia, Colombia fue un país relativamente normal hasta principios de los setenta. Después de todo, las guerras civiles, los alzamientos, revoluciones y el desarrollo tardío de la justicia han caracterizado la historia de casi todos los países. El caso colombiano sobresale por el incremento explosivo de las tasas de homicidios en los últimos decenios.

Gaitán, Montenegro y Posada insisten en que la violencia de los últimos años ocurre con especial intensidad en algunos sitios del país donde tienen mayor incidencia los grupos armados (mafias, guerrilla y paramilitares) y, más importante aun, que la autoría de los homicidios corresponde a un pequeño grupo de personas, profesionales del crimen, y no a la gran mayoría de los colombianos. Estos trabajos, en síntesis, sostienen que las tasas de homicidios del país muestran una gran heterogeneidad, algo que no se presentaría si se diera la supuesta generalización y difusión de la violencia.

Otro enfoque que trata el origen del conflicto es el de las llamadas 'causas objetivas'. Según esta visión, que recibe la influencia de una variedad de doctrinas, entre ellas marxistas, la conducta violenta es una respuesta a una sociedad profundamente injusta y excluyente. Dice, concretamente, que la raíz de este problema en Colombia es la pobreza, la desigualdad económica y social, la falta de gasto público y el abandono estatal de regiones apartadas (ausencia del Estado). En el plano de lo político, la causa objetiva es la exclusión que supuestamente lleva a amplios grupos de la sociedad a buscar la realización de sus aspiraciones políticas por métodos violentos, frente a los cuales, según los defensores de esta tesis, el Estado responde con represión y persecución (Montenegro y Posada, 2001). El informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) resume varios puntos de vista sobre esta tesis. Afirma que la violencia hunde sus raíces en las características de la sociedad colombiana y no sólo la ejercen los pobres, sino que también es usada entre ellos. De acuerdo con esta visión, para terminar con la violencia sería preciso transformar a la sociedad misma: hacerla más justa, igualitaria, democrática y menos excluyente.

Sin embargo, las estadísticas y resultados de autores que contradicen la tesis de las causas objetivas no encuentran relación cuando se trata de explicar, por ejemplo, uno de los nuevos estudios sobre violencia y conflicto en Colombia, el de Sánchez y Núñez (2001), después de analizar econométricamente los datos de 700 municipios, encontró que entre el 6% y el 12% de las diferencias en las tasas de homicidios entre los municipios más violentos y menos violentos están explicadas por las variables socioeconómicas (pobreza, desigualdad) y por las llamadas condiciones objetivas (exclusión política, falta de acceso a la educación). La diferencia restante (cerca del 90%) está explicada por la presencia de actores armados (paramilitares, guerrilleros), por la ineficacia de la justicia, por la intensidad

del narcotráfico y por la interacción entre actores armados y el narcotráfico. Al respecto tanto Rubio (1999) como Echandía Castillo (1999) insisten en la diversidad geográfica de las conductas violentas y en su contracción en ciertas regiones donde actúan agentes violentos. El primero plantea que “casi la totalidad (93%) de los homicidios registrados en Colombia en 1995 ocurrieron en municipios en donde se ha detectado la presencia de alguno de los tres principales grupos armados que operan en el país”. Echandía, por su parte, señala una creciente concentración de homicidios en los municipios donde coexisten la guerrilla y la producción de cocaína; y que en el país se viene dando una convergencia hacia una violencia que en su mayor parte es ejercida por los grupos armados, profesionales en el uso de la violencia. Esta es la hipótesis que más se allega a las explicaciones del origen de los conflictos en la nueva guerra.

Por otra parte, no parece convincente sostener que el aumento de la violencia y el escalamiento del conflicto en los últimos veinte años han sido forzado por un incremento de la exclusión social y el recorte progresivo de los espacios de la democracia en el país. Por lo menos así lo justifican los estudios econométricos, como los de Sánchez y Núñez (2001), que hallan que las variables que miden la exclusión política (según porcentaje electoral) tienen un papel bastante reducido en la explicación de la violencia de 700 municipios en Colombia. En este sentido, fue precisamente en estos mismos años cuando se desmontó el sistema del Frente Nacional y se realizó una reforma constitucional (1991) que recogió las aspiraciones políticas que se le quisieron acoger, y fue también durante estos últimos veinte años cuando varios gobiernos intentaron las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas, en propósito de que el establecimiento colombiano estaba dispuesto a introducir nuevas reformas, tanto en lo económico como en lo

político, para consolidar su vinculación pacífica a la vida política y social del país.

De todos modos, vale la pena decir que las anteriores teorías, en parte, pueden llegar a explicar el conflicto y la conducta violenta de sus actores en el conflicto colombiano, sin embargo, las causas de la ola violenta y conflictiva de los últimos años en Colombia exige un análisis adecuado a sus propias peculiaridades y características. Esta explicación debe ser diferente al argumento de las causas exclusivamente políticas, la teoría de la elección racional del individuo, las causas objetivas de la violencia y demás episodios violentos de la historia del país. El consenso que se ha ido formando en los nuevos estudios plantea que el fenómeno violento y la guerra tienen su origen en varios fenómenos mutuamente relacionados: las particularidades del desarrollo de algunas economías de frontera, el desplome de la justicia, el consecuente aumento de la impunidad y el impacto del narcotráfico. Este argumento es el que retoma este trabajo para explicar en gran parte el origen del conflicto, ya que es el que en mayor medida se acerca al concepto de nueva guerra.

Desde finales de los años ochenta numerosos analistas comenzaron a observar que los niveles más altos de violencia en algunas regiones apartadas donde precisamente se estaban dando una alta productividad de productos primarios (coca, petróleo, banano, esmeraldas y oro). Por ejemplo, Jesús Antonio Bejarano (1987) explicó la relación existente entre el aumento de la violencia y el auge de numerosos cultivos de la agricultura comercial. Posteriormente Fernando Gaitán (1995) mostró que los niveles más elevados de las tasas de homicidios se presentaban en municipios pequeños, con salarios relativamente altos. Especialmente donde se producía banano y esmeraldas. Montenegro y Posada (1995) encontraron una relación

proporcionalmente directa entre crecimiento económico de los distintos departamentos y el aumento de sus niveles de tasas de homicidio, hecho que para los autores refleja el fenómeno de la economía de frontera y los efectos del narcotráfico. El resultado de estos trabajos refutó la tesis de que la violencia y el conflicto debían encontrarse en los sitios más pobres y apartados.

Al mismo tiempo, otros estudios revelaron que la violencia se asociaba en forma inversa, y no directa como sugieren las causas objetivas, a los cambios en la pobreza. Los análisis estadísticos indicaban que las mayores cifras de homicidios se presentaban precisamente en las regiones que se beneficiaban con un fuerte crecimiento económico y notables aumentos de riqueza (Montenegro y Posada, 1995; Sarmiento y Becerra, 1998).

Recientemente el aumento de la violencia y conflicto en las zonas económicamente más dinámicas, aquellas que producen bienes primarios, ha sido gracias al fenómeno del “pillaje” que financia el equipamiento y la movilización de grupos armados, como la guerrilla y los paramilitares (Collier y Hoeffler 2001). Rangel también explica cómo a través de la extorsión, el secuestro, los impuestos y las distintas contribuciones forzadas los grupos violentos tienen relaciones predatorias, parasitarias y simbióticas con la economía en sus zonas de influencia (Rangel, 2000). En el capítulo cuatro de este trabajo se hallará un examen más profundo acerca del aprovechamiento de los recursos de la coca en la guerrilla y el subsecuente aumento de su capacidad militar. Mientras tanto, los distintos observadores mencionados coinciden también en afirmar que sin el apoyo del narcotráfico no habría sido posible el espectacular incremento reciente del paramilitarismo en Colombia.

Otro aspecto en que prácticamente todos los recientes estudios insisten es que el aumento de la violencia de los años anteriores está relacionado con el

desplome de la justicia en el país. Malcom Deas y Fernando Gaitán concluyeron que la debilidad de las instituciones, reflejada en buena parte en la impunidad y la debilidad del aparato judicial ha permitido un desborde de todo tipo de delincuencia y actos rebeldes (Deas y Gaitán, 1995). De acuerdo con Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada los departamentos más violentos son aquellos en los que el sistema judicial era menos eficiente. Rubio, también explica que ha sido el debilitamiento de la justicia colombiana la que ha permitido el avance de la impunidad y el crimen. Además, las principales causas del exceso de violencia en Colombia frente a otros países, fuera del narcotráfico, han sido los bajos niveles de castigo de los criminales. El capítulo tercero de este trabajo aborda este tema.

En general, estos estudios plantean que las instituciones no operan en el vacío, sino que son deformadas profundamente por el narcotráfico y la propia violencia, un tema al que la literatura de la nueva guerra de Kaldor le ha prestado enorme atención. El impacto del narcotráfico fue fundamental en el surgimiento y la prolongación de la ola de violencia de mediados de los años setenta a principios de los noventa y según los estudios mencionados, el desarrollo del narcotráfico inhibió el ejercicio de la justicia en las distintas regiones del país.

Lo importante de estas distintas interpretaciones de la violencia y la guerra es la forma como afectan, en primer lugar, la forma en la cual se establecen relaciones con los alzados en armas; por tal razón Rafael Pardo sostiene que cuando se adopta el punto de vista de las causas objetivas el gobierno llega a negociar con sentimiento de culpa, dudando de su propia legitimidad y aceptando, de entrada, los puntos de vista de los rebeldes sobre su apelación a la violencia. Con esta visión, según Pardo, la sociedad termina

suministrándole a los violentos el discurso ideológico para legitimar y justificar sus acciones (Pardo, 2001).

En segundo lugar, si se piensa que la violencia y la guerra son consecuencias de una sociedad injusta y excluyente, en las negociaciones se buscará pactar una transformación total de la sociedad colombiana. La creación de una sociedad ideal ya no sería una meta de los colombianos alcanzable mediante procesos democráticos, sino de un grupo de negociadores, algunos de ellos con una escasa representatividad del resto del país. Desde esta óptica lanzada por Montenegro y Posada la superación del conflicto armado y la vinculación de los guerrilleros al proceso político y social será un objetivo secundario (Montenegro y Posada, 2001). Por último, la aceptación de la cultura de la violencia, entendida como una falla estructural de la sociedad y un defecto generalizado de los colombianos, induce al fatalismo, al derrotismo e impide la construcción colectiva de soluciones a los problemas nacionales, según estos mismos autores.

Para concluir esta mención sobre los nuevos estudios acerca de la violencia y el conflicto en Colombia hay que recalcar que sus tesis tienen, de una forma u otra, un elemento en común: el explosivo desarrollo del narcotráfico en los últimos veinticinco años que ha situado a Colombia, en comparación con otros países, en un lugar desfavorable sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos son más atrasados y más injustos que el colombiano y, sin embargo, son menos violentos y conflictivos.

1.5 COLOMBIA EN EL MARCO DE LA NUEVA GUERRA

La nueva guerra vista como un fenómeno con una dinámica propia prescrita de manera exclusiva para las particularidades de cada conflicto, brinda para el caso colombiano un marco de referencia que explica en buena parte como se ha llevado la confrontación a un plano que no se había visto antes en ningún lugar del mundo, ya que, si bien se ven masacres y hechos violentos en otros países, los cálculos y la búsqueda de maximización de efectos a mínimos costos (armas no convencionales, por ejemplo) hacen la diferencia en este caso. Tampoco importan los efectos colaterales ni los daños a la sociedad civil.

Por las anteriores razones este trabajo retoma el concepto de la nueva guerra para explicar el conflicto en Colombia, apartándose del modelo de la guerra clásica, ya descrito principalmente con Clausewitz, por varias razones. Primero, porque dicho conflicto ya no está supeditado en la causa, y fin, exclusivamente a la política sino a una amplia gama de objetivos, incluyendo el de la guerra como un fin en sí mismo. Segundo, porque la relación entre el ámbito político soberano y el poder militar se invierte, al menos parcialmente. Tercero, porque la frontera entre los combatientes y la población civil se ha hecho difusa. Cuarto, porque las reglas sobre como conducir la guerra se rompen sin miramientos (Waldman, 1999: 27-44).

Es tal vez esta última razón, la progresiva metamorfosis de la guerra, ahora sujeta a pautas de exclusión que no reconocen la legalización del conflicto, lo que en mayor capacidad ha obstaculizado la comprensión y el análisis de la lucha en Colombia. La irregularidad de la guerra se ha hecho evidente para sus actores en el uso de las armas, o del terror, para sacar el mayor

provecho posible del estado de anarquía existente. Por todo lo anterior este trabajo intenta traducir las connotaciones violentas del conflicto colombiano a partir de los siguientes aspectos:

1. Lo decisivo en la época de La violencia (partidista liberal-conservadora) fue la consolidación de los métodos usados en ese período como formas de acumular riqueza y controlar en forma efectiva a la población civil, ya que organización, formas de reclutamiento y métodos de conquistar territorialidad fueron heredadas de esta época. Hoy subsiste la expropiación y el uso indiscriminado de la violencia, no sólo con el fin de obtener ventajas estratégicas sino económicas perdurables. Proliferan redes de organizaciones armadas y delictivas.
2. El uso de tecnificación en la organización armada para fines políticos, territoriales y económicos, así como el uso de la violencia sistemática para ganar el control de la población que siembra la amenaza e incertidumbre en todos los niveles de la sociedad.
3. La guerra en Colombia ha desechado algunos aspectos relacionados con la política del conflicto armado por el fin de la Guerra Fría y la aparición del proceso de globalización. Ahora los grupos ilegales participan de forma activa en la nueva economía global que los convierte en actores dentro de la geopolítica actual. Ya no se trata de rebeldes armados o de grupos al margen de la ley que enfrentan a un Estado o a un gobierno que consideran ilegítimo, sino de organizaciones armadas con fuertes vínculos con la economía mundial, que se han beneficiado en forma notable de las nuevas oportunidades de intercambios transnacionales, y de tributación sobre esas actividades, ya sean legales o ilegales. Desconocer esta situación ha llevado a seguir pensando que el conflicto armado en Colombia es el resultado de una combinación perversa de irracionalidad,

pobreza, instituciones débiles y poco crecimiento económico (Salazar y Castillo, 2001).

A partir de las anteriores premisas, se intentará enmarcar la lucha colombiana dentro de las categorizaciones sobre el concepto de la nueva guerra, aunque habrán ciertos elementos que no encajen en esta teoría, pero que pueden explicarse como consecuencia o motivante del mismo conflicto. Por ejemplo, en casi todos los conflictos que se amoldan a las características que Mary Kaldor desarrolla en la teoría de la nueva guerra la autoridad estatal y todos los símbolos del poder constitucional se derrumbaron, al punto de sufrir de una ausencia de Estado y de gobernabilidad democrática, pero tal extremo no ha sido el caso de Colombia. En palabras de Eduardo Posada Carbó... “el Estado colombiano, a pesar de sus imperfecciones, es representativo de amplios y significativos sectores de la sociedad nacional en niveles que marcan contrastes notables con quienes le disputan tal autoridad. Su legitimidad se pone periódicamente a prueba, y por lo general se renueva en esos ciclos electorales que limitan de cualquier forma el mandato democrático de sus sucesivos gobiernos. El Estado colombiano no es nuevo. Tampoco me parece acertado aplicar la noción del ‘Estado Colapsado’ a la experiencia colombiana. A pesar de sus problemas, el Estado funciona y a veces con extraordinaria eficiencia...” (Carbó, 2001: 35).

En ese sentido, es necesario reconocer que no se cumplen todas las condiciones requeridas para decir que el Estado se ocupa plenamente de la protección de sus ciudadanos, y que hace falta su presencia en vasta parte del territorio, sin embargo esto no implica que no impere el Estado como tal. Colombia no clasifica dentro de la categoría de un Estado colapsado caracterizado por el derrumbe de sus instituciones. Según Antonio Bejarano la democracia colombiana no es la mejor de las democracias posibles, pero

en cualquier caso tiene unos fundamentos de legitimidad que no son comparables con los de la guerrilla (Bejarano 1995:38). Sin embargo las organizaciones y redes comprometidas en las nuevas guerras no siempre provienen de Estados fracasados. También se consolidan como nodos en los países avanzados y en regiones económicamente estables.

Por estas razones, si bien en Colombia no se puede afirmar que existe tal colapso del Estado como característica del concepto de la nueva guerra, existen otros elementos que si le dan al conflicto del país las particularidades de lo que es la nueva guerra. Por ejemplo, en Colombia la guerra ha comprendido elementos de la guerra revolucionaria y de la contrainsurgencia, tomando de la primera la estrategia de dominar el territorio mediante el control político, más que arrancárselo a las fuerzas enemigas. Desde luego, la ideología que era importante para las revoluciones emancipadoras deja de tener importancia frente a la adhesión de etiquetas. Para Mary Kaldor ésta es la razón por la que el principal método de control territorial sea el desplazamiento y la eliminación de todos los posibles rivales. Y de la segunda, asume como suyas las técnicas de ‘envenenamiento del mar’, propia del brazo contrainsurgente, que crea un entorno desfavorable para todos aquellos que no puedan controlar (uso del terror, asesinatos selectivos, etcétera).

Como versión extrema de la globalización, esta autora identifica este tipo de guerra como causante del deterioro de la producción por abandono del Estado, por destrucción física o por aislamiento de los mercados debido a los combates y bloqueos. En Colombia, como en el resto de países con este tipo de guerra, el conflicto convierte los efectos secundarios, indeseables e ilegítimos de las viejas guerras en esenciales en la forma de lucha. Sobrevive con gasto estatal desproporcionado, desempleo y acrecentamiento de

fuentes de financiación inusuales como la extorsión, el secuestro, los bloqueos económicos e impuestos de guerra y protección. El tráfico de drogas y armas, y la violación de leyes como actividades criminales proporcionan una buena partida de ingresos a los distintos grupos actores del conflicto.

A nivel macroeconómico en el incipiente nacimiento de los grupos armados al margen de la ley en Colombia que necesitaba pocos recursos logísticos, económicos y de armamentos se ha pasado a una dinámica propia que le exige inmensas cantidades de recursos. Como cualquier otra colectividad, es una guerra que le resulta costosa a los contendores, independientemente de sus intenciones iniciales, o de sus motivaciones actuales. En el libro de Mary Kaldor, *Nuevas Guerras, Violencia organizada en la era global*, el análisis de la motivación económica de la guerra se destaca por la evaluación financiera alrededor de la obtención de recursos, característica aplicable al caso colombiano. Confirmando esta perspectiva, Mauricio Rubio hace una evaluación en la última década y destaca que se ha hecho en el país un esfuerzo considerable por entender y cuantificar las finanzas de la guerrilla.

Este último autor plantea que si se elimina una pequeña fracción de financiación proveniente de fondos públicos, se puede decir que las fuentes de recursos de los grupos armados son básicamente dos: las que se derivan de las actividades de secuestro y extorsión y, por otro lado, el cobro de impuestos a los cultivadores de coca. Siendo la primera de ellas menos costosa en términos de recaudación y administración, se explica en buena parte por qué es un procedimiento altamente difundido en la práctica guerrillera. La capacidad de un actor violento de mantenerse en su actividad se encuentra estrechamente ligada con su capacidad de extraer tributos, así

como de los costos administrativos que implica esta recolección, según Kaldor.

En términos generales, la guerra en Colombia proporciona validez a diversas formas criminales de enriquecimiento privado necesarias para sostener el conflicto, ya que las partes enfrentadas necesitan una lucha más o menos permanente para reproducir sus posiciones de poder y poseer acceso a los recursos. La inversión de esos recursos obtenidos mediante secuestros, extorsión y pillajes va, tras el excedente de armas resultado del final de la guerra fría y la terminación de los conflictos centroamericanos, a ser un medio de tratamiento de residuos militares, una manera de aprovechar los remanentes no deseados de armas en la mayor acumulación militar de la historia. El objeto central de la guerra, en la definición de Kaldor es el control del territorio que está en las zonas bajo el dominio revolucionario en regiones remotas del país, a las que la administración central no tiene acceso.

Ante la ausencia estatal, la destrucción física de los contrincantes y el aislamiento de los mercados, las principales fuentes de ingresos para los autores de la guerra son la redistribución de bienes existentes, el robo, el saqueo, la extorsión y la toma de rehenes o secuestro. Otras formas de transferencia de bienes son la presión del mercado mediante bloqueos, la producción y venta de drogas y la instauración de 'impuestos de guerra'.

Autores como Paul Collier (2000) manifiestan que la rebelión en las guerras es más bien "una forma de delincuencia organizada en aras de la depredación de las actividades económicas productivas". El estudio de este autor analiza un vasto número de conflictos y guerras civiles recientes, entre las que se cuenta Colombia; emplea una base de datos desde el año 1965 a

1999, y hace una correlación para interpretar su permanencia. Los resultados dictaminan que la pobreza es estadísticamente insignificante, mientras que el flujo de exportaciones básicas o primarias, geografía, bajos ingresos promedios y bajo crecimiento del país; composición étnica y religiosa, territorio extenso e historia de conflicto así como, población joven iletrada y fácilmente reclutable son variables de suma importancia en la existencia de dichas guerras.

Según Collier, las percepciones populares son moldeadas por el discurso que los propios actores del conflicto generan, pero en realidad los bandos antagónicos de la guerra no dan explicación de sus acciones. Más bien se esconden bajo una letanía de quejas contra el gobierno, por la opresión, la inequidad y tal vez por violentar a un sector de la población que su organización dice representar. Su lenguaje es el recurso extremo de la violencia por la gravedad extrema de las condiciones que 'su' pueblo padece. Es mediante este discurso del descontento como se entienden las causas del conflicto; pero el autor sostiene que son las organizaciones rebeldes las que generan deliberadamente ese sentimiento.

Para esta teoría económica del conflicto no hay otro lenguaje más que la manifestación extrema de delincuencia organizada. La rebelión es una depredación en gran escala de las actividades económicas productivas porque lo que le importa a la organización armada es que se pueda sostener financieramente. Esto, y no cualquier razón objetiva de inconformidad es lo que determina que un país presencie una guerra civil. La organización puede encontrar cualquier razón para luchar, pero sólo podrá hacerlo si para ellos es financieramente viable en el desarrollo del conflicto. La depredación puede no ser el objetivo principal de los rebeldes, pero si es el medio para financiarlo, y la factibilidad de la depredación es lo que determina los riesgos de que surja el conflicto. Según este argumento, en realidad no importa si los

alzados en armas encuentran un motivo en la codicia, las ansias del poder estatal o el descontento, lo que da pie al conflicto es su factibilidad.

Para terminar puede decirse, a partir de estas ideas, que en Colombia los rebeldes se han beneficiado de un entorno socioeconómico donde estaban disponibles recursos y conocimientos susceptibles de ser rentabilizados por los insurgentes en beneficio de la sofisticación de sus operaciones, pero esto no quiere decir que el marxismo y las ideologías de izquierda no hayan permeado como ideología a su organización. De hecho, ha sido el lenguaje político a través del cual la organización aprendió a analizar la realidad y formular sus mensajes políticos, más allá de ser una ideología orientadora de estrategia guerrillera. No obstante, la guerrilla nacional puede ser identificada más cercanamente con la representación de populismo latinoamericano que a la retórica de la doctrina revolucionaria marxista-leninista (Bejarano: 1995).

Finalmente, bajo las directrices de la nueva guerra que se enuncian en este capítulo, para el análisis del conflicto armado colombiano, la síntesis de la siguiente página presenta un marco conceptual que encierra las principales diferencias en las pautas que dictan la visión clásica de la guerra y el concepto de los nuevos conflictos.

Cuadro I: Viejas guerras vs nuevas guerras

Las viejas guerras en Clausewitz

Disputa *entre* Estados o coaliciones de Estados

Luchas que proporcionaron los recursos fundamentales en la formación de las naciones-Estado modernas a través de los impuestos y la disciplina militar

Continuación de la política nacional del Estado como último recurso en la solución de conflictos

Actividad social de objetivos geopolíticos definidos en el marco político del Estado

Ejércitos estatales organizados con unidad de mando y jerarquía militar. Estrategias encaminadas a copar el territorio a través de medios militares

Codificación de las leyes de la guerra

Financiación que depende de la economía interna del país

Las nuevas guerras en Mary Kaldor

Guerra globalizada, sin fronteras ni bandos estatales *al interior* de los Estados

Surgen en el contexto de la fragmentación militar, la exclusión, la anarquía y corrupción que debilita los Estados acrecentando la crisis de su legitimidad

Estado de violencia descentralizado y generalizado en manos de organizaciones políticas privatizadas y criminales

Aspectos de lucha enmarcados por disparidades ideológicas, étnicas, raciales o tipos de administración política que necesita un país

Actores de lucha dispares que recogen la experiencia de la guerra de guerrillas y guerra contrainsurgente y ocupan territorio a través del control de la población por medio del terror

Violación de las leyes de la guerra

Financiación que depende de mercados negros: tráfico de armas, drogas, petróleo o diamantes. Funciona dentro de la economía globalizada de la guerra.

2. LA NUEVA GUERRA Y LOS ACTORES ARMADOS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA

El conflicto interno armado colombiano nació dentro del contexto de la guerra fría, aunque con un conjunto de causalidades y peculiaridades de orden interno que no admiten afirmar que sea simplemente uno más de los conflictos expresivos de la confrontación Este-Oeste de ese momento histórico. Extinta la bipolaridad el conflicto colombiano persistió y ahora tiende a escalar militarmente, aunque algunos aspectos de orden externo como consecuencias de la guerra fría influyeron en la marcha de la lucha en Colombia. La llamada 'doctrina de la seguridad nacional', la revolución cubana y la ruptura política chino-soviética son algunos de estos aspectos.

En el orden interno, influyeron desde el comienzo la democracia restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no resuelto, la radicalización de sectores de la juventud, especialmente estudiantiles en los sesenta, los remanentes de las guerrillas liberales de la anterior violencia y las tendencias al radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente petrolera. Este es un reconocimiento necesario en la medida en que se ha dado en los últimos tiempos una tendencia a presentar el conflicto interno armado como ligado exclusivamente al narcotráfico, y a partir de allí deducir que la lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla es la misma cosa y que el conflicto interno armado se resuelve si se logra 'derrotar' al narcotráfico.

En la Colombia actual hay un conflicto interno armado que tiene ya casi cuatro décadas de vigencia, en proceso creciente de profundización. En esta situación inciden la presencia de actores armados que recurren a la

utilización sistemática de la violencia como recurso para solucionar conflictos o conseguir objetivos de diverso tipo, y factores de orden estructural que hunden sus raíces en el contexto histórico del país y que han dado como resultado estructuras socioeconómicas y políticas excluyentes para una buena parte de la población. Dentro de los factores de orden estructural, el analista Alejo Vargas (2000), destaca la persistente tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos políticos, las estructuras de exclusión, socioeconómicas, políticas y regionales, y la cultura política autoritaria refractaria hacia algunos comportamientos democráticos. También aparecen otros factores particulares que van a ayudar a la reproducción de la confrontación: el narcotráfico y los cultivos ilícitos, que se vuelven fuentes de rentas para la financiación de la guerra, el colapso del aparato de justicia como elemento de regulación de las conductas sociales y la disparada de la impunidad, la pérdida de la confianza como valor social de cohesión y las conductas delincuenciales y corruptas asociadas a la gestión del Estado; siendo estos últimos factores los más relevantes al caso colombiano desde la visión de la nueva guerra.

En términos generales, es altamente posible que el desarrollo del conflicto en Colombia, según Vargas, siga la dirección de los cambios que se deriven del énfasis de la política norteamericana en relación con Colombia, más que de la modificación de percepciones por parte de los actores insurgentes. Para este autor, muy seguramente la guerrilla va a continuar concibiendo lo sucedido el 11 de septiembre y la cruzada antiterrorista global como algo transitorio y que finalmente no afecta el caso colombiano y continuará convencida, no sólo en términos discursivos sino también en su práctica, que la particularidad y las características endógenas de la guerra interna en Colombia pesan más que los factores de orden externo.

2.1 LA GUERRA COLOMBIANA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

En Colombia el conflicto tiene una larga historia y ciertas particularidades en relación con las dinámicas globales que demuestra su evolución en los últimos tiempos como proceso de intensificación, ampliación y degradación.

En el mundo, por ejemplo, uno de los aspectos distintivos de las guerrillas colombianas con respecto a otros casos como en el Salvador, Malasia, Filipinas o el Perú, es su largo periodo de gestación. Alfredo Rangel (2001) revela en este sentido un panorama temporal bastante objetivo de cómo han pasado casi veinte años hasta mediados de los ochenta, desde que la guerrilla colombiana se originó en la época de La Violencia de los años cincuenta hasta el inicio de su etapa de desarrollo.

Para el autor en mención, el largo periodo de presencia guerrillera en el escenario nacional es el elemento que en Colombia ha coadyuvado a su pausado, pero sólido fortalecimiento en regiones marginales del territorio, y a que su dispersión por zonas más esenciales no haya sido percibida como un semillero considerable de riesgo. Según Rangel, el proceso expansionista del movimiento armado ilegal inició en un periodo de fortalecimiento a partir de los años ochenta tras aprovechar el casi total abandono del Estado en las regiones rurales, mientras que guerrillas como las de Salvador se consolidaron en el momento de iniciar su ofensiva final. Sendero Luminoso, en el Perú, llevó a cabo sus primeras acciones contra la infraestructura electoral y desde ahí rápidamente aceleró su evolución para confrontar al Estado. Y en otros escenarios, tanto los huks como la guerrilla de Malasia brotaron durante la penetración de los japoneses y ya desterrados, iniciaron

la disputa guerrillera contra sus correspondientes Estados, sin permanecer en vigencia por más de diez años.

En palabras de Alfredo Rangel, en Colombia cuando un frente guerrillero quiere radicarse en un área parte de observaciones de inteligencia, análisis de la seguridad, presencia de delincuencia, relación policías-habitantes, evaluación de los recursos económicos, actividades e ingresos importantes de los principales ricos. Posteriormente hace presencia armada en la zona y con el análisis preliminar de la región busca instalarse en el apoyo de la población y constituirse en parte importante del asentamiento económico. Realiza operaciones de 'limpieza social' y acciones efectivas contra la delincuencia para de esta manera lograr ganar una sensación de seguridad entre la población, así como cierta ventaja de eficiente administradora de justicia frente al Estado. En tales circunstancias, para Rangel queda manifiesto que la guerrilla colombiana ha logrado un avance en sus últimos quince años de vida debido a que ha podido diseñar y articular estrategias en los campos de lo económico, político y militar.

En términos económicos de la guerrilla también es importante la evolución en su eficiencia para mantener y fortalecer su financiamiento, pues conseguir recursos económicos dentro del propio país le ha proporcionado consolidar una estructura organizacional lo suficientemente eficaz como para recaudar, gastar e invertir recursos económicos provenientes del secuestro, extorsión y pillaje de la forma como se mencionó en el capítulo anterior. El producto básico de explotación son las drogas, aunque no de manera exclusiva; el petróleo, el carbón, el oro y el banano también figuran en los renglones tributarios de subversivos y paramilitares. No es exactamente en las zonas más pobres del país donde estos grupos florecen. Las explicaciones locales

están familiarizadas con la relación entre bonanza, migración y subversión. (Montenegro y Posada, 1995).

Rangel identifica el interés de las FARC de relacionarse con el narcotráfico y el ejercicio de funciones estatales a partir del monopolio de la fuerza, la justicia y el tributo como elementos que le han conferido un reconocimiento como autoridad. Como organización guerrillera han trabajado desde sus inicios en este sentido, y hoy se reconoce que tiene sus orígenes en los contendores agrarios de los conflictos predominantemente sectarios entre liberales y conservadores de la década de los cuarenta y cincuenta; campesinos que se alinearon bajo la pequeña facción moscovita del Partido Comunista colombiano aprovechando una nueva forma de financiación externa proveniente del bloque comunista y que políticamente les brindó una salida representativa a su movimiento fuera de los partidos tradicionales. Tuvieron su origen en 1964, como un mecanismo de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina.

Durante los últimos 40 años han crecido hasta tener un pie de fuerza de aproximadamente treinta mil hombres y han multiplicado sistemáticamente el número de frentes, utilizando métodos en los cuales la popularidad y la capacidad de persuasión política no son fundamentales. Sus recursos ya no provienen del campesinado (Rangel, 1999).

El segundo grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue en sus orígenes un foco conscientemente castrista y conformado en su mayoría por grupos estudiantiles. Surge como una concepción política que se desplazó de la ciudad al área rural buscando su campo de acción militar. Con número de hombres muy inferior al de las FARC, se ha especializado en secuestros masivos y la destrucción extorsiva de la infraestructura petrolera y

eléctrica, quizá no con el fin de inutilizarla o ensombrecer al país, sino para mantener su estatus de jugadores importantes en el conflicto armado y las posibles negociaciones de paz. Sus acciones se hallan utilitarias, funcionales y calculadas, a la vez que con una relación bien definida entre medios y fines, lo cual hace prever una lucha más prolongada (Peñate, 1999).

La Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional -UC-ELN- surgió en 1965 en el departamento de Santander como un proceso de radicalización de algunos sectores estudiantiles, militantes en la izquierda, con el fin de cambiar las formas de poder que entusiasmados con la revolución cubana no encontraban representación en los movimientos políticos legales.

El Ejército Popular de Liberación -EPL- tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde al auge de las exportaciones de la fruta creó un férreo conflicto social. Otros grupos guerrilleros que surgieron en las décadas de los setenta y ochenta, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, y posteriormente se convirtieron en movimientos o partidos políticos, como el Movimiento 19 de abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el movimiento Quintín Lame. A pesar de las diferencias de trayectoria, política e ideología, los grupos guerrilleros persistentes (Farc y Eln) conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1985. Ante el surgimiento del movimiento guerrillero y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló para los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay.

Para Fernando Cubides, aunque la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente damnificados (Cubides, 1997). Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado comenzaron a ser formados bajo los parámetros de la doctrina mencionada y la aplicación de los métodos de combate propios de conflictos de baja intensidad: la eliminación del enemigo interno e insurgencia (Peñate, 1999). Así, en el marco de dicha estrategia, según Fernando Cubides, y a comienzos de la misma década, el gobierno se dio a la tarea de conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista".

Sin embargo, desde el terreno de la opinión pública muchos se han opuesto llamar guerra civil al conflicto interno, pues hallan que esta denominación usualmente denota correlación entre una mayor politización y un nivel superior de participación popular a favor de un bando u otro. Es así que en las numerosas encuestas sobre popularidad llevadas a cabo en Colombia, el lugar que ocupa la guerrilla es inclusive inferior al de los políticos; los grupos guerrilleros no obtienen más que 1% de opiniones favorables. Para muchos sus acciones son detestables, son la expresión de la violencia que en mayor medida distingue al país del resto de las sociedades contemporáneas. Colombia aparece como el líder indiscutible en materia de secuestro no sólo regional sino mundial².

² Las FARC y el ELN realizan entre el 10 y 15% de los secuestros anuales que se ejecutan en todo el mundo. Desde la década pasada estas cifras ya se perfilaban; al respecto ver el estudio de la revista Latin Trade detallado en el periódico El Tiempo, edición del 27 de octubre de 1996, p. 22a.

En efecto, entre los diez países que en la actualidad darían cuenta de más del 90% de los secuestros en el mundo, la tasa colombiana es cinco veces superior a la de la segunda nación en lista, México, y alcanza casi cincuenta veces el promedio de todos los demás países. El pago de rescate ha sido un ejercicio privado convertido en uno de los principales elementos de refuerzo del conflicto. Todo lo anterior permite a la guerrilla sostener sus finanzas dentro de una estructura eficiente y estable de economía de guerra que le facilita el desarrollo de las estrategias que el conflicto necesite a futuro. Su autonomía y fortalecimiento ya no depende tanto de factores externos, de terceros ni del apoyo popular como si lo requería un actor en las guerras pasadas pues, recordando a Clausewitz, el éxito del objetivo político (la pasión popular y los instrumentos operacionales) depende de la voluntad del pueblo para apoyarlo o sufrirlo.

Para Alfredo Rangel este último punto resulta ser un importante diferencial con relación a los otros grupos guerrilleros mencionados, como el de la insurgencia salvadoreña que dependía resueltamente de ayudas externas para financiar sus actividades bélicas. En el Perú, Sendero Luminoso nunca consiguió el apoyo externo ni desarrolló una estrategia flexible y efectiva para obtener a nivel interno los recursos financieros necesarios para costear una guerra de dimensiones importantes en términos militares contra el Estado peruano. La precariedad de su armamento y la dotación de su fuerza de combate eran extremas, y el uso del terrorismo buscó compensar su fracaso en la conformación de un ejército irregular, según Rangel. Su fundamentalismo no les permitió aprovechar eficazmente su presencia en las zonas cocaleras para recolectar recursos, como sí lo ha hecho con éxito la guerrilla colombiana. Para Rangel, narcotráfico y guerrilla en el Perú no consiguieron alianzas sino disputas del control territorial.

Otro aspecto que resalta Rangel es que a nivel militar las guerrillas colombianas han logrado articular estrategias de centralización y subvención del esfuerzo bélico en una dirección conducente a acaparar la cordillera oriental. Han venido cumpliendo de manera lenta pero sin pausa, lo que en principio se propusieron como sus proyecciones estratégicas militares. Sus intenciones van más allá del asentamiento y control de zonas estratégicas, pues busca extenderse a lugares sin aparente importancia económica y militar que les concederá el principio esencial de una buena estrategia militar como lo es la libertad de movimiento (Rangel, 1999). La estrategia guerrillera no ha sido bien interpretada, para este autor. Sólo cuando el Estado logre una cabal comprensión del problema insurgente que enfrenta y encare el asunto en toda su dimensión e importancia puede estar en condiciones de diseñar una estrategia política y militar con resultados positivos. Este punto, desde la visión clásica que se mencionó en Karl Von Clausewitz, es el supremo acto de juicio, la primera de todas las cuestiones estratégicas y la más comprensiva para la guerra porque para entender la verdadera naturaleza de ella, se requiere de una definición previa y acertada del contrincante. Según esta apreciación, entonces parte de las insuficiencias del combate del ejército nacional colombiano contra la guerrilla tendrían su origen en las falencias a la hora definir a su enemigo.

2.2 CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DEL CONFLICTO COLOMBIANO

En Colombia uno de los factores constantes en tan larga serie de problemas es el régimen de participación política y económica descentralizado de las regiones en la organización del Estado. Una reciente investigación de la

Universidad de los Andes (Sánchez, Díaz y Fomisano, 2003) señala que en el siglo XIX el enfrentamiento fue, la mayoría de las veces, explícitamente entre los partidarios del modelo federal y los modelos centralistas, y se tradujo en la aprobación de ocho cartas constitucionales diferentes. La primera adoptada en 1811 tenía un neto carácter federal y la última promulgada en 1886 era esencialmente centralista. La Constitución del 86 fue reformada por lo menos en 35 oportunidades durante el siglo XX, hasta que en 1991 una nueva carta declaró a Colombia una República Unitaria pero descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales. Los investigadores afirman que es difícil entender cómo un país con esta trayectoria histórica, que en la fase de consolidación del capitalismo moderno tuvo -caso único en América Latina- la ventaja de contar con un conjunto de regiones dinámicas distintas a la capital, haya mantenido las políticas regionales en una condición subalterna y marginada.

En la historia política, desde el siglo XIX, después de la guerra de la independencia (1810-1819), estallaron en Colombia ocho guerras civiles generales, catorce regionales y en sus postrimerías una contienda asoladora que se prolongó por tres años (la Guerra de los Mil Días, 1899-1902). El siglo XX empezó, entonces, bajo el signo de la guerra civil, lo cual, entre otros factores, condujo a la secesión de Panamá (apoyada por Estados Unidos) en 1903. Después de medio siglo de relativa tranquilidad, a partir de los años de 1950, el país ha persistido en un estado casi permanente de alteración del orden público.

Sobre estos antecedentes los investigadores concluyen que en la construcción de un aparato de administración eficaz para la nación se ha enfrentado la geografía montañosa, de jungla y ríos; e historia política plagada de permanentes enfrentamientos entre los dos movimientos políticos

tradicionales que incapacitaron el proceso de consolidación de la estructura estatal que se quería emplazar con una mínima dosis de legitimidad y que trataba de independizarse de los caciques locales y los caudillos (Ramoneda, 2001). La guerra civil de 1948 a 1957 fue la culminación de estos enfrentamientos que sumergieron al país en 'la época de La Violencia'. Por ende, geografía e historia política coincidieron en imposibilitar el asentamiento del Estado en áreas de difícil acceso. Estos lugares donde la implantación de la administración central ha sido débil o inexistente fueron la cuna de poderes superpuestos que encontraron las condiciones apropiadas para su surgimiento, porque es desde aquellas áreas al margen de la influencia del gobierno donde han sido exitosas las operaciones de los grupos ilegales insurgentes que empezaron a aglutinarse cada vez más. Por ello parte del éxito de estos movimientos fue consolidar una base de apoyo social que correspondía a las funciones estatales, tales como orden público, prestaciones sanitarias, educación, entre otras (Rangel, 2001).

En cierta medida, la aparición de organizaciones de corte *paramilitar* de derecha también fue resultado de esta debilidad estatal, ya que la creciente presencia de la guerrilla en ciertas áreas del país y su política de extorsión contra terratenientes y propietarios de riqueza estimuló la formación de grupos armados privados. Para Camilo Echandía (1999), el surgimiento y expansión de las autodefensas no son más que el efecto visible de la puesta en marcha de la capacidad de reacción de las víctimas. Respecto a esta afirmación un ejercicio estadístico de Mauricio Rubio (2001) señala que para la década pasada los determinantes de la presencia paramilitar en los municipios muestra que un factor que ayuda de manera significativa a

discriminar a los municipios con tal tipo de influencia es, justamente, el indicador de altos secuestros en un territorio³.

Operativamente, las organizaciones paramilitares no sólo imitan las formas de acción de la guerrilla, sino que han diseñado técnicas de terror para controlar en forma efectiva a la población que le sirve o puede servir de apoyo a los guerrilleros. Por su parte, la guerrilla está ante la disyuntiva de imitar el comportamiento de los paramilitares y adoptar la estrategia de castigar y aterrorizar a la población civil desafecta o dudosa, o de buscar la destrucción militar rápida del enemigo. Respecto a este punto el trabajo de Boris Salazar y Maria del Pilar Castillo (2001) ofrecen un amplio análisis.

Al escenario de conflicto en la guerra de Colombia se suma la interacción del aparato estatal armado. En su momento, el interés de algunos militantes del ejército para llevar a cabo operaciones de 'guerra sucia' les llevó a participar en la confrontación de grupos de defensa privados dando lugar al surgimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Ortiz, 1998). En términos políticos las Fuerzas Armadas han revelado descontento y discrepancia entre la negociación y la guerra sin cuartel. En el ámbito operativo se suman fragmentaciones entre las unidades desplegadas a lo largo del país que obedecen a los superiores jerárquicos en Bogotá, y a la vez a las gratificaciones de protección que empresas poderosas les ofrecen⁴. A pesar estas contradicciones que reflejan desestabilidad y se traducen en tensiones en el panorama público, no se puede afirmar categóricamente que el ejército colombiano se ha desmoronado.

³ Para el año de la estimación, 1997, la consideración de la causalidad en el sentido inverso, secuestros por parte de los paramilitares, no parece tener asidero. Según datos de País Libre, los secuestros han estado siempre más concentrados en la guerrilla, y sólo hasta el año 1998 se empezaron a registrar este tipo de secuestros, aún de forma infrecuente.

⁴ Los problemas de mando y control de las fuerzas destinadas a la protección de multinacionales petroleras no son nuevos (Salazar y Castillo, 2001).

A decir verdad, en el interior de los demás actores armados también hay fragmentación. La guerrilla del ELN ha dejado ver liderazgos regionales fuertes que mantienen posiciones distintas en aspectos claves de su proceder e ideología. También los paramilitares, a pesar de sus esfuerzos de cooperación, no consiguieron procesos de unión duraderos en dicho movimiento; mientras en las FARC se mantiene una estructura de poder militar que reprime las escisiones.

A todos los actores del conflicto se suma el narcotráfico que, como protagonista, políticamente ha tenido un papel ambiguo y ha respaldado de forma permanente o circunstancial a grupos armados de izquierda o derecha según sus acciones coincidan con sus intereses, ha profundizado el conflicto no sólo porque su negocio en sí implica violencia, sino también en la medida que ha proporcionado fuentes financieras a los rebeldes y conexiones con el mercado negro de armamentos (Echandía, 1999).

También los altos niveles de delincuencia común que han acompañado la violencia política en Colombia, que son resultados del clima de desorden e impotencia generalizado del Estado, son otro aspecto que empeora la situación de conflicto. Si bien la violencia no tiene orígenes ideológicos, esto no se traduce en que no genere consecuencias en el ámbito de lo político. Desde la década de los noventa se observa una intensificación de las conductas criminales directamente asociadas con el conflicto, como las masacres, los actos terroristas y los secuestros. Según la Defensoría del Pueblo para la década pasada, en el año 1999, se presentó el mayor número de masacres de todo el período, prácticamente más de una por día. El número de denuncias de secuestros por habitante se triplicó, los atentados contra la libertad de las familias en las encuestas de victimización se

multiplicaron por cerca de 10 y el reporte de actos terroristas aumentó en un 86%⁵.

En datos, la evolución del conflicto en la década de los noventa, que es para el tiempo que se encuentran la serie de datos más completos, se destacan las herramientas estadísticas que ha trabajado Mauricio Rubio (2001). Dentro de la amplia gama de indicadores posibles para determinar su significancia en el conflicto, fue más factible para el estudio del autor citado unificarlos a nivel de municipio. Esto con el fin de explicar satisfactoriamente el indicador de presencia municipal de la guerrilla para distintos momentos de la pasada década.

Entre los principales factores de significancia estadística de las variables, según el orden de importancia que destaca Rubio está:

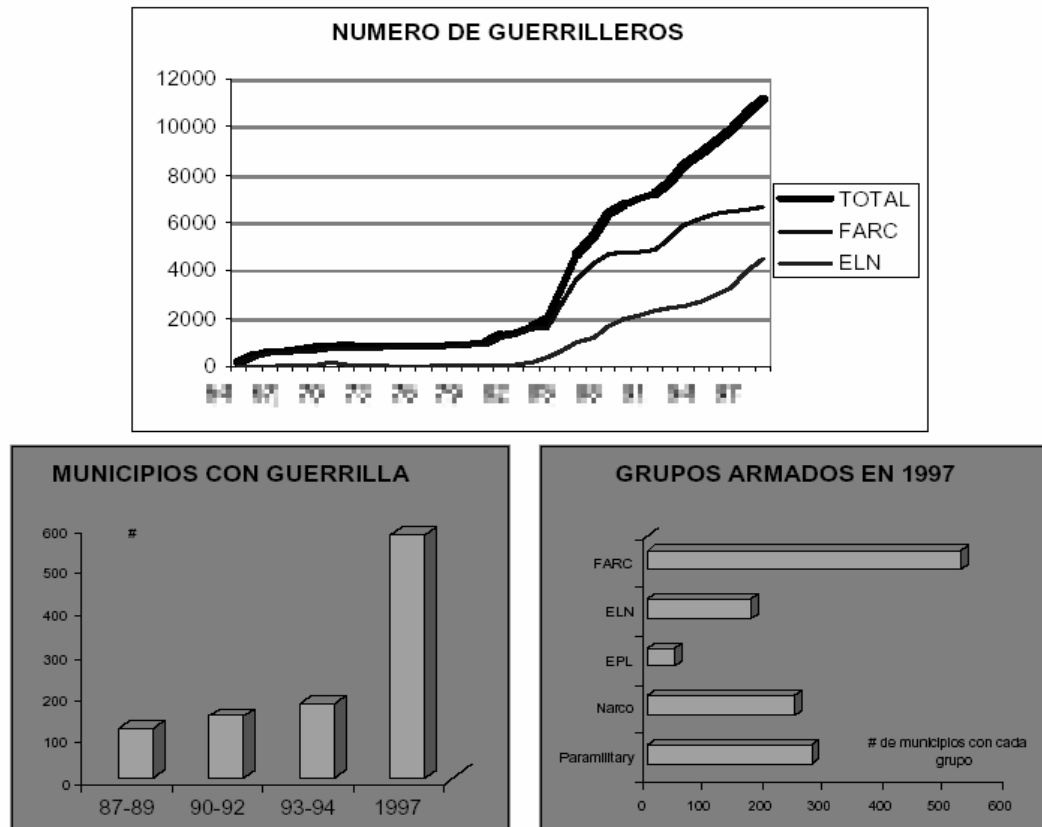
1. La edad promedio de la población del municipio (La juventud de los habitantes aparece como el factor que en mayor medida favorece la presencia de la guerrilla en una localidad)
2. El bajo índice de participación política (o la politización de los habitantes de un municipio)
3. La proporción de personas con educación secundaria (en una asociación negativa)
4. El tamaño de la población y las poblaciones con mayores niveles de desarrollo (asociado positivamente con la presencia de la guerrilla)
5. El índice de calidad de vida (que es signo inequívoco de disponibilidad de recursos)
6. Indicadores de finanzas públicas municipales (a mayores ingresos fiscales, mayor probabilidad de presencia guerrillera)

⁵ Revista semana, edición 938. Abril 24 a mayo 1 del 2000.

7. El indicador de desigualdad en las condiciones de vida (a mayor desigualdad, mayor probabilidad guerrillera)
8. El número de estaciones de policía por habitante (con signo negativo, a mayor presencia de la Policía Nacional, menor la probabilidad de presencia guerrillera)
9. El índice de masculinidad (entendido como la proporción de hombres entre la población, con signo positivo)
10. La proporción de población con educación universitaria (que entre mayor es la proporción de gente con educación superior en un municipio mayor es la probabilidad de presencia de la guerrilla)
11. Indicadores de desempeño de la justicia penal (con un efecto estadísticamente significativo en que a mejor funcionamiento de la justicia penal hay asociación negativa con la presencia de la guerrilla)

La consideración estadística que determina la regresión de Rubio enfatiza en la medida en que estos factores de riesgo iniciales contribuyen a explicar la expansión de la guerrilla durante los noventa. Así encontró que la probabilidad de que en un municipio libre del predominio de la guerrilla aparezca dicha presencia aumentó sustancialmente, incrementándose del 10% a principios de los noventa a cerca del 50% en el año 2000 (FIGURA 1).

Figura 1: Expansión de grupos armados subversivos en los noventa



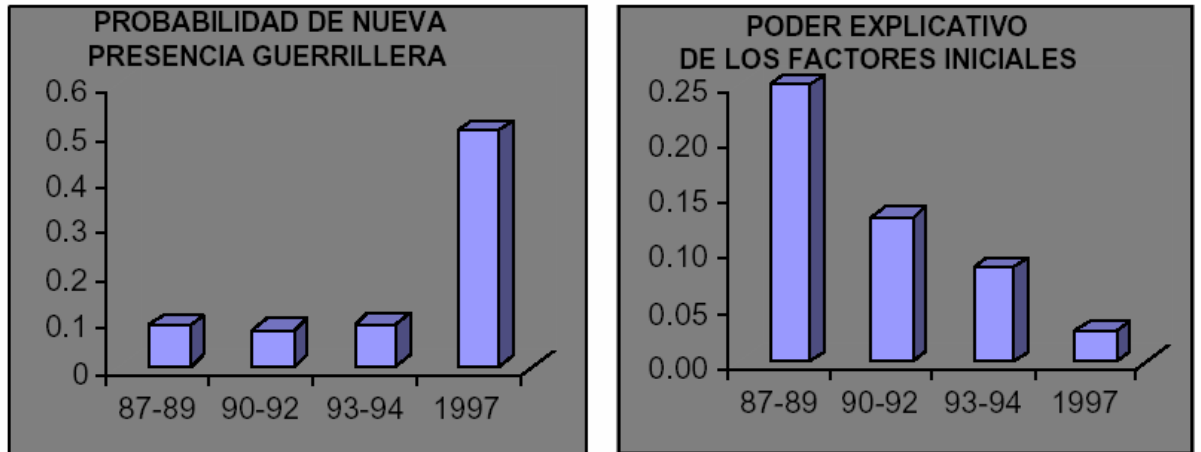
Consejería para la Paz - Inteligencia Militar

Fuente: Consejería para la Paz – Inteligencia Militar (Rubio, 2001)

En esta gráfica se observa que hay una tendencia a permanecer estable el número de hombres en la guerrilla hasta el año 1997, momento a partir del cual se acelera dicha tendencia, posiblemente debido al aumento de fuentes de financiación del narcotráfico.

Como consecuencia del incremento suscitado por el aumento de hombres para 1997, se evidencia un incremento en los municipios con presencia guerrillera, especialmente en las filas de las FARC (FIGURA 2).

Figura 2: Expansión del conflicto y relevancia de sus causas iniciales

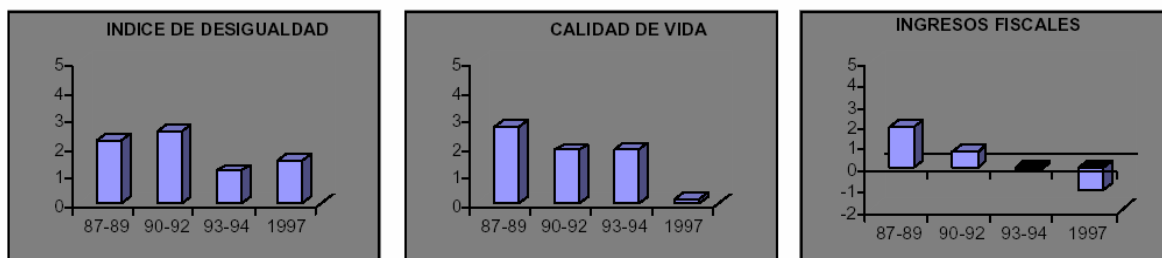


Fuente: Consejería para la Paz – Inteligencia Militar (Rubio, 2001)

De acuerdo con los datos disponibles en el registro de Rubio, durante los noventa el total de efectivos de los grupos insurgentes aumentó en un 60% y el número de municipios con presencia guerrillera se quintuplicó para llegar a más de la mitad del total. En cerca de una cuarta parte de las localidades se reportaba en el 97 la presencia de grupos paramilitares y en otro tanto la de narcotraficantes.

En cuanto al poder explicativo de las causas objetivas para Deas y Llorente (1999), algunos índices como el de la desigualdad o el de ingreso de la población, disminuyeron a lo largo de la década. Sin embargo, el señalamiento de Camilo Echandía (1998) expresa que los territorios con alta población joven y desigualdad creciente presentan mayor riesgo de verse envueltas en la confrontación armada (Figura 3).

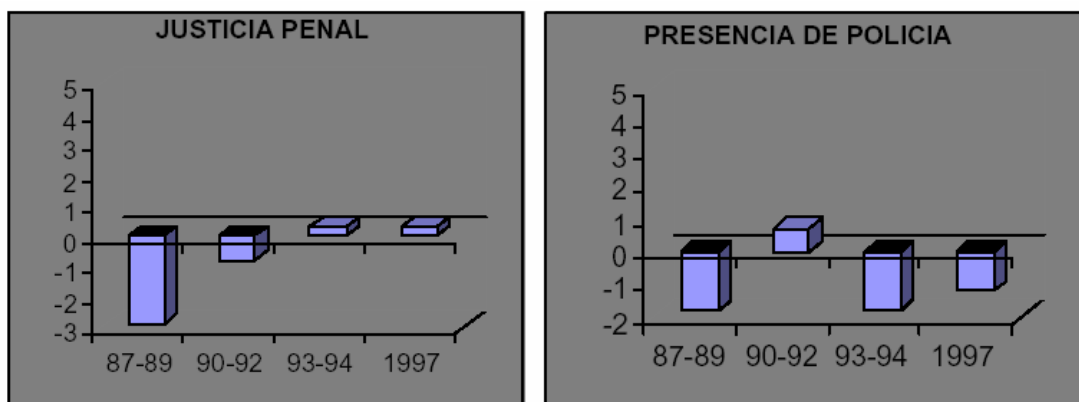
Figura 3: Poder explicativo de las causas objetivas



Fuente: Consejería para la Paz – Inteligencia Militar (Rubio, 2001)

En el nivel explicativo para los indicadores disponibles del poder de disuasión del Estado, también se observa una tendencia decreciente para explicar la influencia de la guerrilla en los municipios (FIGURA 4).

Figura 4: Poder disuasivo del Estado



Fuente: Consejería para la Paz – Inteligencia Militar (Rubio, 2001)

Pese a las inferencias anteriores, existen otras variables que a pesar de su tendencia decreciente conservan cierta capacidad explicativa, que son la edad promedio de los habitantes y el grado de urbanización de los municipios medido por el tamaño de su población. Para el final del período

analizado por Rubio, las únicas variables que contribuyen, en cierta medida, a la explicación de la nueva presencia guerrillera en los municipios se suman significativamente dos aspectos, las características demográficas de la población y la desigualdad.

Los resultados del estudio de Rubio sugieren que en la década del noventa el conflicto colombiano se mantuvo de lo que la realidad económica, social y política le brindó, y fue gracias a esto que adquirió dinámica propia. En palabras de Waldmann y Reinares, esto sucede porque este tipo de guerra se alimenta generalmente de sí misma. Desenganchada de sus orígenes y causas iniciales, desarrolla una dinámica propia cuyo propulsor principal lo constituye una violencia liberada de las ataduras políticas (Waldmann y Reinares, 1999: 87).

Collier y Hoeffler también indican que la pérdida de valor de las causas iniciales en los conflictos actuales se presenta porque los factores que determinan que surja un conflicto terminan desviándose y convirtiéndose en otros elementos que explican por qué el conflicto se mantiene y perdura. Así, para Waldmann y Reinares, la guerra deja de ser un medio para el logro de unos objetivos definibles e iniciales, para constituirse en el fin mismo, escenario que coincide con la característica de fortalecimiento de los grupos guerrilleros y de paramilitares en el conflicto colombiano y que se ajusta a la dinámica propia de la nueva guerra (Echandía, 1998).

Por otra parte, Colombia ha sido un país con más territorio que Estado. La ineficiencia de sus instituciones ante la extensión del territorio ha hecho posible la colonización espontánea y no regularizada, y el asentamiento de grupos subversivos en buena parte de su territorio. A finales de la década de los años sesenta y comienzos de los setenta surgen los primeros grupos guerrilleros que al cabo de cuarenta años se transformarían en los

contrincantes más representativos del Estado y que, según Alfredo Rangel, le disputarían la soberanía sobre parte del territorio (Rangel 2001a). En la gestación y posterior fortalecimiento de estas organizaciones revolucionarias han convergido una numerosa y compleja cantidad de factores de orden histórico, político, económico y social donde, sin duda alguna, la conformación y la extensión del territorio también ha sido un factor de gran influencia en la persistencia y en las modalidades de desarrollo de esa insurgencia en Colombia.

En este sentido, Rangel dice que en Colombia las guerrillas se establecieron en sus inicios en zonas apartadas, montañosas y selváticas donde la acción represiva del Estado era muy difícil de materializar y donde, con gran conocimiento del terreno, aprovecharon esta posición para instalar sus primeras bases de apoyo. Territorialmente la guerrilla tendría una expansión simultánea en dos sentidos, de un lado, la consecución de recursos económicos para respaldar la expansión militar; y el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los planes políticos y militares para la toma del poder. Ese fortalecimiento se respaldaba por la obtención de considerables recursos económicos, para lo cual los frentes guerrilleros se volcaron sobre las actividades económicas más dinámicas y que, al mismo tiempo, durante la década de los años ochenta, se estaban abriendo paso en regiones no integradas del todo a la vida nacional. De hecho, la guerrilla aprovechó de manera muy competente la aparición casi paralela de una serie de actividades económicas altamente productivas -unas legales, otras ilegales- en sectores primarios de la economía ligados al mercado externo. Para fortuna de la guerrilla, estos puntos de alta productividad se ubicaron en zonas con muy precaria presencia estatal y cobertura institucional insuficiente.

2.2.1 Los escenarios de la guerra.

La geografía que cubre el conflicto no cubre homogéneamente ni con la misma intensidad el territorio de Colombia. La presencia de la confrontación armada es altamente diferenciada de acuerdo con la dinámica de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica y vinculación a la economía nacional y global.

En un importante trabajo sobre la evolución reciente de los actores de la guerra (González, Bolívar y Vásquez, 2001), las condiciones geográficas y demográficas no determinan necesariamente la elección de los actores y grupos sociales por la violencia, han sido factores que han hecho viable la elección voluntaria de grupos que decidieron, en una circunstancia histórica determinada, que la acción armada era la salida ideal posible para los problemas de la sociedad.

La dinámica del conflicto armado suele seguir un direccionamiento geográfico que a menudo pueden entremezclarse y reforzarse. El analista Teófilo Vásquez diferencia en este sentido una *dinámica macrorregional* que se expresa en la lucha por corredores geográficos, que permiten el acceso a recursos económicos o armamento, lo mismo que el fácil desplazamiento desde las zonas de refugio a las zonas en conflicto. Señala un eje del conflicto que parte del norte del país (Córdoba, Urabá antioqueño y chocoano) más o menos controlado por las Autodefensas, y se proyecta hacia Antioquia (Nordeste y Bajo Cauca) hasta el Magdalena Medio (sur de Bolívar, del Cesar y Barrancabermeja), donde persisten algunos reductos del Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que tratan de recuperar el territorio perdido. En cambio,

el Sur Oriente, (piedemonte de la cordillera oriental, y parte de la Orinoquia y Amazonia) han sido tradicionalmente zonas más o menos controladas por las FARC (Vásquez, 2001).

Más recientemente, según Vásquez, en el Sur Occidente se está consolidando un nuevo corredor geográfico, que corresponde a un eje que parte de la antigua zona del despeje, donde no se presentaba actividad militar durante los últimos tres años, y se proyecta hacia el sur del Huila, norte del Tolima, los límites entre Tolima y Valle (páramo de Las Hermosas) los límites entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, buscando la salida al Pacífico y aprovechando la colonización campesina de las regiones del cañón del río Naya y la Costa Pacífica.

Además de esta lucha por los corredores, Teófilo Vásquez identifica que la confrontación armada obedece a veces a una *dinámica mesorregional*, centrada en la lucha por el control dentro de regiones que refleja la confrontación entre áreas más ricas e integradas, o en rápida expansión económica y zonas campesinas de colonización campesina periférica al margen de los beneficios de las zonas en expansión. Así, los enfrentamientos en el Catatumbo, Arauca y Casanare, en la frontera con Venezuela, pueden leerse en esta perspectiva: la lucha por el control de los recursos provenientes de las regalías petroleras o de los sembradíos de coca, la “tutela” armada sobre las respectivas administraciones locales y el manejo “clientelista” de sus dineros (Peñate, 1999). Y, por último, buena parte del conflicto se mueve en una dinámica más *microrregional*, que refleja la lucha dentro de las subregiones, localidades y sublocalidades.

Esta diferenciación regional del accionar de los actores armados muestra que las dinámicas de violencia se entienden mejor si se abandona la imagen inflexible del modelo de Estado colombiano y se enfatiza en las diferentes

formas como sus aparatos hacen presencia en las regiones y localidades, lo mismo que en los diferentes tiempos en que esta presencia se articula con los poderes que surgen en ellas (González, Bolívar y Vásquez, 2001).

Así, la diferenciación regional y temporal de la violencia que destacan estos autores hace evidente que la construcción del Estado es el resultado de un proceso diferenciado y gradual de integración territorial y social que pasa por la articulación creciente pero desigual de los poderes locales y regionales entre sí con la burocracia del Estado central. Esta diferenciación regional de la presencia del Estado se expresa en distintos tipos de relación con las sociedades locales y regionales. La tesis de Vásquez expresa que esa articulación del Estado colombiano con los poderes de hecho, existentes en regiones y localidades, explica por qué éste no logra imponer claramente su control en todo el territorio nacional: su dependencia de los partidos tradicionales como subculturas que fragmentan la simbología de la unidad nacional y como federaciones de poderes locales y regionales es parte de la explicación de su precariedad, entendida como cierta “falta de distancia” frente a las fuerzas sociales realmente existentes. También explica la dificultad de los aparatos del Estado para hacer presencia en las zonas donde no se han consolidado todavía esos poderes locales o donde estos micro-poderes se construyen al margen o en contra del bipartidismo.

En la suposición de validez de esta hipótesis habría lugar a concluir con Camilo Echandía que las guerrillas, particularmente las FARC, han venido diversificando su tipo de presencia según las características de cada región: las zonas de colonización periférica donde surgieron se han convertido en zonas de refugio, mientras que las zonas donde se consolidaron significativamente antes de 1985 se consideran zonas para la captación de recursos, quedando los municipios donde actualmente buscan expandirse

como áreas de confrontación armada, por lo cual la mayoría de los actuales conflictos no se localizan ahora en las zonas de mayor pobreza rural⁶. Esta nueva geografía de la presencia guerrillera respondería a un propósito estratégico, que significaría pasar de su ubicación original en la periferia del sistema económico para afectar la actividad agropecuaria central en las zonas más dinámicas. La expansión guerrillera sería entonces el producto de una hábil combinación de la acción militar y la estrategia de terror como presión sobre la población civil con la inserción en zonas de profundas desigualdades sociales donde se da una rápida expansión económica al lado de zonas de colonización campesina tradicional, o en zonas como la cafetera, que han experimentado un notable deterioro de sus condiciones de vida, antes más favorables, o en poblaciones rurales de minifundio andino cercanas a las ciudades.

Esta hipótesis reafirmaría el sentido militar desestabilizante que destaca el concepto de nueva guerra en el conflicto colombiano. Se combina así una ideología marxista-leninista y una concepción extremista de la política (en la versión estalinista y agrarista de las FARC y guevarista de pequeña burguesía universitaria en el ELN) con las tradiciones clientelistas propias de la cultura campesina y las percepciones de exclusión social de jóvenes rurales y campesinos, reforzadas recientemente por su capacidad de inserción en las economías de la coca y amapola.

⁶ La mayor parte de los hechos violentos no se localiza actualmente en las zonas rurales más pobres sino en las zonas de rápida expansión económica, donde existen bolsones de población campesina sin acceso a la nueva riqueza y donde las instituciones del Estado se ven sobrepasadas por las tensiones producidas por ese contraste (Bejarano, Echandía y otros, 1997).

2.3 EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL CONFLICTO

2.3.1 Las lógicas territoriales.

La compleja dinámica territorial del conflicto obedece a lógicas que se están confrontando en términos de expansión territorial que indican desarrollos históricos diversos e implican una cierta cercanía a modelos diferentes de desarrollo y crecimiento rural, así como a la diversa relación de las regiones con los aparatos del Estado central, regional y local.

En esta dirección, Fernando Cubides anota que guerrillas y paramilitares operan en una especie de contravía, pues las guerrillas nacen en zonas periféricas de colonización campesina marginal, en áreas de frontera (abierta o interna) de donde se expanden hacia zonas más ricas y económicamente más integradas al mercado nacional o mundial, que coexisten con conglomerados de colonos campesinos marginales y que están regulados por poderes locales y regionales semiautónomos frente a las instituciones y aparatos del Estado central (Cubides, 2001). Avanzan en primer lugar hacia zonas en rápida expansión económica y poca presencia institucional del Estado e igualmente coexisten con grupos de colonos campesinos que no tienen acceso a la nueva riqueza rápidamente creada en el área, ni a la regulación estatal de los conflictos sociales, que es suplida por las jerarquías sociales.

En segundo lugar, van hacia zonas campesinas anteriormente prósperas e integradas con cierta presencia institucional y bastante regulación social por parte de poderes locales y regionales, pero que empiezan a descubrir que su situación económica está decayendo, su cohesión y regulación social se está

resquebrajando y la presencia institucional del Estado está disminuyendo. El caso del eje cafetero, caracterizado antes por un campesinado próspero, de pequeña y mediana propiedad con buena cobertura de servicios públicos, gracias a la presencia de la antes poderosa Federación de Cafeteros, es un ejemplo. La crisis internacional de precios ha golpeado severamente a la Federación y al pequeño y mediano campesino, lo que crea un escenario favorable para la expansión guerrillera. Algo parecido ocurre en el minifundio andino deprimido en zonas cercanas a las grandes ciudades. Las guerrillas nacen en regiones periféricas, de colonización campesina, no articuladas todavía por el bipartidismo, aunque se proyectan luego hacia zonas más ricas e integradas, con una lógica extorsiva y militar (Echandía, 1999). En esas zonas donde no existen poderes locales consolidados y la presencia de los aparatos del estado es precaria, la guerrilla ejerce funciones de control policivo y de cohesión social, que le dan cierta soberanía de facto, que ahora son desafiadas por el avance paramilitar y contrarrestadas de alguna manera por los esfuerzos del ejército por recuperar la iniciativa militar en esas áreas.

En cambio los paramilitares nacen en zonas relativamente más prósperas e integradas al conjunto de la economía nacional o mundial, donde existen poderes locales y regionales de carácter semiautónomo ya consolidados o en proceso avanzado de consolidación, con elites que se encuentran extorsionadas o amenazadas por el avance guerrillero y se sienten más o menos abandonados por los aparatos e instituciones del Estado central, cuyas políticas modernizantes y reformistas amenazan con socavar las bases de su poder tradicional y cuyas negociaciones de paz son interpretadas como traición frente al enemigo común que deberían confrontar conjuntamente. Desde esas zonas el paramilitarismo se proyecta hacia las zonas más periféricas, con el apoyo de los poderes locales que se están consolidando en ellas, tanto en lo económico como en lo político.

En general, las zonas donde surgen los grupos paramilitares se caracterizan, por el predominio de poderes políticos de corte tradicional y la poca presencia directa de las instituciones y la burocracia del Estado central, que deja bastante autonomía a los poderes locales o regionales, consolidados o en proceso de consolidarse (Kaldor, 2001).

Esta diferente lógica de expansión territorial es la que indica cierta tendencia a la confrontación entre dos modelos contradictorios de desarrollo de la economía rural. Así en el Sur y Oriente del país, zona de frontera abierta, la coincidencia entre las zonas controladas por las FARC y las zonas de cultivos ilícitos desarrollados por campesinos cocaleros llevó a una alianza funcional entre éstos y esa guerrilla. Esta coincidencia llevó a los paramilitares a considerar al Sur del país como escenario central de su lucha contrainsurgente y militar (particularmente en el Putumayo). En las zonas de frontera interna, en el norte y centro del país, el modelo de desarrollo basado en el latifundio ganadero (por ejemplo, en la Costa Caribe) y la agricultura comercial compite con la economía campesina de los colonos.

De manera general y concluyente se puede decir hasta el momento que la guerra en Colombia se ha movido en los últimos años más en la lógica de la llamada 'guerra popular prolongada'. En efecto, en un país extenso se hace mucho más viable la aplicación de esta estrategia, puesto que el gobierno tiene muchas más dificultades en defender a la población en un territorio extenso que en uno reducido. En un país con una geografía muy amplia, el gobierno tiene grandes dificultades para concentrar sus fuerzas; la guerrilla lo sabe y trata de dispersarlas estableciendo frentes de combate y hostigamiento en sitios muy apartados unos de otros a lo largo y ancho de la geografía el país (Rangel, 2001). Esto quiere decir, que sus tiempos se

mueven en el mediano y largo plazo y su acción apunta a conservar y acumular sus fuerzas –cuantitativa y cualitativamente-.

El recurso clásico en los métodos de la guerra de guerrillas se mantiene en el marco de la nueva guerra: operar con pequeñas o medianas unidades, rehuir el combate cuando consideran que el adversario está más fuerte o preparado, recurrir a la estrategia ofensiva y posterior huida, acudir a la operación de pequeños grupos con misiones de sabotaje y terrorismo. Sin lugar a dudas este patrón accionario responde a la idea que se expone a lo largo de este trabajo en cuanto a que el análisis coyuntural del conflicto colombiano debe ser explicado desde la lógica de los nuevos límites bélicos del orden mundial donde la guerra clásica perdió vigencia y se redefine, ahora, bajo los nuevos parámetros de las identidades.

A partir de la ruptura del proceso de conversaciones entre Gobierno y FARC que adelantaba el gobierno Pastrana y desde el inicio del actual gobierno, con sus nuevas estrategias de ‘seguridad democrática’, han existido cambios, aunque no es claro el sentido estos, y por supuesto tampoco hay unanimidad en la interpretación de los mismos. Por ello se plantean a continuación algunos ejes en los cuales parecen estarse moviendo estas transformaciones, arriesgando en algunos casos hipótesis acerca del sentido de las mismas.

2.3.2 Evolución de las lógicas económicas y geográficas.

A partir de las hipótesis de algunos autores esta investigación sugiere que la aparición reciente de nuevos frentes guerrilleros y facciones paramilitares se

está produciendo principalmente en regiones con actividad económica dinámica o en zonas próximas a los centros de control administrativo y políticos de mayor importancia en el país (Echandía, 1999). Por supuesto, que esta expansión ha sido paralela al establecimiento en las zonas rurales y marginales donde se colocaron inicialmente, a mediados de los sesenta y setenta. No obstante, haber diversificado su presencia y aumentado su poderío militar, mantiene una elevada concentración geográfica de la actividad armada en las zonas periféricas. La expansión de la guerrilla hacia zonas urbanas con mayor potencial estratégico no ha mostrado el sustento accionario ofensivo y sostenido que requiere. La mayor capacidad militar guerrillera continúa estando en las zonas de implantación de los primeros núcleos guerrilleros, que son los lugares de donde obtienen sus fuentes de financiación más estables.

En el caso de las FARC, a partir de la séptima conferencia en 1982, se adoptó una estrategia de crecimiento basada en el desdoblamiento de los frentes existentes: se determinó entonces que cada frente sería ampliado a dos hasta conseguir la creación de un frente por departamento y para ello se prioriza la diversificación de las finanzas (Rubio, 2001). Un determinante financiero que hizo posible este aumento de frentes fue la coca en la primera mitad de la década de los ochenta. Se consolidan en Meta, Guaviare y Caquetá. Así mismo, las FARC se vinculan a esta actividad en los departamentos de Putumayo, Cauca, Santander y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En cumplimiento de las decisiones adoptadas en la séptima conferencia, las FARC, experimentan en los años ochenta modificaciones importantes. Comienzan a quedar inscritas en zonas que experimentaron transformaciones en la ganadería (Meta, Caquetá, Magdalena Medio,

Córdoba), o en la agricultura comercial (zona bananera de Urabá, partes de Santander, sur del Cesar), e incluso en zonas de explotación petrolera (Magdalena Medio, Sarare, Putumayo) y de oro (Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar). Así mismo, se fueron situando en áreas fronterizas (Sarare, Norte de Santander, Putumayo, Urabá) y en zonas costeras (Sierra Nevada, Urabá, occidente del Valle), explicable esto por su vinculación con actividades de contrabando.

En el caso del ELN, es también hacia comienzos de la década de los años ochenta cuando resurge y comienza a registrar un crecimiento significativo de sus frentes luego de la pérdida que sufriera en la derrota de Anorí en 1973. Como en el caso de las FARC, su crecimiento se deriva del fortalecimiento económico que se logró mediante la aplicación de la extorsión a las compañías extranjeras encargadas de la construcción del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, práctica que se constituye en su principal fuente de financiamiento. Luego, cuando la producción petrolera de Arauca comenzó, el "frente" Domingo Laín desarrolló hábiles esquemas clientelistas.

Se puede afirmar entonces que la expansión del ELN es especialmente significativa entre 1984 y 1986, coincidiendo con el hallazgo del pozo de petróleo de Caño Limón, la construcción del oleoducto hasta Coveñas y el inicio del bombeo de crudo. Indudablemente este proceso le permitió formar una base financiera que explica su muy rápido crecimiento. Posteriormente el ELN continuó ubicándose en áreas de extracción del crudo y siguiendo el recorrido del oleoducto (Peñate, 1999).

Por su parte, el Ejército Popular de Liberación, Epl, se concentró en la década del ochenta principalmente en zonas de desarrollo agroindustrial con énfasis en Urabá, viejo caldas, y en zonas de expansión de nuevos grupos

de terratenientes (Urabá y Córdoba). Según Peñate, amplió también su influencia en Antioquia y en zonas de Putumayo y Norte de Santander donde coexisten explotaciones petroleras y zonas de colonización. En los centros urbanos, tuvo alguna tradición desde la década del setenta en las ciudades, especialmente en Medellín. El Epl firmó con el gobierno de Belisario Betancur un acuerdo de cese al fuego en 1984, pero su accionar militar se reanudó a partir de la segunda mitad de 1985, después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y del asesinato de Oscar William Calvo. A partir de la captura de Francisco Caraballo y de 14 de sus líderes el grupo disidente ha venido decayendo. La persecución del ejército y la desertión de muchos de sus miembros han afectado seriamente la estructura armada. De los 13 frentes que operaban en 1995 solamente tres registraron alguna actividad en 1998. Hoy por hoy sólo hechos aislados dan señales intermitentes de vida de este grupo.

En resumen, aunque parece obvio que el conflicto ha tendido a expandirse con el paso del tiempo, no es fácil precisar “dónde” se ubica o “cuándo” llegó a determinada zona: las mediciones de incidencia o intensidad de la guerra son discutibles, los límites entre “regiones” son borrosos y la movilidad geográfica es connatural a los actores armados, pero si es evidente que la evolución de la geografía del conflicto colombiano muestra la forma en que éste se ha ido ampliando con el paso de los años. Para tales efectos Camilo Echandía (1999) dice que durante la década de los ochenta y principios de los años noventa la guerrilla logró dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, desdoblar frentes para ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia a nivel local. Las FARC y el ELN, no obstante haber diversificado su presencia, que ya no es exclusivamente rural y marginal, mantienen un elevado grado de concentración de su poderío militar en las áreas periféricas que les han

permitido constituir sólidas economías de guerra. En efecto, las estructuras armadas con presencia en zonas de cultivos ilícitos, enclaves agrícolas y explotación petrolera y minera, son las que ostentan mayor poder ofensivo.

2.3.2.1 Urbanización del conflicto.

Las guerrillas han variado su condición rural convirtiéndose en organizaciones que pretenden consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional incluso urbanas, y para ello han aplicado una estrategia que articula circunstancias económicas, políticas y militares. La guerrilla de hoy ha cambiado su manera de buscar el poder, sus formas de accionar militarmente, de movilizar sectores sociales y de conseguir las finanzas para subsistir como organizaciones armadas. La estrategia que ha puesto en práctica le ha permitido transformar buena parte del territorio nacional en teatro de la confrontación armada, con lo cual dispersa y disminuye la contundencia en la acción contra-insurgente de las FF.AA (González, Bolívar, Vásquez, 2001). Estos cambios sucedidos recientemente evidencian el enorme poderío militar alcanzado por la guerrilla, sustentado en el hecho de que ha encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez determinan su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra son inagotables.

La localización de las organizaciones guerrilleras, hasta aquí señalada, demuestra la existencia de propósitos estratégicos en el avance de la insurgencia. Ha logrado extender su presencia a los centros político-administrativos más importantes del país y muestra alta actividad en zonas

petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con importante actividad agropecuaria.

Alfredo Rangel, explica los impresionantes avances alcanzados por la guerrilla en la última década en función de las definiciones estratégicas en lo militar, en lo político y en lo económico, cuya implementación y articulación ha orientado sus líneas de expansión: Es así como en lo militar, la definición de áreas de despliegue estratégico y el desarrollo de campañas con objetivos específicos; en lo económico, la estructuración de planes de finanzas, de metas por frentes y, sobre todo, la explotación de las actividades económicas y las áreas de mayor potencial por medio de una gran creatividad y flexibilidad para sustraer parte del excedente económico; y finalmente, en lo político, la apelación metódica y sistemática al recurso del terror combinada con un cabal aprovechamiento de las inequidades sociales, de los desequilibrios regionales, del desempleo juvenil rural y de la precariedad del Estado, sobre todo en su potencial coercitivo y de justicia, para ganar apoyos forzados y voluntarios (Rangel, 1998).

Según este autor, a pesar de que la presencia del conflicto político armado desde sus orígenes en las organizaciones guerrilleras, estuvo más situado en el mundo rural, el mundo urbano no estuvo nunca ausente del mismo. Primero a través de las denominadas 'redes urbanas' de apoyo a los núcleos combatientes rurales, con acciones esporádicas de tipo comando en lo urbano; posteriormente con una nueva generación de grupos guerrilleros (M-19, ADO) con vocación y composición predominantemente urbana (a pesar de los intentos posteriores de creación de fuerzas guerrilleras rurales), que intentaron desarrollar la denominada 'guerra de guerrillas urbana' siguiendo los casos de Carlos Marighella en Brasil, los Tupamaros en el Uruguay y los

Montoneros en la Argentina que intentaban una operatividad política-militar del tipo comando y la generación de corrientes de opinión pública a su favor.

Ahora la situación del conflicto en Colombia, está ante el inicio de otro ciclo de violencia no claramente definido en término de sus prácticas, con raíces socio-políticas y económicas, pero esta vez con un marcado carácter urbano, como lo es mayoritariamente hoy día la población colombiana. Este nuevo ciclo de violencia ha tomado la modalidad de las denominadas organizaciones milicianas, con ubicación predominante en sectores urbanos periféricos y marginalizados y en las cuales predomina no la acción tipo comando del pasado, sino la búsqueda progresiva de control territorial barrial a partir de procesos de inserción social más o menos consensuales o coercitivos. Se trata de trasladar al mundo urbano periférico, la misma estrategia de control y dominio que se ensayó en el mundo rural.

Apartándose de las corrientes expuestas hasta el momento, en una u otra dirección, se puede concluir cómo las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones irregulares en Colombia se han venido modificando en función de los cambios experimentados recientemente en la confrontación armada. Por lo tanto, a pesar de que la ampliación de la capacidad militar operativa y de inteligencia del Estado ya ha mostrado resultados positivos en la lucha contra la guerrilla, difícilmente implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas exclusivamente por la vía militar.

De la misma forma como se ha modificado la dinámica del conflicto armado, los impactos de las actuaciones de sus protagonistas sobre la población civil también ha cambiado. La creciente magnitud de la violencia que los grupos paramilitares y las guerrillas dirigen contra los civiles es otra característica del conflicto colombiano inscrita en el concepto de Mary Kaldor sobre el *modus operandi* de los actores en nuevos conflictos.

3. IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

En las últimas décadas, primordialmente en los últimos años, han aparecido en la disciplina económica grandes esfuerzos orientados a introducir criterios de costos en la valoración de las implicaciones de la guerra en Colombia (Trujillo y Badel, 1998; Bejarano, 1990; 1997 y Montenegro y Posada, 2001). Los esfuerzos en este sentido surgieron en la búsqueda de variables que explicaran el estancamiento económico y los resultados desbordaron los alcances netamente económicos tomando ventaja en la explicación del impacto social del conflicto.

A pesar de lo anterior, ante la dimensión de los problemas que encarna una guerra como la colombiana, los adelantos en términos de su comprensión quedan rezagados ante el fenómeno violento creciente y sostenido que conlleva, ya que las incidencias de dicho fenómeno sobre la eficiencia productiva repercuten en las decisiones de inversión de capital físico, capital humano y capital social. La inseguridad afecta significativamente la formación bruta de capital y el crecimiento de la productividad; y en términos de distribución del ingreso y de la eficiencia económica hay un evidente impacto redistributivo negativo.

En las relaciones de la economía con la violencia, la inseguridad y el conflicto hay hipótesis que exponen las diversas direcciones en las que se orientan dichas relaciones. Unas, van desde el orden causal, es decir, de la economía a la violencia y escudriñan el desempeño de la actividad económica desde las condiciones de pobreza de la población, las necesidades básicas insatisfechas, la inequidad de la distribución del ingreso y las razones del

comportamiento y la racionalidad violenta (Bejarano, 1990). Otras, van del conflicto a la economía y señalan los costos directos de sufragar la seguridad y la pérdida de producto derivado de la alteración de las condiciones de desempeño de la actividad económica; así como las consecuencias indirectas del entorno que implica la inseguridad para el crecimiento económico y eficiencia de las actividades productivas.

Con el fin de definir las causas y las características de la relación economía-guerra en Colombia, se reúnen a continuación las interpretaciones de varios de los recientes estudios que están cuestionando las ideas tradicionalmente aceptadas, especialmente las del orden causal, que van de la economía a la violencia y el conflicto. Sus tesis indican que la abrumadora irrupción del narcotráfico -que se tratará en el próximo capítulo-; y el colapso de la justicia a partir de los ochenta y la dinámica de la violencia son factores primordiales para explicar el desenvolvimiento del conflicto, mientras que ciertos factores como la desigualdad y la pobreza tienen una menor suficiencia explicativa en la interpretación económica.

Uno de estos argumentos señala que es el aumento de la riqueza el que se asocia en mayor medida con la violencia y el conflicto porque el aumento vertiginoso y sostenido de algunas actividades en una sociedad abre la posibilidad para nuevas y diferentes oportunidades de conseguir mayores ingresos y emprender nuevos proyectos económicos. Sin embargo, si existe un fuerte atraso institucional, la reglamentación jurídica quedará rezagada ante la nueva coyuntura y no existirá la adecuada protección estatal, ni la definición natural de los derechos de propiedad sobre el trabajo y el capital. En tales circunstancias, será evidente la ineficacia del sistema de justicia y del aparato policivo y la ausencia de una normatividad clara y socialmente aceptada donde se ubiquen las nuevas actividades prósperas.

Este tipo de análisis ha sido expuesto por Collier (2000) y Collier y Hoeffler (2001) y claramente asocia el aumento de la violencia y las luchas conflictivas con crecimiento económico de despegue rápido y acelerada modernización, pero en medio de grandes desajustes institucionales porque, según sus autores, la velocidad de transformación de las actividades económicas, ante la gran rapidez del cambio económico-social rezaga las normas e instituciones sociales quedando excluidas de los acelerados cambios económicos. El fenómeno de la rápida expansión económica regional, que evoluciona en procesos mucho más rápidos que la capacidad del estado para hacer presencia en ellos, inspira el medio propicio para el establecimiento de actos criminales.

En Colombia, por ejemplo, la relación violencia-crecimiento se hace evidente en las economías de frontera, en los panoramas de prosperidad intensiva de las regiones apartadas que se han desarrollado súbita e intensamente gracias a la explotación de bienes primarios como el oro, el petróleo, las esmeraldas, el banano o la coca. Nuevas formas de producción generan sustanciales ganancias por las migraciones masivas, pero conllevan en sí mismas actos de defensa y justicia privada que estallan en olas de homicidios, gracias al surgimiento espontáneo del abuso y el robo propio de los procesos de colonización inesperados.

Aunque esta tesis se remonta a los decenios de los sesenta con Samuel Huntington y la influencia de clásicos como Smith y Marx, sobre la acumulación en las fases iniciales del capitalismo, el análisis de Paul Collier y Hoeffler es empírico y se concentra en el estudio estadístico de 78 países afligidos por guerras internas y encontró que la rebelión es más probable en las economías que dependen en mayor proporción de las exportaciones de bienes primarios, debido a que son actividades vulnerables al saqueo por

parte de los insurrectos para financiar sus actividades militares. Sin este pillaje las facciones revolucionarias no podrían financiar sus actividades violentas como en los casos de Sierra Leona y la financiación con diamantes; los separatistas chechenos en contra de Nigeria y Rusia por los recursos petrolíferos de la zona y en Colombia con el paramilitarismo y la guerrilla, que después de todo, pueden operar gracias a la financiación que obtienen principalmente de los negocios de la droga.

Alfredo Molano (1999) recoge en un estudio la experiencia que en este sentido ha vivido el oriente colombiano frente a la colonización alrededor de la producción de coca. Éste también ha sido el caso de la colonización antioqueña, de Urabá y otras regiones colombianas (Gaitán, 1995).

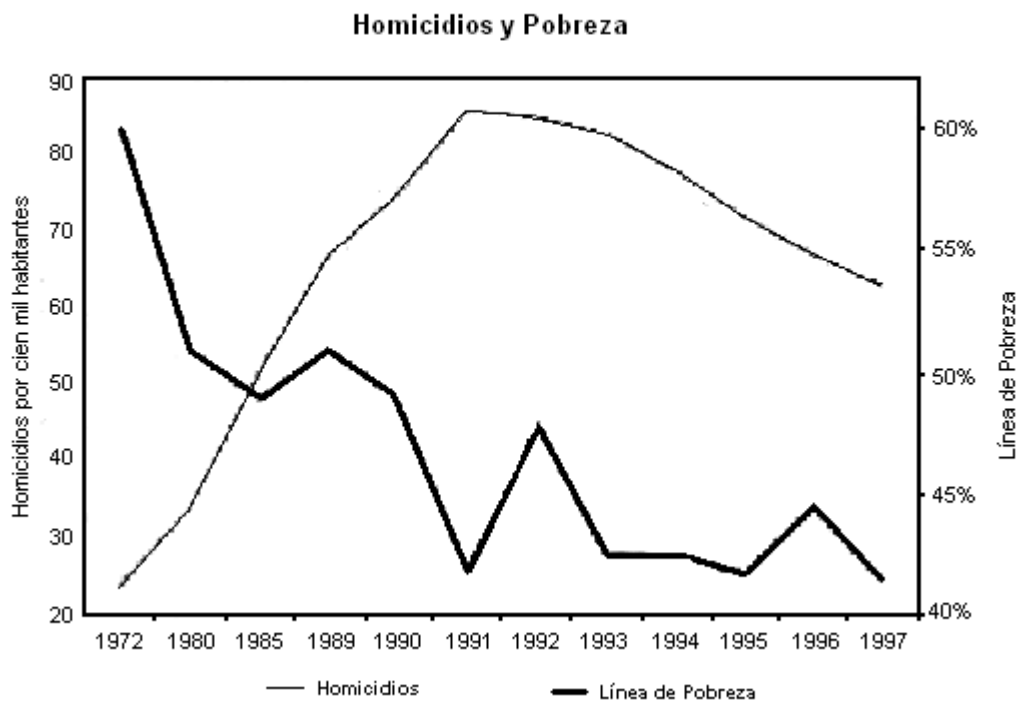
Otra explicación económica profusamente difundida dice que una causa de la criminalidad y la violencia que envuelve el conflicto es el alto grado de concentración de la riqueza pero en un sentido en que a medida que ésta aumenta, mayor será la pobreza y mayores las probabilidades de éxito de las actividades violentas de la insurgencia con propósitos igualitaristas, o las ventajas esperadas por la apropiación de la riqueza a través del robo o del secuestro y menores las oportunidades de aumentar el consumo por medio del trabajo y el ahorro (Fajzbylber *et al.*, 1999). La concentración del ingreso sería, entonces, una de las llamadas causas objetivas⁷.

La línea en la defensa de esta relación argumenta que existe correlación positiva entre homicidios y distribución del ingreso (Rubio y Levitt, 2001), sin embargo desconoce que la causalidad puede darse en sentido inverso; es decir, el crimen puede hacer más desigual la distribución al acumular fortunas en pocas manos, cuyos efectos van contra la inversión productiva creando desempleo y pobreza.

⁷Una reseña crítica sobre este tema y el conflicto y, en particular, sobre la relación entre pobreza y criminalidad se encuentra en Silva (2000).

Durante la mayor parte del período 1975-1997, mientras las tasas de homicidios subían en forma vertiginosa, la pobreza mostraba una clara tendencia descendente (Montenegro y Posada, 1995; Sarmiento y Becerra, 1998 y Sánchez y Núñez, 2003). Las estimaciones de línea de pobreza, por ejemplo, indican que a comienzos de los años setenta cerca del 60% de los colombianos tenían ingresos inferiores a los requeridos para adquirir una canasta básica de consumo; ese porcentaje cayó, en forma continua, a cerca del 41% en 1997 (FIGURA 5) y a partir de ese año la pobreza subió (debido a los problemas de desempleo y bajo crecimiento), justamente cuando la tasa de homicidios ha mostrado alguna reducción. Según estas cifras, la relación entre violencia y pobreza ha sido contraria.

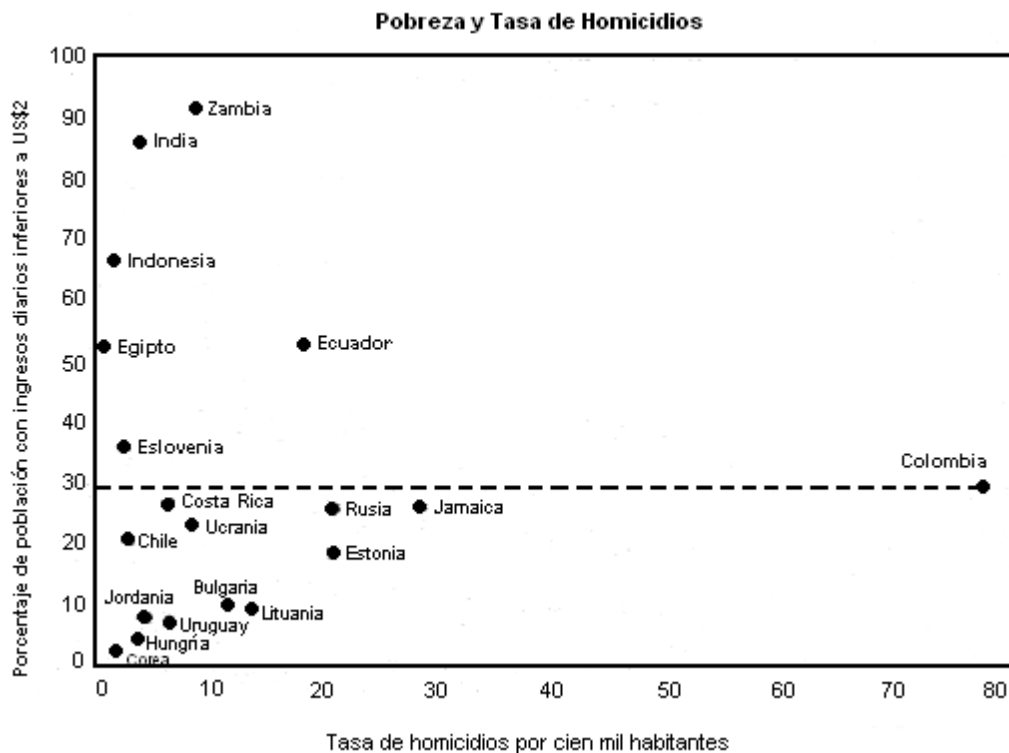
Figura 5: Homicidios vs. Pobreza



Fuente: Montenegro – Posada (2001)

Según la Figura 6 tampoco hay relación positiva entre los niveles de homicidios y el porcentaje de la población pobre. Las cifras a nivel internacional demuestran que no hay relación directa entre los niveles de violencia y la pobreza, ya que varios países con una distribución tan desigual o más que la colombiana tienen niveles de violencia menos agudos, tal es el caso de Chile, Costa Rica y Ecuador. En particular, existen países con altos niveles de pobreza y bajos grados de violencia, y otros con mejores indicadores sociales, pero más violentos. En este último grupo se encuentran Jamaica, Rusia, Estonia y Colombia.

Figura 6: Pobreza vs. tasa de homicidios



Fuente: Montenegro – Posada (2001)

Según German Silva (2000), la teoría que sostiene la hipótesis que relaciona pobreza y violencia se ha ido debilitando hoy bajo el peso de dos tipos de críticas: a) la referente a su incapacidad para explicar claramente los mecanismos a través de los cuales la pobreza por sí misma induce a las acciones homicidas o a las criminales; y b) las que se sustentan en respaldo estadístico entre tasas de criminalidad, violencia e indicadores de pobreza.

Sin embargo, hay que anotar que la explicación de no correlación entre pobreza y violencia, se refiere al grado de pobreza secular en una sociedad, porque una oleada de crímenes sí puede eventualmente traer un empobrecimiento rápido de algún grupo de la población al generar frustraciones e inestabilidad política que, si se suma al debilitamiento de la capacidad estatal para conservar el orden público, resultaría en un estado crítico de violencia.

Otra apreciación en el campo explicativo de la relación economía-conflicto es la de la justicia, en un sentido en que los episodios de alta violencia se prolongan a través del tiempo más allá de la vigencia de las circunstancias que los originan. Como resultado de los retrasos del aparato estatal de justicia han aparecido mecanismos específicos que han convertido situaciones transitorias en fenómenos duraderos; es decir, un período corto de transgresión aparentemente transitorio (narcotráfico, guerrilla, etcétera) se transforma en una situación permanente cuando sobrepasa el límite de la justicia reduciendo el costo de una nueva violación de la ley (Bejarano: 1997).

La prolongación de hechos de violencia se ve inducida por múltiples mecanismos que van en perjuicio y debilitan la justicia. Por ejemplo, un súbito desarrollo de las actividades del narcotráfico que toma por sorpresa a la sociedad puede provocar que las probabilidades de castigo disminuyan

como consecuencia del impacto de este choque, congestionando e inutilizando el sistema policivo y de justicia (Montenegro y Posada, 2001; Gaviria, 2000); entonces, la otra área de influencia en la imposición de costos a la sociedad, ligada a la justicia, es la judicial.

En la realidad, la posibilidad de arresto y posterior condena en Colombia es alarmantemente baja: la probabilidad de ser sentenciado en Colombia por un crimen es del orden del 3%, y si acaso se impone una sentencia, la condena es bastante leve, de 2.5 años en promedio (Rubio, 2001). Según los autores mencionados, para que a un colombiano le deje de parecer rentable la comisión de un delito, la condena promedio debería ser superior a los 40 años o alternativamente la probabilidad de que sea condenado debería ser cercana al 30% (Rubio, 2001).

La falta de detención explica, en parte, esta increíble situación, mientras que la posibilidad de que ante el enfrentamiento con un juicio rápido y eficiente, un posible criminal pueda pensarlo dos veces antes de cometer un delito mejoraría la perspectiva utilitaria de los recursos invertidos (Posada, 1994: 218) que en datos, el gasto de la rama judicial para el Estado colombiano, según un estudio realizado por el Consejo Superior de la Judicatura, para el total de la década de los noventa alcanza en promedio el 0,73% del Producto Nacional Bruto (PIB) y el 2,94% del presupuesto general de la Nación, equivalente este gasto en justicia a la mitad del gasto en salud y al 40% de educación (Indicadores de Justicia, 2003).

Como mecanismo, el desarrollo de las actividades criminales hace más eficientes y capaces de cometer mas crímenes a las organizaciones delictivas, entonces los costos se convierten en indirectos a través de la incertidumbre, el riesgo y la inseguridad. Cuanto mayor sea el volumen de las

actividades criminales mayores serán las destrezas de los criminales, más eficientes sus redes de apoyo y menores la probabilidades de ser capturados (Rubio, 1999a; 1999b).

En resumidas cuentas, el debilitamiento de la justicia colombiana ha permitido el avance de la impunidad y del crimen que, como ya se ha dicho, es una de las principales causas del exceso de violencia y conflicto en Colombia (frente a otros países), además del narcotráfico (Echeverri y Partow, 1998). Gráficamente la Figura 7, muestra que uno de los indicadores más preocupantes, el número de personas capturadas por las autoridades, luego de haber aumentado entre principios y mediados de los años setenta, se redujo sustancialmente hasta 1986 y posteriormente se estabilizó, a pesar del gran incremento del crimen. El aparato judicial, por tanto, se quedó corto frente a los desafíos planteados por la explosión de criminalidad del país.

Figura 7: Tasa de homicidios e índice de aprehendidos



Fuente: Montenegro – Posada (2001)

Según Sah (1991; ver Fajnzylber *et al.*, 1998) esto se debe a que los individuos ante altas tasas de criminalidad perciben una baja posibilidad de captura, así que el crimen alimenta el crimen. Por tanto, el grado de eficiencia de la justicia es inducido, en parte, por la propia criminalidad, porque mayor será la probabilidad de congestión, pérdida de eficacia y corrupción ante mayor actividad criminal. Tres elementos, que Becker (1968; 1993) popularizó y explican en términos claros dicha conclusión son: a) El castigo es racional para la sociedad, no sólo porque “saca al crimen de circulación”, sino también porque disuade a criminales potenciales a cometer actos delincuenciales futuros. b) La pena nominal consignada en los códigos de leyes es importante; sin embargo, c) la probabilidad efectiva de imponer un castigo, es casi sin duda, un factor disuasivo mucho más importante que la sanción nominal. El crimen desde este punto de vista, debería menos extendido en los países con sólido aparato judicial y policivo.

Tal como lo sugiere Mauricio Rubio (2001), lo nocivo de la criminalidad sobre el desarrollo económico, además de los efectos directos sobre el nivel del producto, se produce por varias vías: por un lado, las actividades ilegales aumentan la incertidumbre sobre los derechos de propiedad e incrementan los costos de transacción de la economía, lo que constituye en ambos casos un desestímulo a la producción corriente. Por otra parte, el crimen actúa como un impuesto que reduce los incentivos para producir, al tiempo que la prevención de las actividades delictivas implica un aumento en los costos de producción que también inciden en forma negativa sobre los niveles del producto. Por tanto, criminalidad, violencia e ineficiencia en la justicia crean distorsiones acumulativas adversas al desempeño económico: empresas que invierten menos recursos en el desarrollo de nuevos productos, en la apertura de nuevos mercados, en la adopción de nuevas tecnologías, etcétera. En estas circunstancias, la relación entre el crimen y el crecimiento

es siempre negativa en el largo plazo y el rezago de las instituciones y el poder de las organizaciones criminales, lejos de ser transitorios, tienden a persistir y a acumularse con el tiempo creando bloqueos de carácter institucional es decir, de las reglas del juego para el desempeño de la actividad económica.

Por último, hay que decir que en términos de costos para el área rural, el sector más perjudicado es el campesino⁸ y el mayor impacto económico está representado en la reducción de la productividad y el abandono del trabajo de campo.

En el área urbana las estadísticas muestran que esta tendencia en costos por pérdida de vidas, para el período 1991-1996, fue afectada a causa de la violencia urbana y el conflicto armado que fueron calculados en \$5,37 billones de pesos (Ministerio de defensa, 2001). Y para el período 1995-2000 la pérdida de capital humano, tan sólo por muerte prematura de Policías Antinarcoóticos, a \$ 18.121,5 millones de pesos. El costo generalizado compuesto por destrucción de capital humano fue de:

2.985 muertos de Grupos al Margen de la Ley –GML-

1.548 muertos de la Fuerza Pública

5.828 civiles muertos por GML

Para un equivalente de 10.361 muertos.

Esta cantidad importa porque desde el punto de vista macroeconómico, tan sólo un homicidio representa un costo para la economía ya que son las personas las que generan el valor agregado (Rubio, 2001). La estimación de la pérdidas de capital humano se asume como el valor agregado dejado de generar por las víctimas (el ingreso per cápita) y se calcula la pérdida pronosticando a valor presente la corriente futura de este ingreso. Sin

⁸ Aunque la proporción de las víctimas de ataques criminales es mayor en el estrato alto, los estimativos de las pérdidas por parte de las víctimas son mayores, proporcionalmente, en el estrato más bajo.

embargo, esta simplificación puede generar imprecisiones si no se tiene en cuenta que el ingreso es afectado por otras variables (subsidios estatales recibidos por el individuo, probabilidad de estar empleado, particularidades económicas y nivel de ingresos).

En el análisis de las pérdidas de capital, los costos en términos de porcentaje del PIB para el lapso 1999- 2001 por destrucción de capital físico en infraestructura es de \$433.986 millones y en actividades extorsivas al sector ganadero \$756.983 millones. Es decir, un total de \$ 1,19 billones (US\$ 517,9 millones), cerca de 0,64% del PIB de 2001 (Ministerio de defensa, 2001).

Hasta aquí, fuera de estos impactos cuantificables, la guerra colombiana y el uso de la violencia han impuesto costos de difícil cálculo económico. El impacto económico más importante es de índole redistributiva. Al violar las reglas de juego que rigen el comportamiento del resto de la población un conjunto de individuos se apropia de recursos sobre cuya propiedad no tienen ningún derecho. Las estimaciones respecto del monto anual de los recursos que se transfieren en Colombia de manera ilegal sugieren varias impresiones. En primer lugar de orden macroeconómico. Anualmente se impone a los colombianos, de manera desmedida, el equivalente a una o dos reformas tributarias. En términos de recursos implicados, el narcotráfico ocupa ya un puesto modesto después de las rentas de la riqueza. Existen pocas cifras, o sobre las que se sabe poco, relacionadas con los ataques a la propiedad que sufre el sector empresarial y la corrupción estatal.

Otros elementos de índole redistributiva que cobran importancia son la concentración de exorbitantes ingresos ilegales en manos de unos pocos delincuentes y la enorme redistribución de la riqueza que se ha dado en Colombia mediante la concentración de la propiedad rural que se ha dado no

sólo como resultado de la compra de tierras por parte del narcotráfico, sino con la compra de propiedades desvalorizadas por efecto del conflicto armado y que se concentran en agentes armados con el poder para defenderlas. De esta interpretación nace la conjetura de que el país ha sufrido un retroceso de varias décadas en materia redistributiva, a partir de los estudios de Montenegro y Posada (1995; 2001). Así, la concentración actual de tierras sería más regresiva que la observada a mediados de los años cuarenta, cuando se estimaba que el 3% de los propietarios tenían un 50% de la tierra. Además hay una importante reasignación sectorial de los recursos en contra de los segmentos legales de la sociedad: los ingresos promedios en las diferentes modalidades que implica el conflicto y la violación sistemática de derechos resultan ser varias veces superiores a los ingresos de trabajo del colombiano que no opta por la carrera ilegal.

3.1 INCIDENCIA DEL GASTO MILITAR EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

En el análisis de los efectos de la violencia y el conflicto armado en la economía un factor de vital importancia se deriva del gasto gubernamental que se dedica a enfrentarlos. Por ello, la importancia de estudiar la incidencia del gasto en fuerza pública sobre la economía colombiana, que si bien no ha desplazado gastos tan importantes como los realizados en salud y educación, ha significado una buena partida que aun no reporta una reducción significativa del conflicto que enfrenta.

El estudio del impacto de la economía y el accionar de las guerrillas en la economía colombiana es amplio; pero no lo es así para los efectos por el uso de recursos presupuestales a la fuerza pública, Fuerzas Militares y de Policía; gasto que se conoce como gasto en fuerza pública, -GFP- y que se

motiva en aquellos factores que llevan a que una sociedad gaste una porción de sus recursos en la provisión del bien público seguridad y defensa.

Ante la realidad de violencia y degradación del conflicto armado, Colombia se ha visto abocada a hacer ingentes esfuerzos en materia de seguridad interna y algunos trabajos desarrollados hasta el momento en Colombia (Tobar 1999; González y Posada, 2001 y Clavijo, 1998a) han dado prioridad al análisis de la composición del gasto en fuerza pública –GFP-. Sin embargo, para autores como Andrés Vargas y Mauricio Reyes (2003) se le ha atribuido la ineficiencia del gasto a su composición pero sin tener en cuenta su naturaleza; es decir, se la ha dado prelación a la relación entre funcionamiento e inversión, así como al uso de parámetros tales como la relación combate-apoyo y ataque-defensa, pero han olvidado que el GFP debe ser resultado de una estrategia de seguridad⁹ y que su eficiencia dependerá en gran medida de lo acertada de la estrategia y no del GFP en sí mismo.

En el campo del análisis al gasto público, de acuerdo con Alfredo Rangel (2001) ha habido tres fases en la relación Estado- conflicto: la primera de ellas se remonta a las décadas de 1950 y 1960 en las que el Estado abordó el problema de la violencia a través de acciones cívico – militares (Plan Lazo) orientadas a ganar la confianza de la población civil al tiempo que se eliminaban los pequeños grupos insurgentes de la época; en una segunda etapa, el Estado colombiano se concentró en resolver el problema con la guerrilla urbana del M-19, mientras que las nacientes guerrillas rurales no fueron objeto de una estrategia contundente; la tercera fase inicia en 1982 cuando Betancourt asume la presidencia, es en esta etapa que el Estado

⁹ Estrategia de seguridad se entiende como el plan político y militar que se diseña para solucionar los problemas que perturban el orden interno y amenazan la independencia y la soberanía.

reconoce el carácter político de la guerrilla rural y adelanta reformas políticas y acercamientos tendientes a darle solución pacífica al conflicto; sin embargo, es a partir de esa fecha que se identifica un fortalecimiento continuo, sin precedentes, de los grupos insurgentes, especialmente las FARC, así como un recrudecimiento de la violencia.

Según Vargas y Reyes, en los elementos que se constituyen como determinantes del GFP está referida la hipótesis geoestratégica que afirma que son las amenazas internas o externas las que conducen a incrementos del GFP. Si la sociedad, en consenso, considera a la seguridad y defensa como interés nacional es de esperarse que cualquier situación que ponga en peligro la soberanía, la integridad territorial o la seguridad de sus ciudadanos va a desembocar en un mayor GFP. Los modelos desarrollados por Smith (1995) proceden bajo esa hipótesis, lo que le permite argumentar que la demanda por GFP se deriva de una función de utilidad social compuesta por la seguridad y el consumo. Para Colombia se podría pensar que en efecto esta hipótesis es la que recoge los motivos que llevan a la decisión de gasto en fuerza pública (Vargas y Reyes, 2003).

Al hacer una comparación entre el GFP como porcentaje del PIB y la tasa de homicidios se observa que ambas tienen una tendencia ascendente, se pasó de una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes en los ochenta a tasas de 80 a finales de los noventa, mientras que el GFP ascendió de cerca del 2.5% del PIB a niveles superiores al 3.5% durante el mismo periodo (Clavijo, 1998a); además, Giha (1999) muestra como los momentos de mayor gasto en fuerza pública de cada uno de los periodos presidenciales corresponde a la adquisición de aeronaves, a la nivelación salarial en la administración Gaviria y a los llamados bonos de guerra en 1998. Lo anterior induce a pensar que el GFP colombiano ha estado determinado por la

necesidad de responder al aumento de la violencia y a los problemas coyunturales.

3.1.1 Incidencia del GFP en el crecimiento económico.

Existe una extensa literatura acerca de la incidencia del GFP en el crecimiento y desarrollo económico; desde 1973, cuando Benoit (citado por Deger, 1992) publicó su primer trabajo acerca del tema se ha dado una fuerte controversia, pues a diferencia de lo que muchos pensaban, él encontró que el GFP tiene un efecto positivo en la tasa de crecimiento del PIB en los países en vía de desarrollo. No obstante, desde entonces el debate se dividió en tres frentes: El primero de ellos (Benoit 1978, citado por Smith, 1995; Abell 1990) considera que los gastos en seguridad y defensa estimulan el crecimiento económico. El principal argumento aquí es que el GFP es necesario para la seguridad nacional porque genera un ambiente propicio para la inversión privada y, por ende, el crecimiento. Además se ha señalado que este gasto produce externalidades positivas ya que países en vía de desarrollo se han beneficiado del transporte y las comunicaciones construidas para propósitos militares.

Otro argumento a favor de esta perspectiva y que ha sido resaltado, es que el GFP es un rubro capaz de proveer servicios que en ocasiones el sector civil no puede, tales como: alimentación, vivienda, servicios médicos y educación. De igual manera el GFP puede adelantar trabajos públicos que también benefician a la economía civil mientras que se forma capital humano en la medida que se crean especialidades técnicas y científicas. Así, el sector militar al ser considerado como una institución organizada y eficiente

constituye un *agente modernizador* de la economía sobre todo en países con un aparato institucional débil donde los incrementos del GFP traen consigo desarrollo y crecimiento económico (Vargas y Reyes, 2003).

De otro lado, un segundo grupo de autores (Heo 1999, Antonakis 1999, Deger 1992, Clavijo 1998a), coinciden en que el GFP tiene un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo económico. Uno de los argumentos comunes es que este gasto desplaza el gasto en otros bienes públicos. Esto puede ser explicado por dos hipótesis: a) los miembros de la fuerza pública solo buscan su beneficio, por lo que si se trata de un país con régimen militar, lo único que interesa a su gobierno es incrementar el GFP a expensas del presupuesto del sector civil, b) Los países que enfrentan restricciones en sus recursos financieros se encuentran afectados una vez se incrementa el GFP ya que ocurren disminuciones de presupuesto en los sectores no militares. Tales recortes por lo general ocurren a costa de programas de desarrollo. Autores como Deger (1992) y Clavijo (1998a) han tomado como canal de análisis el concepto de los "dividendos de paz", entendidos estos como los beneficios económicos y sociales que obtiene un país al reducir su GFP. Estos son de dos tipos. El primero se denomina "el beneficio estatal directo" que experimenta el propio sector público al ganar margen de maniobra en la asignación de dineros de los contribuyentes hacia sectores vitales como la educación y la salud. El segundo tiene un carácter de "beneficio económico indirecto" que proviene del incremento en la productividad de factores, generada a su vez por la mejor calidad en la composición del gasto público (Vargas y Reyes, 2003).

Las consecuencias del incremento en gastos militares también han sido clasificadas en dos tipos (Heo 1998): a) mayores impuestos, déficit fiscal y reducción de fondos para la inversión planeada por el Estado; y b) mayores

tasas de inflación, déficit en la balanza de pagos en cuenta corriente y menores tasas de ahorro. La causalidad de tales consecuencias ha sido explicada por Vargas y Reyes de la siguiente manera: dado que los niveles de carga militar son financiados vía impuestos, déficit fiscales o expansión monetaria, el gobierno al incrementar sus gastos militares, así mismo lo hará con sus impuestos, lo que significa menos fondos para ahorrar o invertir. Luego, el ahorro y la inversión privada disminuyen. Ahora, si el gobierno pensara en una expansión monetaria para financiarse, correría el riesgo de tener inflación.

Un tercer grupo de académicos se encuentra en una posición neutral pues consideran que los gastos militares pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el crecimiento para determinados periodos en países con ciertas características. (Chester y Smith 1978; Landau 1993 citados por Reyes y Vargas, 2003).

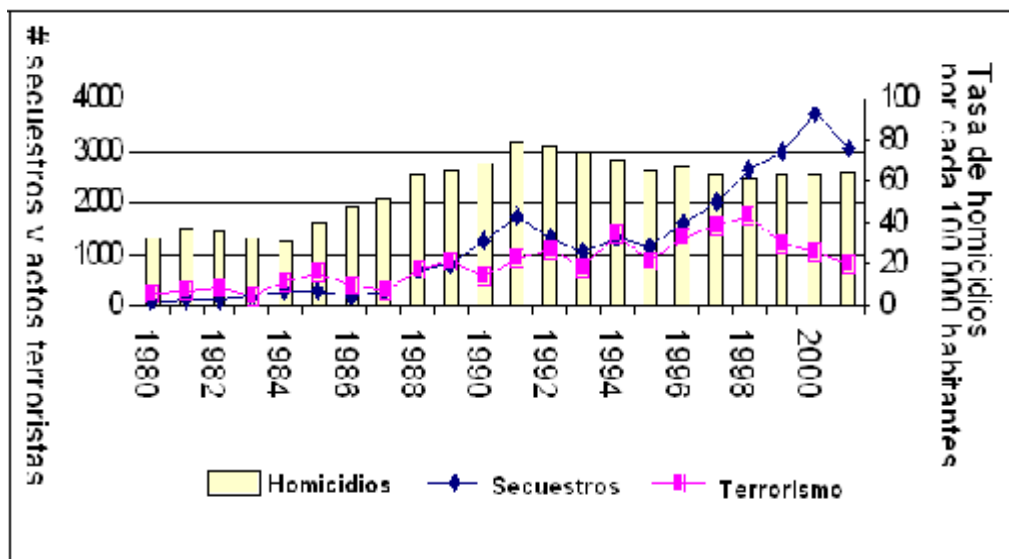
3.2 CONFLICTO, ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El conflicto le ha costado a los colombianos grandes pérdidas humanas y económicas, lo que se ignora, según autores como Vargas y Reyes, es cómo ha sido la respuesta del Estado a las amenazas a la seguridad y la incidencia que la respuesta estatal puede tener en el crecimiento. El razonamiento que siguen Reyes y Vargas es que a medida que el conflicto se hace más intenso la respuesta del Estado debe ser más decidida, bien sea que adopte una estrategia clara de seguridad o siga un comportamiento reactivo, esa respuesta debe reflejarse en el GFP puesto que este muestra el

valor de los recursos y el uso que se le da, así como su coherencia con las estrategias. El vínculo final se establece entre los resultados en materia de seguridad que produce la estrategia - confianza, mejor ambiente de inversión y negocios, estabilidad institucional, etcétera -, la incidencia del uso de los recursos destinados a la seguridad y su efecto conjunto en la economía. En este orden de ideas, esta sección hace una sinopsis de la respuesta del Estado a la intensificación del conflicto y su incidencia en la economía.

Como se ha dicho, desde inicios de los ochentas las FARC y el ELN adquieren aceleradas dinámicas de crecimiento. A partir de este momento, al comparar la evolución del pie de fuerza guerrillero con la tasa de homicidios se encuentra que las mayores tasas coinciden con la expansión de la guerrilla desde 1980 (Figura 8). Parejo al aumento de la tasa de homicidios están el número de secuestros y actos terroristas ocurridos en las últimas dos décadas.

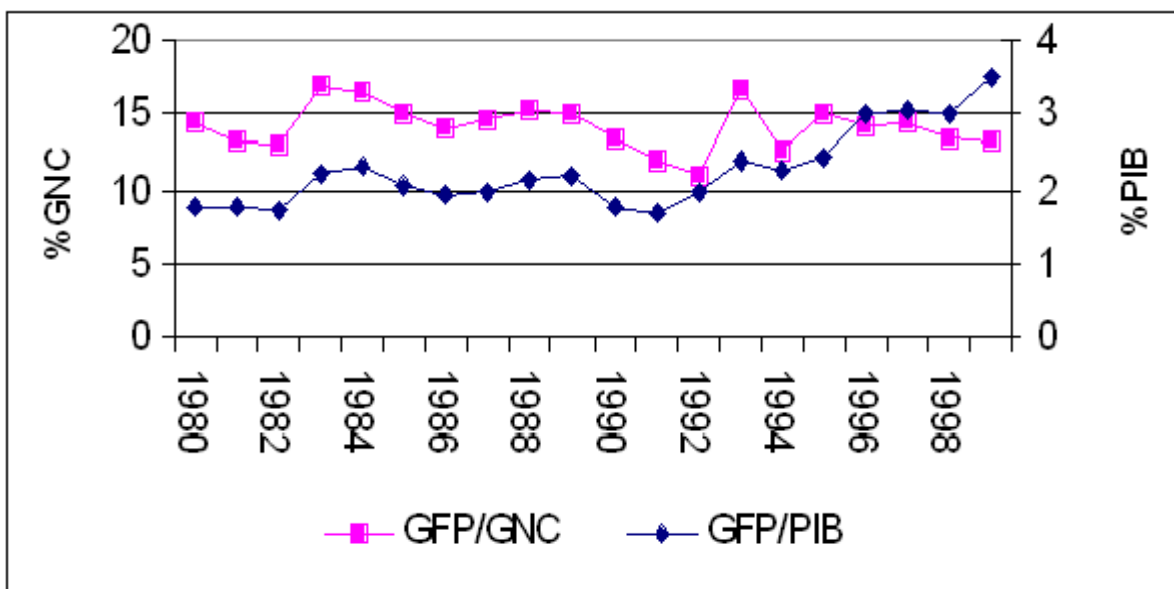
Figura 8: Aumento del pie de fuerza y tasas de homicidios



Fuente: Vargas y Reyes, 2003

En la figura 9 se aprecia la cantidad de recursos que destina la sociedad en su conjunto al GFP, GFP/PIB, y los que destina el Gobierno Central Nacional - GNC -, GFP/GNC. El GFP con respecto al PIB es creciente, mientras que la relación con el GNC esta alrededor del 13%. Esto señala que las decisiones en materia de seguridad interna le han costado a los colombianos recursos cada vez mayores y además han incidido en el aumento del tamaño del gobierno.¹⁰

Figura 9: Evolución del GFP



Fuente: Vargas y Reyes, 2003

En la primera mitad de los ochentas la estrategia contrainsurgente del Estado estuvo centrada en restarle base política a la guerrilla, por medio del PNR – Plan Nacional de Rehabilitación¹¹, y en la disputa de la legitimidad en las zonas marginadas (Vargas, 2002). También se adelantaron intentos de

¹⁰ El gasto del GNC paso de ser alrededor del 14% del PIB en los ochenta a estar por encima del 20% en la segunda mitad de los noventa.

¹¹ Inversión pública social en zonas afectadas por el conflicto armado.

salida negociada al conflicto, así como la puesta en marcha de planes de amnistía y la realización de reformas políticas que abrieran espacios a la participación ciudadana – elección de alcaldes -, todo esto con el propósito de inducir a la guerrilla a dejar las armas (Rangel, 2001). Por otro lado, el Estado también hizo intentos para reorganizar la fuerza pública y darle a esta una mayor capacidad. Se crearon los teatros de operaciones, las fuerzas de contra guerrilla y las divisiones.

El GFP en el periodo 1980-1986 estuvo alrededor del 1.8% del PIB, con valores máximos de 2.3% y 2.2% en 1983 y 1984 como consecuencia de la construcción de la base naval Bahía Málaga y la pista aérea de Marandua. Durante la administración Barco (1986-1990) la llamada “guerra contra el narcotráfico” marcó de manera importante las respuestas estatales en términos de seguridad interior (Vargas, 2002). En el tratamiento del conflicto armado los hechos más importantes son la ampliación del PNR, se pasó de 142 a 311 municipios al finalizar 1989, la desmovilización del M-19 en 1990 y la aprobación en 1987 de un impuesto especial para recaudar \$20.000 millones adicionales para justicia y defensa, así como la adición de \$10.000 millones más en el presupuesto militar. La decisión se tomó ante la expansión y diversificación de la violencia, y la insuficiencia de recursos de la fuerza pública para enfrentar ese fenómeno (Leal Buitrago, 2002). Así pues, el GFP siguió en aumento, pero no como un medio para la solución del conflicto sino para enfrentar sucesos coyunturales como el problema limítrofe con Venezuela (Vargas y Reyes, 2003).

La década de 1980 termina con un GFP cercano al 2% del PIB y ante un crecimiento acelerado de secuestros, actos terroristas y una mayor confrontación armada, que se agudiza en 1991. Bajo estas circunstancias, el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) formula la Estrategia Nacional Contra

la Violencia. En este periodo también se adelantaron conversaciones en México con las FARC pero ellas no prosperaron, lo que trajo consigo una arremetida guerrillera de gran escala. Lo anterior, sumado a la violencia generada por el narcotráfico, obligó al gobierno a reformular la estrategia, volviéndola más punitiva y policiva (Leal Buitrago, 2002), así como a declarar la “guerra integral”, es decir, el combate simultáneo al narcotráfico y la guerrilla.

Las decisiones que se tomaron durante esta administración han significado los mayores incrementos del GFP en su historia reciente, se pasó de un crecimiento promedio anual de 4.5% real en el periodo 1985-1992 a uno de 14.37% entre 1993 y 1996¹². Al combinar el aumento de pie de fuerza con mayores salarios y un régimen prestacional privilegiado da como resultado un gasto militar ascendente y rígido a la baja (Vargas y Reyes, 2003).

En la administración Samper (1994-1998) los problemas políticos vividos causaron gran inestabilidad. Dentro de los hechos relevantes están la creación de la Brigada de Aviación del Ejército y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, finaliza la tercera fase de la nivelación salarial en 1996 y sigue en aumento el pie de fuerza. El GFP llegó al máximo de 3% del PIB, cifra que solo se había alcanzado en la época del conflicto con el Perú y durante la administración de Misael Pastrana, cuando se adquirieron los aviones de guerra Mirage. Según Vargas y Reyes la administración Samper combinó el mayor GFP de los últimos 25 años con los peores resultados de toda la historia.

Andrés Pastrana asumió la presidencia en momentos críticos para la fuerza pública y en una coyuntura favorable para iniciar un proceso de paz (Leal Buitrago, 2002). Su mandato manejó la seguridad en dos frentes: salida

¹² Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, 1997.

política al conflicto y fortalecimiento militar. La salida política se intentó a través de los diálogos de paz, con la condición previa del despeje, iniciados en diciembre de 1998 y rotos a principios del 2002. El fortalecimiento militar se pretende por medio de la reforma militar y del componente militar del Plan Colombia, que aunque inicialmente entregaba unos recursos para la lucha antinarcóticos después del 11 de septiembre de 2001 se autoriza su uso para la lucha antisubversiva. Dentro del proceso de fortalecimiento militar se pusieron en marcha los planes 10.000 y Fortaleza; el primero reemplazaba anualmente durante tres años, a partir de 1999, 10.000 soldados bachilleres por profesionales y el plan fortaleza que inició en el 2001 incorpora 10.000 soldados regulares anualmente hasta el 2004, para un total de 160.000 soldados en ese año. También se creó la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA.

Hasta acá se ha visto que, a pesar de ser la seguridad un asunto de vital importancia para el país, su manejo no ha estado guiado por alguna política de Estado o por una estrategia, en el sentido estricto en el que hemos mencionado, sino que ha sido la reacción a las condiciones del momento. En consecuencia, Colombia tiene un GFP que crece aceleradamente, debido principalmente al aumento del gasto de funcionamiento que representa cerca del 90% del gasto total y que además se hace costoso puesto que el retorno sobre la inversión en seguridad es mínimo, debido a que los recursos utilizados no se han constituido en una herramienta contundente para la consecución de un fin.

3.2.1 El GFP y su incidencia en la economía

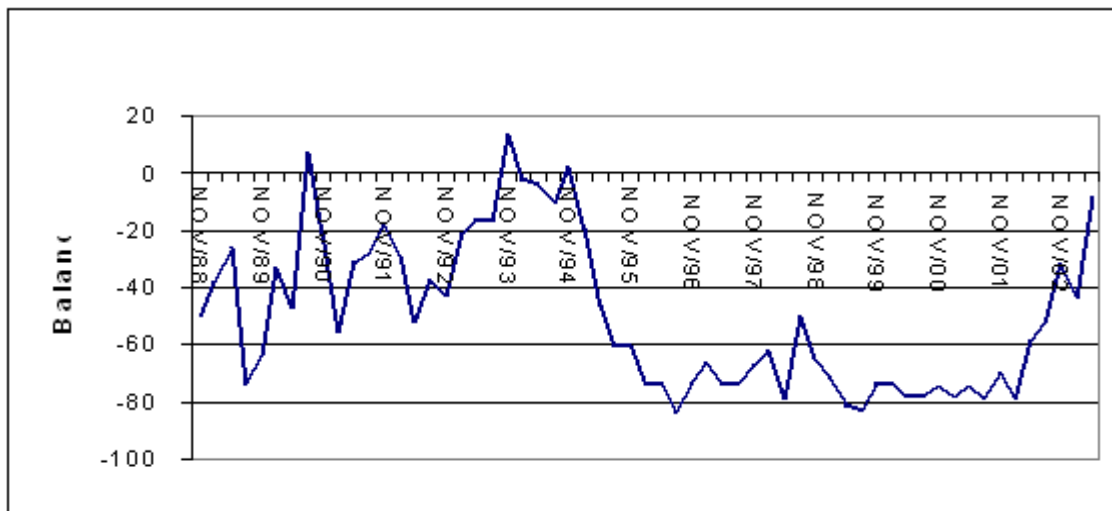
Con base en las anteriores conclusiones este apartado hace una sinopsis de la incidencia del GFP en la economía tomando como base las hipótesis planteadas principalmente por el trabajo de Vargas y Reyes. Primero se muestra el vínculo entre GFP seguridad e inversión y después se mira la repercusión en la deuda externa.

3.2.1.1 El efecto del GFP en la Inversión.

El argumento a favor del GFP, en un ambiente de violencia como el colombiano, es su supuesta influencia benévola en las condiciones para invertir, es decir que a mayor gasto en fuerza pública mayor seguridad. La falacia de esta proposición consiste en que se presupone que el GFP sigue una estrategia, y por ende es deseable. Aquí se muestra cómo el incremento del gasto no ha ocasionado el efecto en el clima de negocios que teóricamente debería propiciar.

El análisis se basa en los resultados de Reyes y Vargas citados de la Encuesta de Opinión Empresarial, EOE, que hace Fedesarrollo y en el comportamiento de la inversión, medida como la formación bruta de capital, FBK.

Figura 10: Condiciones sociopolíticas para invertir



Fuente: Vargas y Reyes, 2003

La Figura 10 presenta los resultados de la EOE para el periodo noviembre de 1988 a mayo de 2003, datos trimestrales. Es interesante observar que en toda la muestra solo han habido tres periodos en los que el número de respuestas favorables ha sido mayor: agosto de 1990, noviembre de 1993 y noviembre de 1994 (Vargas y Reyes, 2003).

El primer periodo coincide con el ascenso de Gaviria a la presidencia, en ella se presentan cambios de fondo en el manejo de la seguridad y además inicia la profesionalización de las FFMM. A pesar de lo anterior, el optimismo duró muy poco gracias a la ofensiva desatada por las guerrillas y al aumento de los secuestros. El balance positivo de noviembre de 1993 y noviembre de 1994 coinciden con una disminución en el número de secuestros y la reformulación de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, que se habría de llamar Seguridad para la Gente. El GFP del periodo 1990-1994 pasó del 1.7% del PIB al 2.3%.

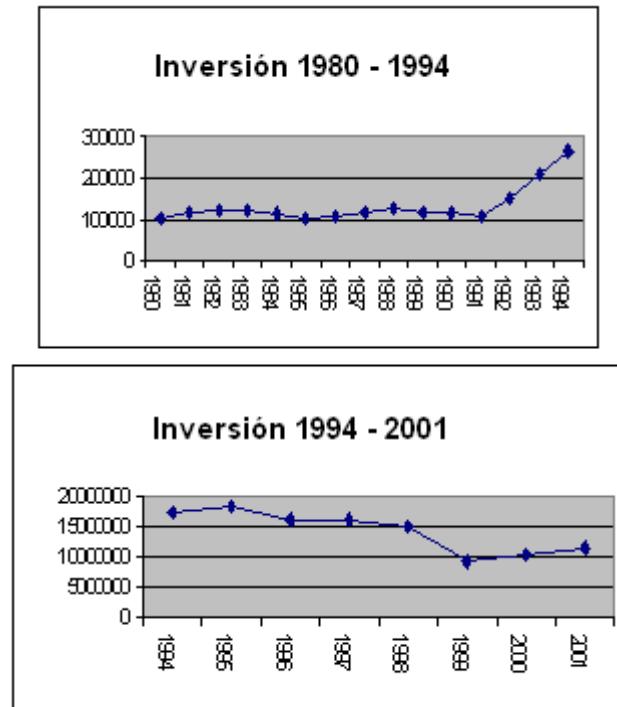
Si bien, en los tres periodos a los que se hizo mención, el número de respuestas favorables fue mayor, hay que recalcar que fue por mínima

diferencia y que además no se mantuvo en el tiempo, lo que induce a pensar que el manejo de la seguridad no propició las condiciones que incentivaran la inversión, a pesar del mayor del GFP.

La evolución de los resultados de la EOE en la segunda mitad de los noventa se explica por el caos que fue la presidencia de Samper y el escepticismo frente al proceso de paz y las controvertidas decisiones del gobierno Pastrana en esa materia. La tendencia se revierte a partir del primer trimestre del 2002, la causa es la victoria del Alvaro Uribe en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Ahora, si se observa el comportamiento de la inversión en todo el periodo se encuentra que entre 1980 y 1990 se mantuvo alrededor del mismo nivel, pero a partir de 1991 crece a un mayor ritmo gracias a los cambios estructurales de la economía y no precisamente porque la intensidad del conflicto hubiese cedido. Aun cuando la inversión esta determinada por numerosos factores diferentes a la seguridad, se aprecia que esta y la inversión tienen una dinámica similar, más evidente en los noventa (Figura 11).

Figura 11: Inversión para el periodo 1980 – 2001 (Millones de pesos)



Fuente: Vargas y Reyes, 2003

El hecho de que el vínculo seguridad – inversión sea más notorio a partir de 1990 no es fortuito. El conflicto armado actual se inicia en el primer lustro de los ochenta, pero el comienzo de los noventa marca un quiebre en la dinámica del conflicto pues se hace más intenso y el número de actos de violencia por año crece a tasas superiores que las de la década precedente.

Entonces, si el conflicto se hace más intenso y además se convierte en un factor clave a la hora de tomar decisiones, aumentar el GFP es necesario y, de hecho, eso ocurrió. El GFP de los noventa tiene una dinámica de crecimiento superior a la de cualquier otro periodo en la historia; sin embargo, su aumento no contribuyó de manera alguna a mejorar la situación

debido a la ausencia de una política de seguridad y una estrategia militar, en palabras del general (r) Henry Medina: “sin una estrategia política adecuada, se pueden ganar todas las batallas y perder la guerra” (Pérez, 2003. p: 9).

En conclusión, el argumento de que el aumento del GFP es deseable en sí mismo se desvirtúa pues su aumento ha estado acompañado de una percepción negativa de la situación de seguridad y un descenso en la inversión.

3.2.1.2 El efecto del GFP en la deuda externa.

A diferencia del anterior argumento, hablar de incrementos en el GFP, en un país como Colombia cuya deuda pública externa ascendió a US\$22.952 millones en 2001, de los cuales correspondió al Gobierno Central Nacional US\$18.254 millones (79.5%) y considerando que los montos que debe pagar este en los próximos años para cumplir sus compromisos en moneda extranjera son de US\$9.285 millones entre 2003 y 2008 (Banco de la República, 2002. p: 50) no es para nada aconsejable, más aun si se tiene en cuenta que la salud de la deuda pública externa se ha agravado por factores como la devaluación, el escepticismo de inversionistas y prestamistas sobre los indicadores económicos, sociales y políticos del país, y el continuo descenso de la calificación de la deuda soberana (Contraloría general de la República, 2002. p: 10).

El estudio realizado por la Contraloría General de la República ha podido mostrar que la contratación con recursos de crédito externo en el Sector Defensa y Seguridad ha sido trascendental para la financiación de proyectos de inversión. Sin embargo, la participación de este dentro de los demás

sectores no parece relevante pues pasó del 14.7% en 1990 a 2.2% en 2001 para un promedio de 6.1% para el período.

Según la Contraloría la disminución de la participación del sector en el total del endeudamiento externo del GCN se explica por los convenios de cooperación y la ayuda internacional, ya que la Fuerza Pública recibe equipos en calidad de donación y éstos no entran en el Presupuesto General de la Nación, lo que sugiere que este tipo de gasto no ha agravado las finanzas externas (Vargas y Reyes, 2003).

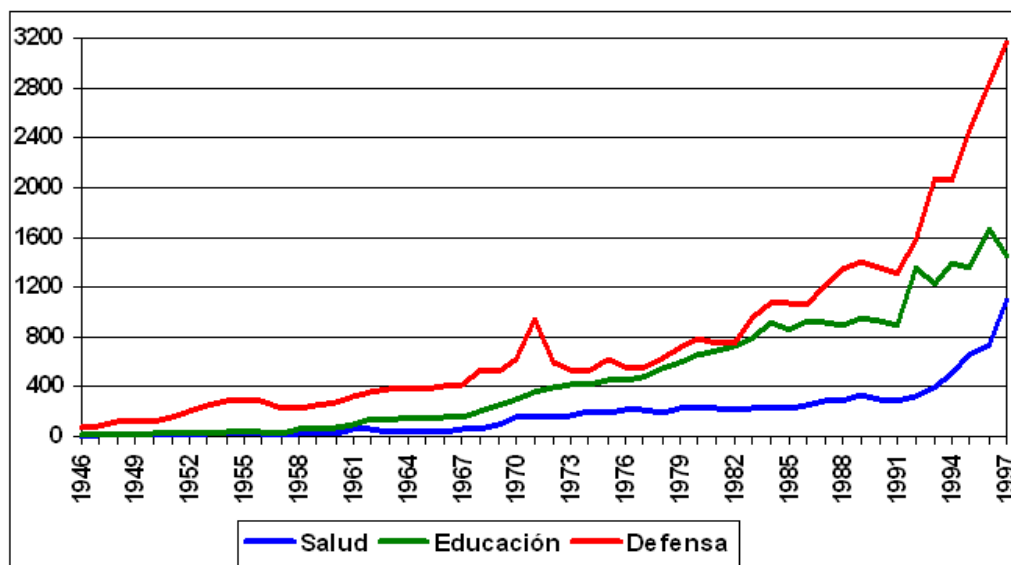
Por otro lado, como ya se ha dicho, algunos autores coinciden en que el GFP tiene un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo económico ya que este surge a expensas del gasto público (salud y educación), de hecho se ha mencionado que las categorías de gasto en seguridad y defensa, y las que no pertenecen a ella se encuentran compitiendo por una cantidad fija de recursos (Steve, 1996; citado por Giha, 1999).

Una de las explicaciones dadas a este fenómeno y que contrasta con el caso colombiano, son las restricciones en los recursos financieros a las que se enfrenta el Estado. Es por ello que bajo esta lógica, se podría suponer que incrementos en los gastos de defensa afectarían directamente a los de educación y salud, hecho que pone al Estado ante el dilema de escoger cañones por “mantequilla”. La importancia de analizar esta incidencia dentro de los objetivos de este estudio, según Vargas y Reyes, es que a diferencia de los que se pensaba en el pasado que una mejor cobertura en salud y educación eran solo beneficiosos porque mejoraban la distribución del ingreso; es que, según la evidencia empírica para Colombia (Cárdenas, Vélez 1996 y Sánchez, Nuñez 1996; citados por Parra, 1998) este tipo de erogaciones son necesarias para el crecimiento económico ya que se consideran inversión en capital humano. Cárdenas y Gutierrez (Citado por

Parra, 1998) por ejemplo han mostrado que la caída en la demanda de los trabajadores no calificados en la industria manufacturera en Colombia es una muestra de la sustituibilidad que existe entre la mano de obra no preparada y el capital, mientras que el capital y la mano de obra calificada son complementarios.

Una mirada a las cifras, Figura 12, ilustra una tendencia creciente de los gastos del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB a partir del año 1990, allí se puede observar que no existe un notable desplazamiento de los gastos diferentes al de Fuerza Pública ya que mientras el sector salud, pese su pequeña contribución relativa como porcentaje del PIB, con respecto a los otros sectores expuestos sigue una tendencia sin altibajos, la reducción en los gastos de educación observados durante el período 1986 –1990 y 1992 -1994 se debieron en especial a los virajes en torno a la descentralización de la educación. (Clavijo b, 1998, p.138)

Figura 12: Gasto Público en Defensa, Salud y Educación
 (\$ millones constantes de 1946)



Fuente: Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República

Este análisis preliminar indica que si bien el GFP ha mantenido una tendencia creciente, ello no ha ido en detrimento del gasto en educación y salud. El estudio de Vargas y Reyes revela que en materia de seguridad las decisiones adoptadas por las presidencias que van desde Belisario Betancourt hasta Andrés Pastrana, no han sido objeto de directrices claras y contundentes, sino de respuestas coyunturales. La improvisación es persistente, a diferencia de la planeación.

A medida que la intensificación del conflicto aumentó el GFP también ascendió, sin embargo, su aumento no se tradujo en resultados. El conflicto no cedió, la guerrilla experimentó una expansión sin precedentes y la desconfianza de los inversionistas se volvió habitual debido a la destrucción de capital humano, físico y financiero, caída de la inversión y dilapidación de recursos del presupuesto de la nación, hechos que reprimieron el crecimiento económico de largo plazo. Sin embargo, Vargas y Reyes no encontraron que el aumento sostenido del GFP haya desplazado los gastos de educación y salud, pero que si ha contribuido al aumento del total del gasto del gobierno central nacional.

Para finalizar, según estos autores si bien la situación de orden público ameritaba de una respuesta militar, no se justifica el uso ineficaz de recursos por falta de una estrategia. Ante esta idea concluyen que es recomendable que los aumentos futuros del presupuesto de la fuerza pública sean precedidos por una estrategia de seguridad, de tal manera que el uso de los recursos sea eficiente y respondan a lo que motiva sus cambios así como el fin que ha de cumplir.

En general, como conclusión se puede afirmar a ciencia cierta que las actividades criminales que conlleva consigo el conflicto interno, hacen parte

de las *actividades destructivas* de una economía. Específicamente porque *redistribuyen* o destruyen riqueza, mientras las actividades productivas generan valor agregado susceptible de acumular¹³ y porque demanda esfuerzos económicos inmensos para la conservación de la seguridad.

Los costos directos se representan en pérdidas de capital físico y humano, además de generar incertidumbre en los mercados transcritos en costos indirectos. Por otro lado, los altos niveles de criminalidad perjudican la inversión privada en infraestructura y capital físico. Las empresas no se establecen en lugares, regiones o países inseguros. Esto significa pérdidas de nivel de empleos y de ingresos fiscales para las ciudades. Es decir, la consecuencia de una mayor incertidumbre se traduce en desestímulo o desvío de la inversión; por otro lado, genera una asignación ineficiente de los recursos al tener que dedicar factores productivos a combatir la delincuencia, la criminalidad y la guerra. Los daños a la propiedad generan un alto impacto económico negativo (Rubio, 1999) la pérdida de la capacidad instalada, recursos tecnológicos e infraestructura en general que involucra un costo de reposición y el aumento de los costos de transacción.

¹³Cabe anotar que existen actividades delictivas como el narcotráfico que generan valor agregado. Sin embargo, también acarrear costos indirectos que pueden producir efectos netos negativos sobre la economía.

4. NARCOTRÁFICO Y ECONOMÍA DE GUERRA

A nivel latinoamericano la región andina ha sido terreno apropiado para la expansión del cultivo de drogas por la crisis de la agricultura acarreada, entre otros factores, por el desfavorecimiento comercial de los países potencias después de la segunda guerra mundial y el establecimiento de políticas liberadoras del mercado. Colombia ha sido considerada como un país procesador de la base de coca proveniente de Bolivia y Perú, y a su vez, centro de distribución hacia el mercado mundial. Sin embargo, hoy por hoy, se ha convertido en un importante productor de materias primas para la elaboración de drogas ilícitas, llegando a ser el mayor productor de coca en el mundo, siendo el 60 y 70% de la coca de todo el mundo producida en Colombia (Naciones Unidas, 2000).

Según estadísticas de las organizaciones no gubernamentales reveladas en un Informe Mundial sobre las Drogas, Colombia es el primer país productor de coca en el mundo con 122 mil hectáreas superando a Bolivia y Perú, países que ocupaban hasta 1995 los primeros puestos en producción. El informe señala de igual manera a Colombia como primer proveedor mundial de cocaína, (300) toneladas métricas al año, es decir el 66% total de la producción (Seattlecolombia.org, 2001); y no sólo es de los principales cultivadores de coca en el mundo, sino que es el primer procesador de cocaína; produce casi el 20% de la heroína y desde hace más de 20 años cultiva y exporta marihuana.

En el cuadro II se observa que para finales de la pasada década Colombia triplicaba la producción de cultivos de coca, mientras que otros países

productores del área andina como Bolivia y Perú han mantenido un comportamiento irregular, pero con tendencia a la baja.

Cuadro II: Cultivos de coca en la región andina

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BOLIVIA	47.900	45.300	47.200	48.100	48.600	48.100
COLOMBIA	37.500	37.100	39.700	44.700	50.900	67.200
PERU	120.800	129.100	108.800	108.600	115.300	94.400
TOTAL	206.200	211.500	195.700	201.400	214.800	209.700
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
BOLIVIA	45.800	38.000	21.800	14.600	19.900	24.400
COLOMBIA	79.400	101.800	160.100	163.300	144.800	102.000
PERU	68.800	51.000	38.700	43.400	46.200	46.700
TOTAL	194.000	190.800	220.600	221.300	210.900	173.100

Fuente: Global Illicit Drug Trends, 2003. United Nations Office on Drugs and Crime

En Colombia el flujo de recursos hacia los agentes ilegales emana principalmente del producto de la exportación de las drogas y en menor escala, el petróleo, el carbón, el oro y el banano que figuran entre los productos de tributación de guerrilla y paramilitares. El comercio ilegal alcanza registros de ingreso para las guerrillas de unos 800 millones de dólares al año en comparación con un gasto en defensa del gobierno de 1.400 millones de dólares, a comienzos de esta década (DNP, 2000). El valor agregado total de la industria de heroína y cocaína, principal componente del comercio ilegal, basada en la materia prima nacional fue de aproximadamente US \$1.200 millones por año.

Tal como lo evalúa el reporte del Departamento Nacional de Desarrollo para el año 2000, no es posible estimar el empleo total generado por la industria con un grado de certeza alto; sin embargo, los cultivos de coca generaron el

equivalente de unos 40.000 empleos de tiempo completo, una cifra relativamente pequeña en un país de 40 millones de habitantes.

Lo importante aquí es que cualquiera que haya sido la vía que haya tomado el dinero proveniente del tráfico de drogas ha alimentado el conflicto no sólo porque su negocio implica una forzosa dosis de crimen sino también en la medida en que ha abierto las puertas para nuevas vías de suministro de armamento proveniente de la guerra fría, y que a la postre han terminado reforzando la autonomía política y militar de los extremistas. El narcotráfico ha contribuido, con un apoyo políticamente ambiguo, a respaldar grupos armados de izquierda y derecha de acuerdo a su conveniencia.

Un informe sobre economía política y narcotráfico DE Francisco Thoumi (1996) revela en el análisis de la relación guerrilla-narcotráfico, en torno a los cultivos ilícitos, que no ha encontrado evidencia de que las organizaciones guerrilleras cooperan directamente en la exportación de la cocaína, pero revela manifiestamente que éstas dependen financieramente de la industria de la coca y cocaína.

Dice el autor que la guerrilla no dispone de redes de importación de insumos para el procesamiento, ni de exportación de producto terminado, ni maneja una amplia infraestructura de laboratorios para la producción de alcaloides, ni un sistema de lavado de dinero. En síntesis, que la guerrilla parece ser un actor externo al narcotráfico que reemplaza al Estado en las zonas de cultivo ilícito, hace cumplir sus propias leyes y proporciona servicios educativos y policiales a la región. La mayor parte de los ingresos de las guerrillas en esas zonas provienen de los “aranceles a las exportaciones” que cobran a la droga que sale de la región. Y dice que en zonas como el Putumayo, el bajo y medio Caguán y en el Guaviare la guerrilla no puede subsistir sin el reporte productivo del negocio de la drogas, y que su presencia allí se debe más al

lucro derivado del narcotráfico que a la estrategia militar o ideológica (Thoumi, 1996).

El estudio mencionado dice que en el pasado reciente la coca colombiana producía menos cocaína por hectárea que la coca boliviana y la peruana, lo que ha pasado es que la industria ha experimentado sustanciales avances tecnológicos, y hoy el rendimiento es tan alto o más que en los países del sur. Los cultivadores buscan continuamente aumentar el rendimiento probando diversas tecnologías e insumos con buenos resultados.

Colombia se ha caracterizado entre los demás países por ser el único país del mundo donde han convergido la producción, el procesamiento y el tráfico de tres especies vegetales con poderes narcóticos y la aparición de estos cultivos ilícitos se produce en la década de los años sesenta, inicialmente con la marihuana y en la década de los setenta con la coca. Un fenómeno más reciente ha sido la aparición de la amapola. En la actualidad aunque principalmente se hallan en el departamento del Putumayo, han alcanzado a casi todos los demás departamentos y su auge ya tiene otras connotaciones diferentes de las que se presentaron inicialmente.

Para el primer trimestre del 2000, según estimativos de diversas instituciones como la Policía, la CIA o la Oficina de las Naciones Unidas para el Control y Tráfico de drogas, existen más de 120.000 hectáreas de coca sembradas (Cuadro I), de las cuales más del 60% están en el departamento del Putumayo. En este mismo departamento, más de 50.000 campesinos están dedicados a la siembra de coca.

Cuadro III: Cultivos ilícitos establecidos en el país a comienzos del 2000

Fuente	Coca	Amapola
Policía Nacional	106.000 Has	7.000 Has
CIA ¹⁴	122.500 Has	
UNDCP ¹⁵		8.000 Has

Fuente: DNP, 2000

Los cálculos oficiales apuntan a que esto se debe a que los cultivos se presentan en zonas de *economía campesina*, donde se crean los frentes de colonización (Defensoría del Pueblo, 2000).

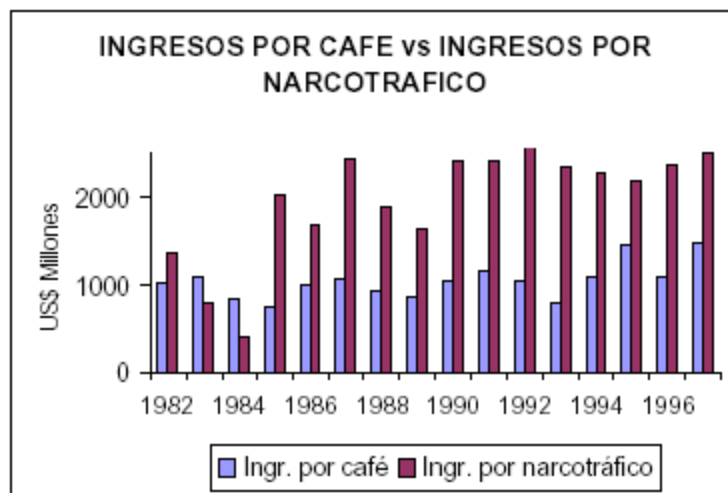
La industria de las drogas, en general, y el ramo de la cocaína, en particular, parecen tener una estructura típica de muchas industrias basadas en la agricultura. La materia prima principal es producida por un gran número de campesinos y su mercado es bastante competitivo. A pesar de la similitud hay diferencias cruciales que surgen de la ilegalidad de la producción, distribución y consumo de las industrias en cuestión. Las diferencias absolutas son llamativas y más, aun, las diferencias en términos per cápita. Los altos costos del transporte han hecho que los cultivos lícitos no sean rentables. Mientras tanto, los cultivos ilícitos tienen una alta demanda, altos precios en el mercado, costos de producción relativamente reducidos y facilidades de transporte, convirtiéndose en una forma de desarrollo alternativo porque “mientras una hectárea de café deja en dos años unos tres mil dólares (\$6.060.000), una de amapola deja unos 54 mil dólares en el mismo periodo (\$109.080.000); en otras palabras, 18 veces más que el café” (Tovar Pinzón, 1999) (Figura 13).

¹⁴ *Central de Inteligencia Americana.*

¹⁵ *Oficina de las Naciones Unidas para el Control y Tráfico de Drogas.*

La ilegalidad condiciona de manera importante la estructura del mercado y el comportamiento y las estrategias de los productores, los vendedores y los consumidores. La ilegalidad obliga a un comportamiento de minimización de riesgos en cada fase de los procesos y mercadeo que se refleja en la naturaleza de los empresarios, la ubicación escogida, las relaciones entre los participantes de cada fase y el elevado nivel de violencia asociado con la industria. La misma ilegalidad genera una segmentación del mercado, costos altos de transacción, grandes rentas y ganancias y, de manera muy importante, el uso frecuente de métodos violentos. En palabras de Francisco Thoumi (1996) la ilegalidad convierte a la violencia en un recurso cuyo uso real o potencial tiene objetivos definidos, es parte del sistema de solución de conflictos cuando surgen problemas en las transacciones, y es una amenaza utilizada contra personas o grupos competidores. También, porque puede usarse contra las autoridades para forzar cambios en las políticas o simplemente para eliminar agentes de las autoridades ilegales que combaten su industria.

Figura 13: Ingresos por café vs. Ingresos por narcotráfico



Fuente: Rocha (1999) y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Por último se han identificado algunos cultivos como de subsistencia, realizados directamente por campesinos, pero la gran mayoría son de tipo exclusivamente comercial y financiados directamente por el narcotráfico, organizaciones empresariales y redes de comercialización y distribución de narcóticos.

4.1 ALCANCES DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y EL GASTO ANTIDROGAS EN COLOMBIA

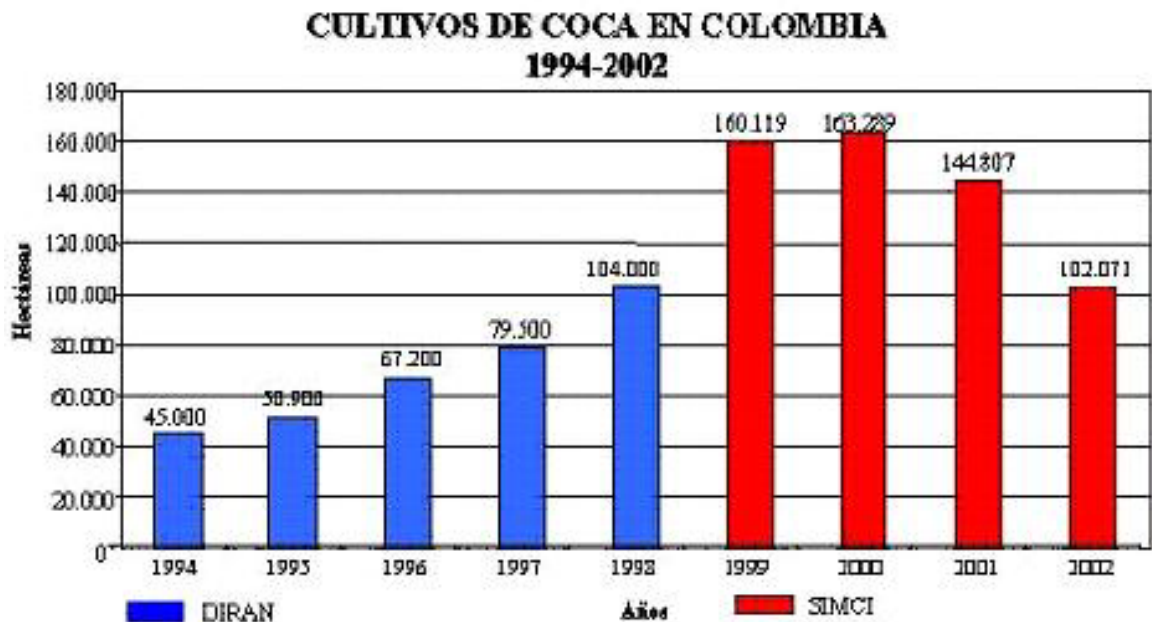
La condición ilícita del narcotráfico y la consecuente ausencia de registros estadísticos certeros y confiables ha dado pie a grandes especulaciones en torno a la dimensión de los niveles de producción, consumo y ganancias que genera este negocio. Muchas de las cifras que se manejan por parte de distintos organismos, funcionarios y medios periodísticos han logrado popularizarse creando una imagen distorsionada de la real dimensión de la actividad del narcotráfico y, por sobre todo, de sus alcances y efectos sobre los países productores y consumidores.

A pesar de la campaña antidrogas que ha incrementado las fumigaciones aéreas, los cultivos ilícitos han visto un incremento progresivo en Colombia, y son las leyes de oferta y demanda las que rigen el comportamiento del producto en los mercados (Figura 14). Por ejemplo, mientras un gramo de cocaína en las calles de Bogotá vale 5 dólares, en Nueva York vale 100 dólares y en Moscú puede llegar hasta 300 dólares, siendo que en 1999 se exportaron 464 toneladas de cocaína. En sujeción a estas cifras, el valor de la venta de cocaína alcanzaría la suma de 46.000 millones de dólares, o sea un 56% del PIB colombiano (Periódico La República, 2000). Hoy los campesinos reciben por un kilo de pasta de base de cocaína de \$500 a \$600

dólares. Cada hectárea sembrada con hoja de coca produce 1,6 kilogramos de pasta base y en el proceso químico de conversión de la pasta de cocaína se invierten unos \$300 dólares por kilo sin contar la mano de obra.

Según estos datos se consolida la tendencia creciente del mercado de las drogas, mientras las cifras fluctúan dependiendo del precio que alcance la mercancía en el mercado mundial.

Figura 14: CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA



Fuente: DNP

Por otro lado, el valor agregado en las drogas no es proporcional al costo de sus factores en los mercados legales. En la industria colombiana, esto es particularmente notable en los ramos de la coca y la cocaína. El valor de la cocaína aumenta rápidamente en cada fase de la elaboración, en relación proporcional con los riesgos y el grado de monopolio en cada fase del

proceso, no al costo de oportunidad de sus factores (Thoumi, 1996:134). Cuando se comparan los precios de la hoja de coca, de la pasta, la base y de la cocaína al por mayor en Colombia y los Estados Unidos, se encuentra que se registran precios de venta al por mayor en Colombia entre el 10% y el 20% de los precios en los Estados Unidos. Esta diferencia es un reflejo del alto riesgo involucrado en el transporte y contrabando de cocaína a los Estados Unidos. Por tanto, los incentivos para que exista la organización alrededor de la industria se crean en torno a controlar el transporte y el contrabando. De la unión de estas fuerzas organizadas se han formado los llamados *carteles* (un tipo de cooperativa o asociación de exportadores), diseñados para minimizar el riesgo de operación.

Tan solo el valor de los ingresos rentables de la cocaína colombiana, para el año 2000, alcanza unos 3.574 millones de dólares (cifra equivalente al 3% del Producto Interno Bruto), que triplica las exportaciones de café, supera en 4% todas las exportaciones agrícolas lícitas y tiene un valor semejante a las exportaciones de Petróleo (Periódico El Colombiano, marzo 20 de 2000).

Las cifras son notables a pesar de que el número de hectáreas de cultivos ilícitos que muestra cada organismo presenta criterios y resultados divergentes. La razón para tales divergencias, según la Dirección Nacional de Estupeficientes, es que hasta ahora el país está implementando el sistema de monitoreo necesario para dar en forma detallada y segura las mediciones correspondientes a los cultivos. Por otro lado, la mayor parte de estos datos están suscritos para principios de los noventa y su actualización es muy escasa aún.

También la información estadística acerca de los desembolsos efectuados por concepto de los gastos en la lucha antidrogas es generalmente

inaccesible¹⁶. Primero, porque una parte importante de los gastos son complementarios a la asistencia técnica y financiera internacional, se concentran en las Fuerzas Armadas, y son considerados secretos por razones de seguridad nacional. Segundo, porque muchos gastos militares están encaminados a combatir tanto las drogas ilegales como la subversión armada y generalmente no es posible separarlos. Por lo tanto, no hay forma de establecer a ciencia cierta qué proporción de estos gastos deben atribuirse a la lucha contra las drogas, ya que la clasificación de los gastos de muchas agencias gubernamentales no permite determinar los fines de política para los cuales son usados y las burocracias gubernamentales tienden a ser reacias a proporcionar información sobre sus gastos. Según la referencia de López Restrepo (1997) para las décadas del sesenta y setenta, los gastos antidrogas cuantificables no han representado proporciones sustanciales del PIB o del gasto público, aunque variaron en respuesta a los asesinatos de líderes políticos atribuibles al narcotráfico o a acciones narcoterroristas.

Durante los años ochenta la proporción del rubro antidrogas en el gasto público fue baja comparada con los gastos sociales, pues nunca ha sido mayor al 2,8% de aquellos. Por consiguiente, no parece que la lucha contra las drogas haya sido causa de reducciones en el gasto social de aquella década (López Restrepo, 1997).

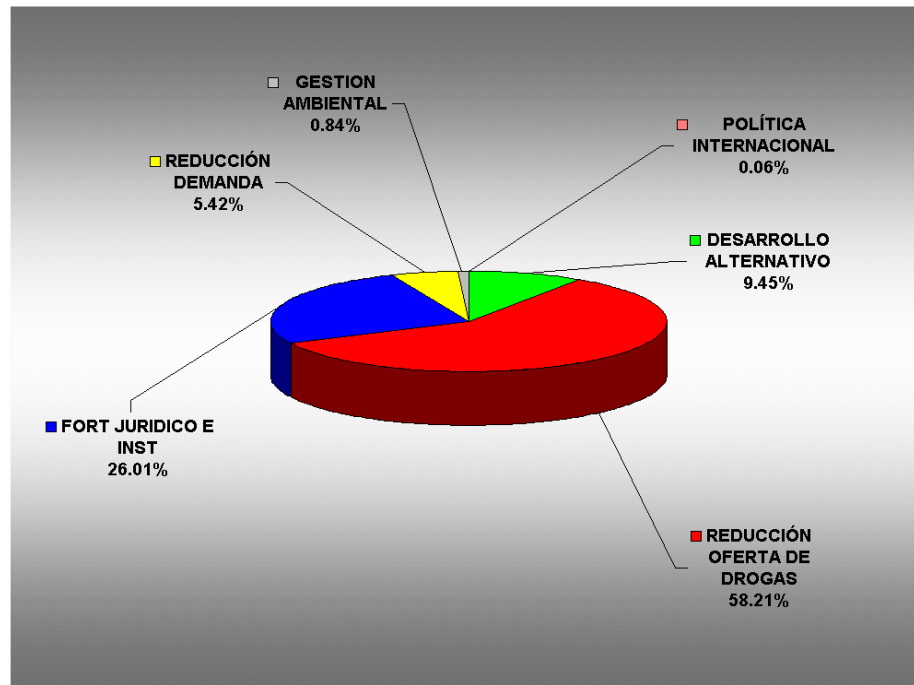
Para la década de los noventa, las estadísticas muestran que sólo para los últimos años de la década pasada se utilizaron más de dos millones de litros de Glifosato con costos superiores a los 53 millones de dólares, sólo para

¹⁶Un insumo importante del trabajo de investigación, fueron los únicos ejercicios que sobre el tema se han realizado en Colombia: (López Restrepo, 1997). La serie de tiempo iniciada por López, es continuada con la investigación de Percipiano, Alvarado y Vergara Ballén (2001).

controlar las plantaciones de amapola; y para el caso de la coca, entre 1994 y 1998 se gastaron en total 41 millones de dólares (Periódico El colombiano marzo de 2000). Para el período 1995-1999, el reporte de la Dirección Nacional de Planeación para el año 2000 proporciona los siguientes datos: el Estado colombiano destinó aproximadamente \$2.34 billones de pesos de 1999 en la reducción progresiva y sistemática de la producción, fabricación, distribución, tráfico, consumo de estupefacientes y delitos relacionados con el narcotráfico, esto equivale a US\$1.48 millones de dólares.

De estos recursos \$1.36 billones (58.21%) se orientaron a la Reducción de la Oferta de Drogas Ilícitas; \$613.6 mil millones (26.22%) al Fortalecimiento Jurídico e Institucional; \$221.1 mil millones (9.45%) al Desarrollo Alternativo; \$121.9 mil millones (5.21%) a la Reducción de la Demanda de Drogas, \$19.7 mil millones (0.84%) y \$1.4 mil millones (0.06%) a Gestión Ambiental y a la Política Internacional respectivamente (Departamento Nacional de Planeación, 2000 – 2002). Los anteriores datos muestran la tendencia creciente y sustancial del gasto público en relación con la lucha antidrogas como proporción del PIB (Figura 15).

Figura 15: Participación promedio del gasto del Estado colombiano entre 1995 y 1999



Fuente: DJS-GEGAI.

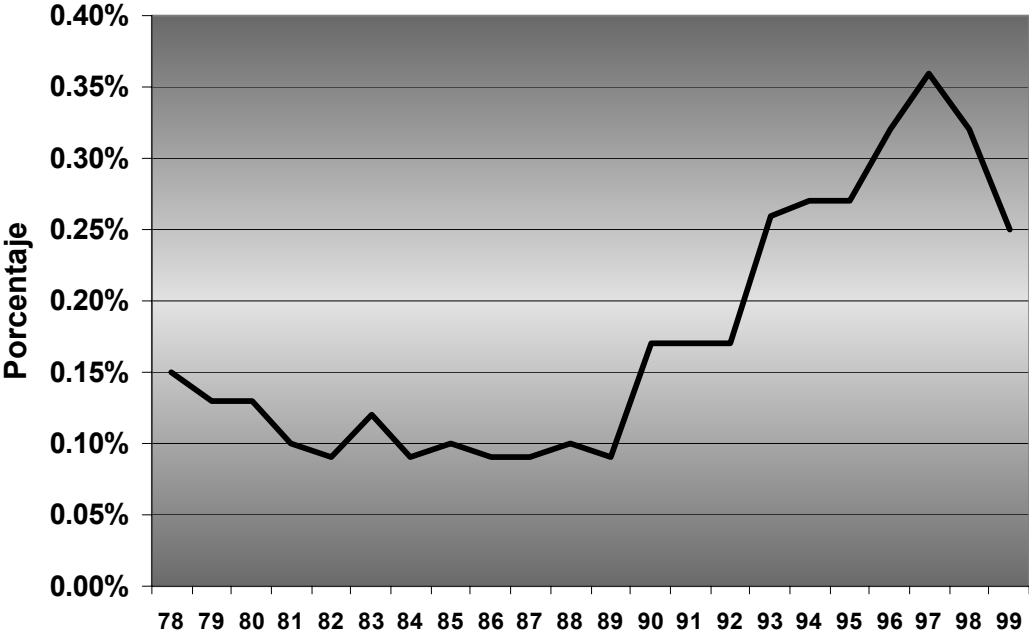
Colombia ha sido reconocida mundialmente como el mayor productor de hoja de coca, y en respuesta a este creciente comportamiento, la política antidrogas del Gobierno colombiano se orientó a partir de los noventa a fortalecer las acciones dirigidas a la destrucción forzosa de cultivos ilícitos y a la interdicción en la distribución y tráfico de estupefacientes. Estas prioridades se ven reflejadas claramente en la distribución del gasto, como se observa en el gráfico anterior. La alta participación de recursos fue asignada a la reducción de la oferta de drogas ilícitas y al fortalecimiento jurídico en materia de narcotráfico (84.43% del gasto total).

Según el reporte del Departamento Nacional de Planeación, la tasa de crecimiento del gasto de 1995 a 1999 fue negativa (-8.49%). También se

debe tener en cuenta que durante todo el período de estudio se observan crecimientos significativos en 1996 y 1997 (15.55%) y (13.46%), respectivamente. Estos incrementos son causados por la inversión de las Fuerzas Militares, específicamente en la adquisición de equipo fluvial por parte de la Armada Nacional. En el resto de los años, se registraron disminuciones del orden del (11.69%) y (20.96%), esto debido en parte a las restricciones presupuestales de los últimos tiempos. En los últimos cinco años, la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el Presupuesto General de la Nación de los recursos destinados en la lucha contra las drogas, ha sido en promedio de un 0.30% y 1.30%, respectivamente (Tabla IV).

En la Figura 16 se observa que, para el período 1978-1999, la participación de estos gastos en el PIB fue en promedio de 0.17% con tres fases definidas. Una que abarca desde 1978 a 1989 cuya tendencia fue estable con inclinación a la baja, es decir la economía colombiana creció a mayor tasa que los gastos del Gobierno en el tema de drogas; el segundo período entre 1990 a 1997 de franco crecimiento y un tercer período en 1998 y 1999 cuyo comportamiento es a la baja; lo que significa que nuevamente los gastos gubernamentales en la lucha contra las drogas estuvieron por debajo de la tasa de crecimiento de la economía.

Figura 16: Participación de los gastos antidrogas de Colombia en el PIB

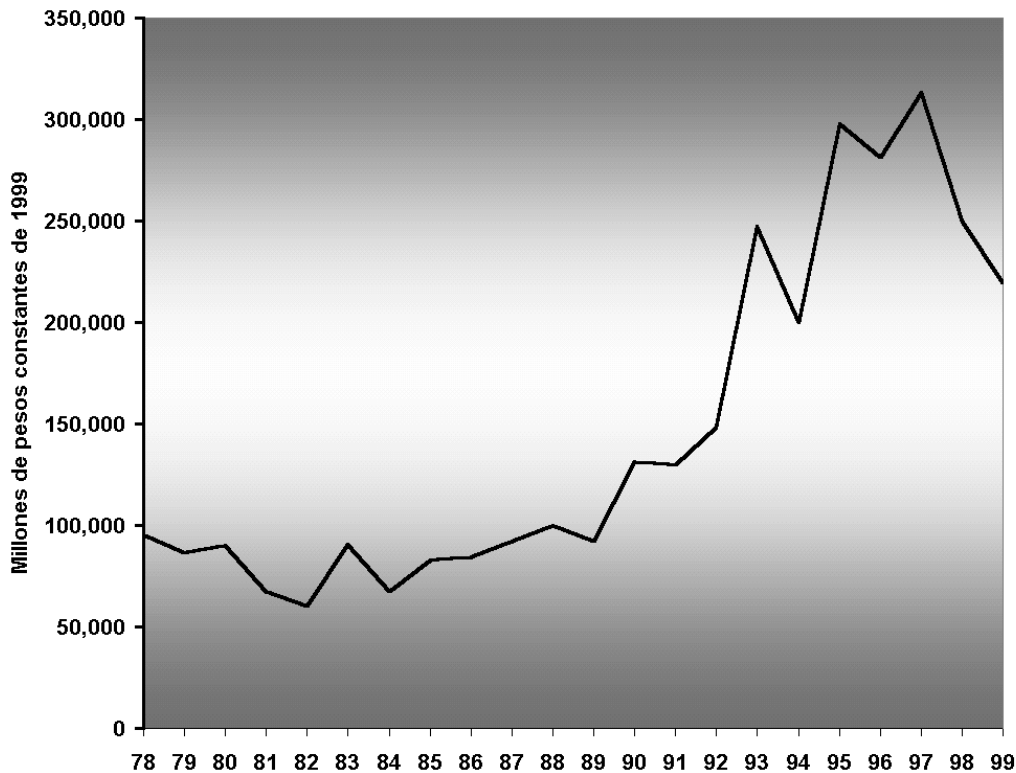


Fuente: DNP, DNE.

En el orden de la reducción de oferta de drogas, el país manifiesta características muy particulares por ser el único país que produce y exporta tres de los principales psicoactivos: cocaína, heroína y marihuana.

Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, entre 1995 y 1999 se fumigaron un promedio de 6.266 hectáreas de amapola y 41.180 hectáreas de coca al año. Acciones que se complementan con la destrucción de infraestructura para la producción industrial de drogas y su posterior comercialización, de las cuales cabe destacar la destrucción de un total de 2.489 laboratorios y 347 pistas clandestinas en el periodo comprendido entre 1995 y 1999.

Figura 17: Gastos del Estado colombiano en la Reducción de la Oferta de Drogas Ilícitas. En pesos constantes de 1999



Fuente: DNP, DNE.

Entre 1995 y 1999, los recursos financieros destinados en la reducción de la oferta de drogas ilícitas son del orden de \$1.36 billones. Más de la mitad del total de los gastos antidrogas, el 58.21%, se destinó para este objetivo estratégico (Figura 17).

Aunque es notable que los logros en erradicación son más satisfactorios en cultivos de amapola que en los de coca, cabe anotar que el área sembrada con hoja de coca es en promedio nueve veces mayor que la primera, lo que implica mayor orientación de recursos, físicos y humanos, a la destrucción de cultivos de coca. Esta puede ser la explicación de por qué los cultivos de coca exigen mayores recursos y por ende son la prioridad del Estado

colombiano. Para la década pasada los logros más importantes se presentaron en los períodos 1994–1995 y 1996-1997 con crecimiento en áreas asperjadas (Figura 18).

Figura 18: Aspersión cultivos de coca 1994 – 2002



Fuente: Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos. Auditoría Ambiental
Fuente: DNP, DNE.

4.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA DE LAS DROGAS

En las páginas anteriores se indicaron algunos datos acerca de los esfuerzos del Estado colombiano encaminados a mitigar, reducir y contener la industria de las drogas representados en las considerables cantidades de recursos que el país invierte en labores de aspersion de cultivos, interdicción de rutas e incautaciones, cuyo principal objetivo es el de la reducción de la oferta física de estupefacientes.

En este aparte, a modo de ejercicio instructivo, y recurriendo a las nociones de un modelo de equilibrio general se recogerán las implicaciones de una continua y sostenida represión por parte de las autoridades hacia las actividades del narcotráfico. Se tendrá en cuenta que este tipo de acciones represivas podrían ser contraproducentes, toda vez que la economía supone una reducción de la oferta para un producto que presenta una demanda inelástica a corto plazo, como la droga, conduciría a un aumento en su precio. A su vez, dicho aumento provocaría un incremento de las utilidades de los narcotraficantes consiguiendo mayor consolidación para la industria.

Respecto al marco de las relaciones de intercambio comercial entre los países desarrollados y los productores hay extenso consenso sobre que el comercio tiende a desplazarse a favor de los países desarrollados que exportan productos más elásticos y necesarios (Thoumi, 2002). El precio de la droga es determinado por la convergencia de una demanda inelástica y una oferta elástica. La primera se estima con los niveles de ingreso de los países desarrollados, y la segunda con los salarios de las economías con oferta ilimitada de mano de obra. El resultado, es un excedente que le

imprime un dinamismo a la actividad de este negocio. El mayor excedente se expresa en mayor producción, y así sucesivamente.

Lo interesante es analizar si el proceso conduce a una situación de equilibrio. Para conseguir una respuesta se puede acudir a un modelo simple expuesto por Thoumi. Se supone, en primer lugar, que la demanda es una función de un factor tendencia y que la oferta depende de los excedentes destinados por los productores de narcóticos para adquirir el equipamiento necesario para aumentar tecnología.

G_n , será el crecimiento de la demanda en los países desarrollados y w el salario predominante en las economías productivas¹⁷.

La variación del excedente estaría dada por la expresión:

$$\begin{aligned} & \uparrow(t, w, k) \\ G_s &= \mu q (1-\beta) \uparrow(t, w, k) \end{aligned}$$

En donde,

- G_s = crecimiento de la oferta
- q = precio de la cocaína
- μ = parte del excedente que se ahorra
- k = relación capital-producto
- \uparrow = tasa de crecimiento del excedente
- β = fracción decomisada
- t = índice de expansión de la actividad
- w = salario real

Si G_s es mayor que el crecimiento de la demanda G_n , el precio de la droga bajaría y en el caso contrario subiría. En equilibrio se tendría:

¹⁷Necesariamente el excedente (\uparrow) es constante para funciones de producción homogéneas de grado uno y creciente para funciones de mayor grado.

$$q' = \frac{Gn}{\mu \uparrow (t, w, k) (1-\beta)}$$

En donde q' es el precio de equilibrio de los narcóticos. Siendo esto así, se infiere que el precio internacional depende del excedente, del ahorro y de la represión. Si el excedente fuera constante, el precio externo tendería a mantenerse inmodificable y se generaría un proceso de expansión de la oferta por encima de la demanda predominante sobre las acciones represivas.

Otro de los aspectos que se concluyen de la ecuación es la escasa discrecionalidad de los países productores para alterar la oferta. Suponiendo por un momento, que se procede a reducir la oferta mediante una mayor represión, es decir aumentando el coeficiente ϵ , se presentaría la contracción de la oferta que contribuiría a detener la caída del precio. Las mejores condiciones de venta se reflejarían, a su vez, en un mayor excedente que contribuiría a ampliar la inversión y la oferta neutralizando la represión inicial. A menos que se acentúe la represión, al cabo de un tiempo se retornaría al proceso de largo plazo. Es así como la ecuación (1) como tendencia de largo plazo de los precios depende fundamentalmente de las características de la producción y del porcentaje destinado al ahorro.

En este punto se destaca otro elemento particular de la droga. Los narcóticos producen externalidades que justifican en términos económicos, morales y políticos la acción para reprimir la oferta. En los países consumidores se usan instrumentos para impedir su entrada y se presiona a los países productores para combatir su fabricación y tráfico. Esta represión se

manifiesta en la elevación del precio que, en términos económicos, corresponde a un impuesto captado por los traficantes. Debido a la inelasticidad de la demanda, este impuesto provoca una pequeña disminución del consumo y un enorme aumento de las utilidades de los traficantes.

La presencia de un producto que causa externalidades justifica la intervención para elevar el precio y bajar la demanda. Opiniones generalizadas sostienen que las soluciones de fondo deben recaer sobre los países consumidores por ser los responsables de la demanda. Sin embargo, las observaciones de la economía aclaran que no se trata de un propósito tan sencillo.

Usualmente se dice que las políticas represivas no han dado resultados satisfactorios, aduciendo que el consumo de droga no ha disminuido y que los precios internacionales han descendido. Nunca se hace suficientemente explícito lo que ocurriría en ausencia de las acciones represivas en un producto como la cocaína, cuyo precio externo es superior en más de veinticinco veces al costo. Por inelástico que sea el producto, una reducción de esa magnitud provocaría un cambio impredecible de la demanda. El argumento de la inelasticidad de la demanda tan sólo es válido para cambios marginales y es el que pone de manifiesto la creciente utilidad de la industria de las drogas y traficantes.

En Colombia los efectos de los flujos ilegales de capital suelen tener en la estructura económica y macroeconómica repercusiones muy fuertes, incluso cuando estos flujos son relativamente pequeños. Aunque actualmente el lavado de dinero ilegal es una actividad mermada, porque es muy difícil lavar grandes cantidades de divisas debido a las características estructurales de la economía, aun se lleva a cabo. Esto indica que a la larga los costos de lavar activos en el país probablemente aumenten a futuro ya que cada vez se está

volviendo más estrecha la vía para introducir estos dineros. La compra de tierra es otro aspecto que desarrolla su propio marco para comprender el significado social, político y económico de lo que significa el poder de adquisición de los narcotraficantes gracias al margen de utilidad que maneja la inelsticidad de la droga.

Social y políticamente también hay incidencia creciente de la producción, el tráfico y el consumo de narcóticos del país. Los efectos económicos colaterales del narcotráfico, la “enfermedad holandesa”, el contrabando, la concentración de tierras, el desestímulo a la inversión nacional y extranjera y la alteración de diversos precios relativos claves superan los efectos nominales. La tolerancia inicial permitió que los dineros de la droga se convirtieran en inversiones urbanas y rurales en finca raíz, en aportes a las campañas políticas y en financiación del deporte profesional cobrando vida en la realidad social con un ambiente propicio, caracterizado por la polarización de las fuerzas económicas y políticas del país. Apoyado en los enormes recursos financieros que logra acumular el narcotráfico se enfrenta al orden establecido que no lo reconoce legalmente pero que sí lo acoge económicamente, consiguiendo permear las diversas instancias del Estado y la Sociedad Civil.

4.3 CONFLICTO ARMADO Y NARCOTRÁFICO

La presencia de la guerrilla en las zonas productoras de coca obedecía en un principio a la posibilidad de contar con bases económicas y campesinas de financiamiento sin involucrarse directamente en la producción de la coca, evitando así su acción corrosiva.

Para el año 1992 el Quinto Frente de las FARC en el Guaviare, posiblemente tratando de controlar la relación entre ‘raspachines’ y ‘chichipatos’, y poner en orden en la región, comenzó a cobrar un porcentaje del 10% de la base de coca que circulaba (Periódico El Espectador, febrero 27 de 2000). Muy seguramente como resultado de los resultados comprobados por los márgenes de lucro propio del comercio y tráfico de las sustancias psicoactivas, la medida se extendió a las demás regiones. Posteriormente los grupos paramilitares entraron a disputar poder en estas regiones para obtener estos grandes recursos, pasando a ser el negocio de las drogas uno de los epicentros de la encarnizada guerra del país.

Prueba de que la guerra se ve envuelta por el dominio y usufructo del narcotráfico son las trágicas remembranzas de Mapiripán en 1997, de la Gabarra en 1999 y 2000 en el sur de Bolívar; las delicias en Puerto Asís y en el suroccidente del Tolima sucedidas a finales de 1999. La masacre de Mapiripán, por ejemplo, tuvo como objetivo erradicar a las Farc y permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia tomaran el control de la economía ilegal de esta parte del departamento del Guaviare, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, producía el 30% de la producción de hoja de coca del mundo. Los paramilitares asesinaron el 4,9% de la población sin la confrontación de la autoridad civil o militar, que ya estaba puesta en sobreaviso (Periódico El Espectador, febrero 27 de 2000).

Observadores del conflicto como Armando Montenegro, entre otros, coinciden en afirmar que la coca fue y es negocio de la guerrilla, que si bien pueden no sembrar la coca, se quedan con el impuesto que cobran por producirla y comercializarla, y que sin el apoyo del narcotráfico no habría sido posible el espectacular incremento reciente del paramilitarismo en Colombia.

Desde que en la década de los ochenta narcotráfico y guerrilla descubrieron intereses mutuos, cuando esta última se convirtió en fuente disponible de protección para las operaciones de manufacturación y envío de drogas en regiones de la escasamente poblada mitad oriental del país bajo su control, la relación se ha fortalecido. A pesar de las alianzas entre el narcotráfico y guerrilla, sus relaciones han demostrado ser muy conflictivas. La guerrilla intentó aplicarles los mismos métodos *tributarios* utilizados con los terratenientes tradicionales, y en algunos casos llegaron incluso a secuestrar a los empresarios del narcotráfico y a sus familiares para obtener rescate. Tales prácticas terminaron en una fuerte reacción de estos últimos y en la creación de grupos paramilitares, los cuales protegían las inversiones de la industria.

En general, narcotráfico y guerrillas han sido aliados extraños. En ocasiones el gobierno ha sido su enemigo común, pero fundamentalmente tienen objetivos opuestos. El narcotráfico representa una forma de capitalismo crudo y desenfrenado, mientras que las organizaciones guerrilleras dicen luchar contra el capitalismo severo e injusto que ha prevalecido en el país.

4.3.1 El escenario del narcotráfico y el conflicto.

La dinámica del conflicto armado colombiano se desarrolla al amparo de la ineficiencia y precariedad en la cobertura de las instituciones estatales. La existencia de cultivos ilícitos va emparejada a la presencia de determinadas variables, entre ellas, indicadores de la eficiencia de la gestión del Estado como el número de muertes violentas o la cobertura en educación, así como el grado de informalidad que también es determinado por el control del Estado sobre la tributación de la actividad económica en general. De esta

forma, la correlación sería que a mayor informalidad, asesinatos, delitos, concentración de la tierra, etcétera, habrá mayor profundización del problema del narcotráfico.

Lo anterior es posible en la medida en que, según la teoría económica del crimen elaborada por Gary Becker y retomada por los trabajos empíricos de Ricardo Rocha sobre este tópico, las tasas de criminalidad tienen una relación inversa con la probabilidad de recibir castigos respectivos, es decir, que a medida que la probabilidad de que los crímenes queden impunes sea alta o que en un momento dado empiece a presentar aumentos, se convertirá en un incentivo para que diferentes agentes se vean tentados a iniciar actos delincuenciales o afianzar los que ya practica (Rocha, 2000).

Ricardo Rocha, por ejemplo, alude a que en el inicio del narcotráfico como actividad delictiva se dio el escenario adecuado para su surgimiento, y hoy es un fenómeno que constantemente se retroalimenta del mayor dinamismo que va adquiriendo en las zonas más apartadas, amenazando con la estabilidad de la nación en general. Su estudio corrobora como este flagelo tiene relación negativa con variables tales como la cobertura en educación, tanto primaria, como secundaria, participación ciudadana y desarrollo humano.

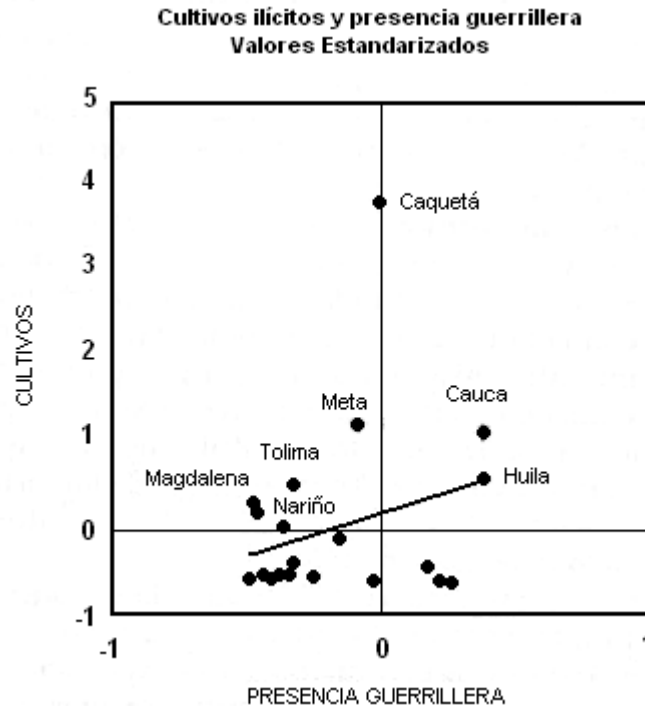
Diferentes autores han realizado proyecciones y aproximaciones sobre los ingresos recibidos en el país por concepto de tráfico de drogas, Steiner (1997); Caballero y Junguito (1978); Gómez (1988-1990); sin embargo, otros autores las han considerado erróneas debido a la dificultad en la obtención de información fidedigna pues cada uno de los componentes de los cálculos (cocaína procesada, precios, confiscaciones, porcentaje del mercado, coeficientes técnicos) tan sólo se obtienen realizando supuestos que

generalmente son de difícil constatación tratándose de una industria ilegal (Ver Apéndice A).

Con el fin de concebir mejor la relación entre el fortalecimiento de los grupos armados y la industria del narcotráfico Ricardo Rocha abarca la totalidad de los últimos 25 años del narcotráfico en Colombia, para hallar la correspondencia entre presencia guerrillera y cultivos, y compras de tierras y paramilitares por el otro (Figura 19 - 20).

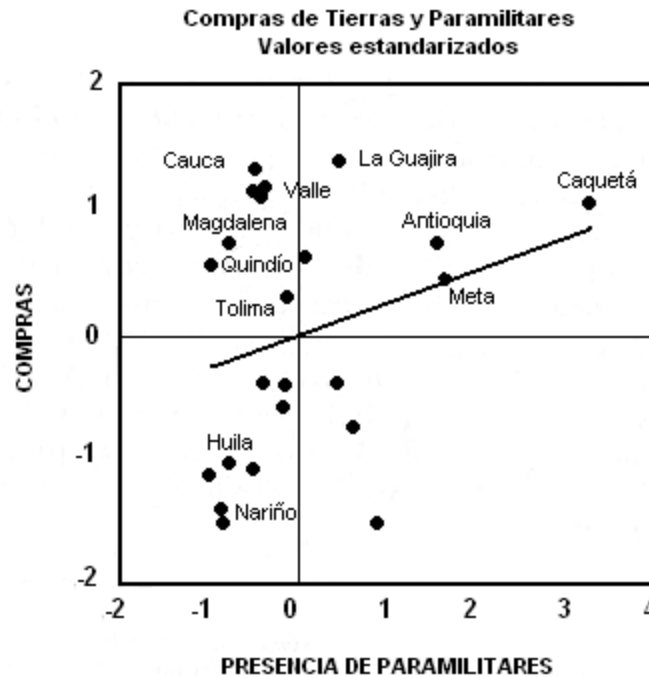
Para el primer caso ya se ha hecho alusión a la conexión entre cultivos ilícitos y presencia guerrillera a lo largo del capítulo.

Figura19: Cultivos ilícitos y presencia guerrillera



Fuente: Rocha, 2000

Figura 20: Presencia Paramilitar



Fuente: Rocha, 2000

Para el segundo, Ricardo Rocha elabora un amplio análisis sobre la estructura económica del país junto a las facilidades y posibilidades de repatriación y lavado de ingresos por concepto de tráfico de drogas, anotando como conclusión que los grandes traficantes se inclinan a invertir en grandes extensiones de tierra que les sirven de elemento estratégico de dominación y que protegen con la creación de grandes ejércitos, que a larga terminan convirtiéndose en fuerzas extremas. Es en este sentido, según el autor, en el que se evalúa el grado de relación existente entre los grupos de autodefensa y el tráfico de estupefacientes.

Tal y como los datos de corte transversal de el Cuadro IV lo corroboran, los departamentos colombianos que presentan una mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de coca, amapola o marihuana tendrán una mayor

posibilidad de sufrir la presencia de grupos subversivos. Para este caso, dicha presencia fue medida con la variable Proxy: acciones guerrilleras por cada 100.000 habitantes. Casos como los de los departamentos de Caquetá, Meta y Guajira son ejemplos contundentes donde se puede apreciar la interconexión entre la compra de grandes extensiones de tierra con la presencia del paramilitarismo. En estos departamentos han ido de la mano el aumento del porcentaje de unidades agrícolas grandes, con respecto al total, y el número de masacres realizadas por este tipo de grupos.

Cuadro IV: Correlaciones entre los cultivos ilícitos y variables seleccionadas

0.64	UAF	% de propiedades grandes, según UA
0.41	INFOP	Índice de informalidad
0.41	ASS	Asesinatos por 10.000 habitantes en promedio 1980-94
0.40	CRIM	Delitos por 10.000 Habitantes en promedio 1980-94
0.39	AGMIN	Vocación a los sectores primarios de la economía
0.31	TFN80	Tasa de fecundidad en 1980
0.30	GOB	Promedio de gobernadores 1985-89
0.28	PRO50H	Propiedades mayores a 50 hectáreas
-0.35	ENG	Consumo de energía eléctrica
-0.35	PRIM	Cobertura de educación primaria
-0.36	IDH85	Índice de desarrollo humano en 1985
-0.36	PROED	Índice de progreso de la educación
-0.37	POUR85	Participación de la población urbana
-0.37	PRIM80	Cobertura de la educación primaria

-0.39	POUR	Participación de la población urbana
-0.41	SEC	Cobertura de la secundaria

Fuente: Rocha, 2000.

Con estos datos hay mayor evidencia del papel que representa el fenómeno de tráfico de sustancias ilícitas en el contexto del conflicto colombiano. No sólo porque es un catalizador de la desintegración y fragmentación de la institucionalidad del Estado nacional, sino también, porque es un importantísimo sostén económico de los principales agentes del conflicto que les brinda la capacidad para fortalecer su accionar militar, de dominio territorial y político.

El marco de trabajo que presenta Rocha muestra datos que dejan en evidencia la magnitud y el grado de desarrollo que presenta la industria de estupefacientes colombiana cuyas repercusiones no sólo son patentes dentro de las fronteras nacionales, sino que las trascienden ampliamente, convirtiéndose en un problema de marcado interés para países industrializados, como los Estados Unidos, principales demandantes de dichos productos. Por esta razón, el análisis y la comprensión de la lucha presentada en el territorio colombiano debe tener como referente ineludible de reflexión que el actual conflicto armado y narcotráfico están intrínsecamente relacionados.

Para este trabajo uno de los elementos que tiene mayor relevancia para explicar la supervivencia del conflicto está relacionado con las implicaciones que se desprenden de la interconexión entre agentes armados y tráfico de drogas. A la luz de las nociones que implica la nueva guerra, los conflictos emergentes tienden cada vez más a presentarse no en los lugares donde existe miseria y pobreza, sino en aquellos lugares donde las fuerzas en

contienda entrevén la posibilidad de obtener fácilmente rentas económicas de determinadas actividades, principalmente de aquellas de tipo primario configurándose así la que es denominada una “economía de guerra”, uno de sus componentes característicos.

Finalmente, para concluir esta revisión, hay que anotar que todas las tesis de los nuevos estudios acerca de la violencia y la agudización del conflicto en Colombia tienen, de una forma o de otra, un elemento en común: el explosivo desarrollo del narcotráfico en los últimos veinticinco años. La ola de violencia que comenzó en los años setenta y que se prolonga hasta nuestros días coincide con el despegue y la difusión del narcotráfico, primero con los cultivos de marihuana y luego con los de coca y amapola.

Las cifras son realmente abrumadoras: mientras que en 1985 el país tenía cerca de 22.000 hectáreas sembradas con coca y amapola, en 1999 esta cifra llegaba a 134.000 hectáreas (Ministerio de Defensa, 1999). Según estos datos, Colombia es ahora responsable del 70% de la producción mundial de coca; en 1990 era sólo del 19%. Por otro lado estos datos coinciden en que a medida que se extiende el narcotráfico se presenta un enorme incremento de la tasa de homicidios; por ejemplo: de 31 por cada cien mil habitantes a finales de los años setenta, a 62.7 en el año 2000 (Figura 21); y los secuestros ascendieron de sólo 44 en 1980 a 3.706 en el 2000 (Figura 22).

Figura 21: Tasa de homicidios en Colombia por cien mil habitantes



Fuente: Montenegro y Posada, 2001.

Figura 22: Cultivos lícitos y número de secuestros



Fuente: Montenegro y Posada, 2001.

De acuerdo con Alejandro Gaviria, el impacto del narcotráfico fue fundamental en el surgimiento y la prolongación de la ola de la violencia de mediados de los años setenta y principios de los noventa, no sólo por el hecho de que los narcotraficantes dirimen sus asuntos de manera violenta, sino porque su actividad ha tenido el efecto indirecto de impulsar la criminalidad general: ha congestionado el sistema penal, ha difundido técnicas criminales y acelerado la transformación de valores morales de manera propicia para el delito (Gaviria, 2000). El narcotráfico no sólo causa violencia directa, a través de los múltiples asesinatos y vendettas que suscita, sino que induce el desplome y debilitamiento de la justicia. Sus recursos han fortalecido a la guerrilla y los paramilitares, al tiempo que han abrumado, corrompido y debilitado la capacidad de respuesta por parte del Estado y la sociedad en general. La difusión del crimen, además, disminuyó la probabilidad de castigo, desarrolló habilidades entre los criminales y creó cambios culturales que permitieron su multiplicación.

Hoy no cabe duda que sin el aprovechamiento de los recursos de la coca, el petróleo y otros productos de reciente desarrollo, la guerrilla no tendría la capacidad militar que hoy ostenta pues debe recordarse que cuando comenzaron las bonanzas de la droga y del petróleo, los grupos guerrilleros eran bastante débiles. Las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- tenían diez frentes y sólo 980 hombres en 1980; el Ejército de Liberación Nacional -ELN- estaba prácticamente derrotado: sólo contaba con setenta guerrilleros después del reverso sufrido en Anorí (Gaviria, 2000). Desde entonces, en forma paralela al auge de la coca y el petróleo, las guerrillas han presentado un vertiginoso crecimiento. Los autores que analizan a estos grupos guerrilleros coinciden en la enorme importancia de las bonanzas en los años ochenta y noventa para su expansión durante el mismo período. La figura 23 y 24 muestran el claro paralelismo entre el

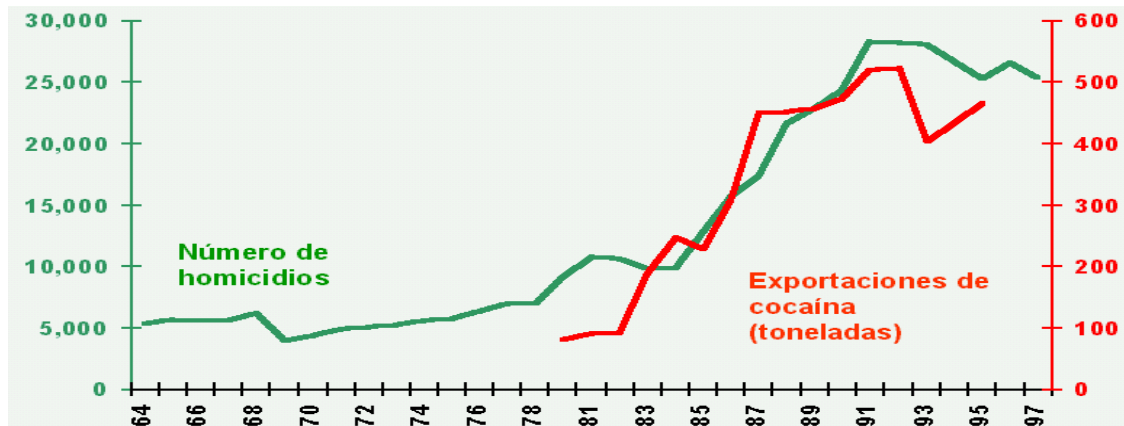
aumento de los cultivos ilícitos y el pie de fuerza de los grupos guerrilleros con la intensificación del conflicto.

Figura 23: Cultivos ilícitos y número de guerrilleros



Fuente: Montenegro y Posada, 2001

Figura 24: Intensificación del conflicto y expansión del narcotráfico



Fuente: Policía Nacional

En resumen, el mercado ilegal de las drogas genera fuerzas en dirección opuesta a la construcción legítima del orden, debido a su concentración y gran tamaño, y al comportamiento de sus empresarios. La inversión de la empresa ilegal alimenta un círculo vicioso en la distribución del ingreso y la riqueza en las diferentes regiones por el carácter impredecible y en parte arbitrario de las ganancias, así como la ilegalidad de las mismas al contribuir al comportamiento depredador y codicioso que permea todos los niveles sociales del país. La asimilación del capital de dicha industria legitima esos comportamientos.

Con este panorama Colombia encaja dentro de la estigmatización de la nueva guerra a medida que el Estado perdió la capacidad para hacer cumplir sus leyes debilitándose el imperio de la ley sobre la economía y su capacidad para hacer cumplir sus propias políticas. La creciente pérdida de legitimidad del régimen ha estimulado el desarrollo de un comportamiento en extremo codicioso y ávido de rentas produciendo mercados fundamentalmente imperfectos.

5. DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO COLOMBIANO

Las guerras contemporáneas parecen ser predominantemente guerras sin Estado. En este sentido, Jean Meyer afirma: “Desde antes del final de la guerra fría la teoría clásica había empezado a fallar y los conflictos habían tomado formas muy diversas, que no correspondían a la idea del enfrentamiento entre Estados o sociedades por lo que éstos percibían como sus ‘intereses’. Las guerras actuales tienen un perfil radicalmente diferente, sin principio ni fin, a veces sin racionalidad aparente, sin respeto de las ‘leyes de la guerra’, con una marcada tendencia a disparar más sobre las poblaciones civiles que sobre adversarios armados. Los Balcanes, África, Chechenia, son algunos ejemplos. Afganistán nos lleva además al problema del terrorismo internacional y de la intervención total en nuestro mundo finito” (Meyer, 2000).

Después de la Segunda Guerra Mundial se fue configurando progresivamente un orden mundial en lo político, militar y económico caracterizado por la bipolaridad. De una parte, es decir, dos grandes áreas mundiales, los conocidos como el campo socialista y el capitalista, influenciadas y lideradas cada una por una superpotencia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. La otra característica era la tendencia a un cierto multilateralismo a partir de las alianzas regionales en lo político-militar: el Pacto de Varsovia y la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

La Organización de Naciones Unidas surge como un ente de confluencia de los dos campos de ese orden mundial y esto la convierte en un espacio en el cual, hay una mezcla simultánea de confrontación, negociación y cooperación. Este orden mundial perduró durante cerca de medio siglo y simbólicamente finalizó con la ‘caída del muro de Berlín’ y el derrumbe del

llamado campo socialista, aun cuando ya venía erosionado, en lo económico, lo militar y lo político. El período de la llamada 'guerra fría' generó una situación de estabilidad que garantizó un orden basado en la lógica de la distensión.

Posteriormente emerge un nuevo orden internacional basado en un esquema aparentemente transitorio, caracterizado por la unipolaridad, es decir, ya no existe sino un solo polo hegemónico global en lo político-militar, la superpotencia norteamericana, aun cuando se dé una tendencia a la multipolaridad en lo económico, con tendencias a polos regionales en la Unión Europea, el Sudeste Asiático y América del Norte. Lo anterior, junto con el cambio de las relaciones Este-Oeste, ha influido en el replanteamiento de las relaciones Norte-Sur, en el rol de la ayuda al desarrollo y en el peso relativo que a nivel internacional tienen movimientos de países del Sur como los No Alineados.

Después de los actos de terrorismo en Septiembre del 2001 en los Estados Unidos aparecen varios interrogantes y un aparente movimiento hacia una nueva configuración del orden global. Pareciera modificarse la tendencia al unilateralismo de la potencia dominante y aparece la búsqueda de un multilateralismo. Son estos hechos terroristas, en los cuales no sólo se hace realidad una de las amenazas más claras de la posguerra fría, el terrorismo con alcance global, sino que además evidencia que la seguridad total no existe en ninguna sociedad.

Como respuesta se plantea un tipo de confrontación sinónimo del concepto de la nueva guerra en la cual el 'enemigo' es más difuso, se trata de redes de grupos fundamentalistas o terroristas y no necesariamente de Estados; se está frente a un 'enemigo' no claramente delimitado ni definido y se actúa en dimensiones colaterales (disuasión al entorno, guerra psicológica, acciones de

control-prevención), pero no necesariamente enfrentando a un ejército adversario claramente precisado.

Uno de los efectos más importantes, a nivel internacional y nacional, es de tipo simbólico y político, es decir, la opinión pública tendió a endurecer su mirada respecto a los grupos armados no estatales, a quienes eventualmente veía de manera complaciente o por lo menos tolerante, ya sea como grupos de luchadores contra gobiernos autoritarios o como rebeldes. A partir de los hechos del 11 de septiembre se tiende a generalizar una mirada menos tolerante y a identificar a este tipo de organizaciones como terroristas o por lo menos muy próximas a éstas. Esto explica el otorgamiento del estatus de terroristas a las FARC y las AUC por la Unión Europea o el cambio de actitud de México frente a la presencia de una oficina pública de las FARC en su territorio. A partir de entonces, todo revela que la confrontación armada colombiana ha ingresado en una dinámica de evolución aligerada, sobre todo luego de la ruptura del proceso de conversaciones entre Gobierno y FARC que adelantaba el gobierno Pastrana y del inicio del actual gobierno, con sus nuevas estrategias de 'seguridad democrática'.

Sin embargo, no es despejado el significado de los cambios y por supuesto tampoco hay convergencia en la exégesis de los mismos. Por ello se ha planteado a lo largo de este trabajo algunas direcciones en las cuales se están moviendo dichas transformaciones. Aventurando hipótesis acerca de la acepción de las mismas, se puede decir que el esquema conflictivo de la nueva guerra que caracteriza a luchas como la colombiana, deja manifiesto que los derechos humanos –en particular los derechos sociales, económicos y culturales– no están garantizados en tanto prevalezca la conflagración. El balance inestable y transitorio de este tipo de lucha se refleja en la garantía o

involución de estos derechos. La correlación de fuerzas de este enfrentamiento se refleja en la supremacía de las lógicas económica o política. Únicamente en aquellas sociedades en las cuales se han arraigado las instituciones propias del Estado social de derecho, donde el interés público prevalece sobre los intereses privados y corporativistas, el conflicto entre identidades, sin desaparecer, aleja la amenaza de transformarse en una guerra, y las pugnas se tramitan y transforman de manera democrática (Kaldor, 2001).

Por otro lado, es certero según Clausewitz que existe una estrecha relación entre la guerra y las transformaciones de la sociedad, ya que no es posible que en la sociedad se produzcan cambios profundos sin conflicto. Sin embargo, a partir del siglo XX las guerras se han librado, cada vez más, en oposición al crecimiento de la economía, la infraestructura y la población civil, para Mary Kaldor. Los civiles son a menudo el objetivo predeterminado de la violencia entre clases sociales o grupos ideológicos con intereses antagónicos. Sobre ellos recae la muerte, la intimidación, la expoliación o la expulsión, y por tanto no son víctimas accidentales.

Las nuevas guerras se tornan violentas con mayor frecuencia que las tensiones entre naciones soberanas. El campo de batalla puede estar en cualquier parte, y la distinción entre combatiente y no combatiente queda diluida. Los sujetos de los conflictos crean una economía política de la guerra, y en la lucha por la supervivencia dentro de los combates violentos entran en juego, además, factores como las diferencias regionales que forman la base material para la reproducción de la vida social, cultural y comunitaria, los derechos humanos, las jerarquías sociales, las ideologías políticas, las tensiones ocasionadas por las desigualdades y las estructuras

de clases sociales y la ayuda internacional como armas de guerra (Aguirre, 1998:6).

Aludiendo a las nociones que Mary Kaldor ha planteado acerca de las nuevas guerras, y la pertinencia de dicho instrumental analítico para el estudio de la guerra nacional, en los capítulos anteriores se llevó a cabo una descripción general del conflicto colombiano. A partir de las siguientes páginas se realizará un bosquejo de la dinámica actual de la guerra, bajo la batuta del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática. Para tal fin se tendrá en cuenta la base de datos y el análisis reciente de Jorge Restrepo y Michael Spagat (2004) en el que se rescatan los principales eventos ocurridos a nivel de conflicto armado.

Los extraordinarios acontecimientos de los últimos meses han proporcionado una pausa a los estrategas y observadores de la política externa para reexaminar los fundamentos más profundos sobre los cuales ha descansado el análisis de la seguridad nacional en los últimos años.

La sociedad civil colombiana se encuentra cada vez más polarizada y atomizada. La guerra profundiza la ruptura social, la anomia y los enfrentamientos ideológicos entre los defensores del establecimiento y los que promueven una transformación de carácter social y global. Producto de esta situación, cada fragmento de la sociedad se aferra a sus intereses particulares en detrimento del “bien común”, en un contexto de guerra permanente dominado por un choque de sectores de población contrapuestos.

Ante un Estado no colapsado, pero que pierde autoridad en la periferia, sectores de los más diversos ámbitos se cierran en la defensa del establecimiento y se transforman en autodefensas y paraestados, mientras otros se alinean con la insurgencia en el proyecto insurreccional.

Para el año de 1998, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, dio por terminadas las negociaciones de paz con las FARC. Esta decisión de consecuencias imprevisibles, pareció estar motivada por una combinación de elementos que conformaron el nuevo contexto en el que quedó inserto el conflicto colombiano.

El vuelco de Pastrana hacia la "opción militar" se materializó con el objetivo de recuperar el control estatal de la otrora zona de distensión y acabar con la infraestructura guerrillera. El entramado jurídico que posibilitó más de tres años de conversaciones entre el gobierno y la principal fuerza guerrillera se derrumbó: la decisión gubernamental puso fin a la zona de distensión y al reconocimiento político de las FARC como fuerza beligerante, al tiempo que se reactivaron las órdenes de captura contra los representantes de la guerrilla y se revocó la autorización a los municipios de la zona desmilitarizada para crear los cuerpos cívicos de convivencia (integrados por miembros de las instituciones del Estado y de la guerrilla).

Las FARC respondieron con una ola de sabotajes a la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, que instaló en el seno del gobierno una discusión sobre la conveniencia de declarar el "estado de conmoción interna", una alternativa resistida por algunos sectores, que ven en esa medida un perjuicio para la imagen de Colombia ante la comunidad de negocios internacional.

¿Pero, qué cambios en el contexto nacional e internacional decretaron este punto de inflexión y la vuelta a la opción militar? ¿Hubo convicción para la paz detrás de la puesta en escena de la mesa de diálogo?

5.1.1 El plan Colombia.

El actual contexto nacional e internacional es muy diferente de aquel que predominaba en 1998, cuando se inició el diálogo entre el gobierno Pastrana y las FARC. Tanto las clases dominantes colombianas como el Departamento de Estado norteamericano habían concluido que no era posible derrotar en el terreno puramente militar a una guerrilla que regularmente llevaba a cabo resonantes golpes –materiales y morales– contra las Fuerzas Armadas del Estado. Con independencia de las posibilidades reales de que las FARC se adueñaran del poder, lo cierto es que la correlación de fuerzas en el terreno militar les permitía controlar un tercio del territorio nacional, configurando un irrefutable Estado dentro del Estado. No es casual que diversos estudios de opinión reflejaran que siete de cada diez colombianos pensaran que la guerrilla estaba derrotando a las Fuerzas Armadas (Sarmiento Anzola, 2001).

Como resultado, en seis semanas empezó a circular un "nuevo" Plan Colombia, con mucho mayor énfasis en el fortalecimiento del Estado y de las fuerzas armada y en la lucha antidrogas. En él se estableció un programa con un costo total de 7.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones debían provenir de ayuda extranjera. Por su parte, Colombia se comprometía a aportar 4.000 millones de sus propios recursos y de préstamos de instituciones financieras internacionales, al tiempo que la administración norteamericana comprometió un aporte de 1.300 millones de dólares, esencialmente destinado a fines militares y uno de cuyos ejes era recuperar el control del Estado sobre los centros productores de coca (Petras, 2001).

Por otra parte, la situación sin salida de grandes masas de campesinos, combinada con la experiencia de las FARC en anteriores procesos de paz, atentó contra una salida política negociada al estilo centroamericano. En ese

sentido vale recordar el cese de fuego firmado en 1984, mediante el cual el gobierno de Belisario Betancourt se comprometía a desarrollar una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y la guerrilla se comprometía a organizarse políticamente para participar en la lucha política legal. En esa oportunidad la normalización democrática mostró trágicamente sus límites: luego de obtener 26 diputados y 6 senadores, la Unión Patriótica –coalición legal de la que participaron las FARC- fue víctima de un verdadero genocidio político, que arrojó un saldo de entre 4.000 y 5.000 muertos entre militantes, candidatos y dirigentes¹⁸. Esos límites para desarrollar una política abierta hacia el movimiento de masas condicionan cualquier tentativa de pacificación y ponen de relieve la matriz sobre la que opera la lucha colombiana.

5.2 COYUNTURA PRESENTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO ANTE EL CONFLICTO ARMADO

El nuevo contexto internacional, sumado a la evolución de la situación interna colombiana, ha ido modificando la correlación de fuerzas (política y militar) entre el gobierno y la guerrilla, posibilitando que el Estado recupere la confianza para emprender una nueva jornada militar. Entre los factores que ha señalado Heinz D. Steffan como determinantes de esta nueva realidad se puede señalar¹⁹:

- El mencionado cambio político mundial después del 11 de septiembre;
- Las lecturas sobre la capacidad destructiva de sus armamentos que hicieron el Pentágono y la Casa Blanca después de la guerra de Afganistán;

¹⁸Entre los asesinatos ocurridos en este período se destacan los cometidos contra los candidatos presidenciales de la UP, y el principal dirigente del grupo M-19, Carlos Pizarro León Gómez, quien también firmó la paz con el gobierno en 1984.

¹⁹Archivo secreto de la ruptura, www.rebelión.org, 2002.

- El fortalecimiento de la capacidad militar de Bogotá, a través de la ayuda militar estadounidense (Plan Colombia);
- El avance del candidato Alvaro Uribe Vélez en la campaña electoral para las presidenciales del 26 de mayo de 2002;
- El aislamiento político internacional de la guerrilla.

Esta voluble identificación de fenómenos y realidades tan disímiles, tiene por objetivo preparar el terreno para ampliar el uso de la ayuda militar norteamericana - actualmente restringida al combate contra el narcotráfico- a la lucha contrainsurgente. La inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Washington fue el primer paso para incorporar a Colombia en la guerra contra el *terrorismo global*.

En los días de la elección del actual gobierno con Alvaro Uribe Vélez, el país se encontraba enfrentando las repercusiones ocurridas por la conclusión del fallido proceso de paz que el gobierno del saliente presidente llevaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas llevaron a cabo una ofensiva militar y terrorista sin precedentes a lo largo y ancho del país, luego de que el gobierno hiciera grandes operaciones militares en la antigua zona de despeje. En los días previos a la elección y posesión de este gobierno, esto es, en los primeros meses del año 2002, la nación vivía un ambiente de descontento general, debido a la sensación de inseguridad de la que se sentía vulnerable un gran porcentaje de la población, ya no solo a nivel rural sino también al urbano, puesto que el conflicto amenazaba con trasladarse a las cabeceras municipales. Fue así como, la propuesta de una estrategia de guerra frontal contra los agentes armados, principalmente contra los grupos guerrilleros, por parte del candidato presidencial Uribe Vélez, recibió una gran acogida general lo que le significa una contundente victoria en aquellas elecciones.

Con estos antecedentes, el presidente Uribe inició un mandato caracterizado por un estilo de gobierno contundente, en el que se trazó tres objetivos concatenados con los que intentó dar un giro a la correlación de fuerzas en el conflicto. En primer lugar, con la campaña por las reformas políticas y el propósito anunciado de combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa. Después, el proyecto de Seguridad Democrática, que constituye la piedra angular sobre la que descansa la ofensiva interna contra los grupos insurgentes, en un intento de llegar a la negociación desde la presión. Y finalmente, está el despliegue externo para cambiar la doctrina del gobierno anterior de Andrés Pastrana, que abogaba por la internacionalización del proceso de paz, por otra en la que se busca introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional (Bayo, 2003).

Los fundamentos del proyecto de Seguridad Democrática atienden a tres aspectos cruciales que están relacionados. En primer lugar está el objetivo de asegurar el máximo control territorial, disputándole a los grupos insurgentes los espacios bajo su tutela. Segundo, para conseguir ese propósito estratégico es preciso procurar una superioridad militar incontestable de las Fuerzas Armadas, llegando a mencionarse prácticamente la duplicación de sus efectivos. Y tercero, hay que lograr un debilitamiento de las fuentes de financiamiento que permiten el mantenimiento de los grupos armados, como el secuestro, la extorsión y las conexiones con los narcotraficantes.

En la actualidad, el gobierno lidera una lucha sin cuartel contra los grupos al margen de la ley, nunca antes vista, llevando a cabo acciones concretas como el aumento en el pie de fuerza, la creación redes de informantes y la puesta en marcha de los batallones de soldados campesinos, donde muchos jóvenes de las zonas rurales podían prestar el servicio militar cerca de sus casas. Esto, al tiempo que los grupos de autodefensa, adheridos en su

mayoría a la etiqueta de las AUC, comunicaban su disposición de llevar a cabo una tregua con el gobierno, con miras a un proceso de desmovilización. Los resultados no se hicieron esperar.

A pesar de las acentuadas críticas de muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la política de Seguridad Democrática experimentó un aumento en el respaldo por parte de la sociedad colombiana, toda vez que las acciones emprendidas empezaron a dar frutos muy significativos, como el aumento de las capturas, reducción de las tasas de secuestros, la disminución de los ataques de grupos al margen de la ley, entre otros.

Un aspecto que llama bastante la atención, está relacionado, con la acentuada fluctuación que sufrieron dichas variables, cuando son contrastadas entre los periodos: justo antes de la administración Uribe (Figura 25).

Figura 25: Datos trimestrales del número de muertos y Heridos totales en eventos del conflicto

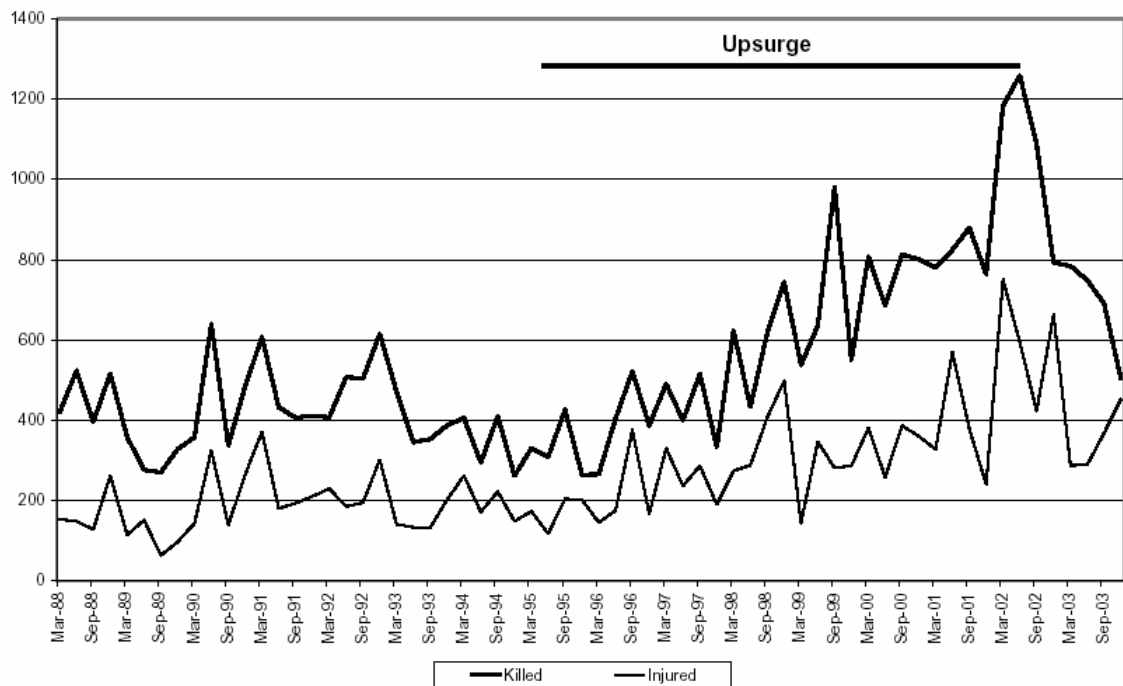


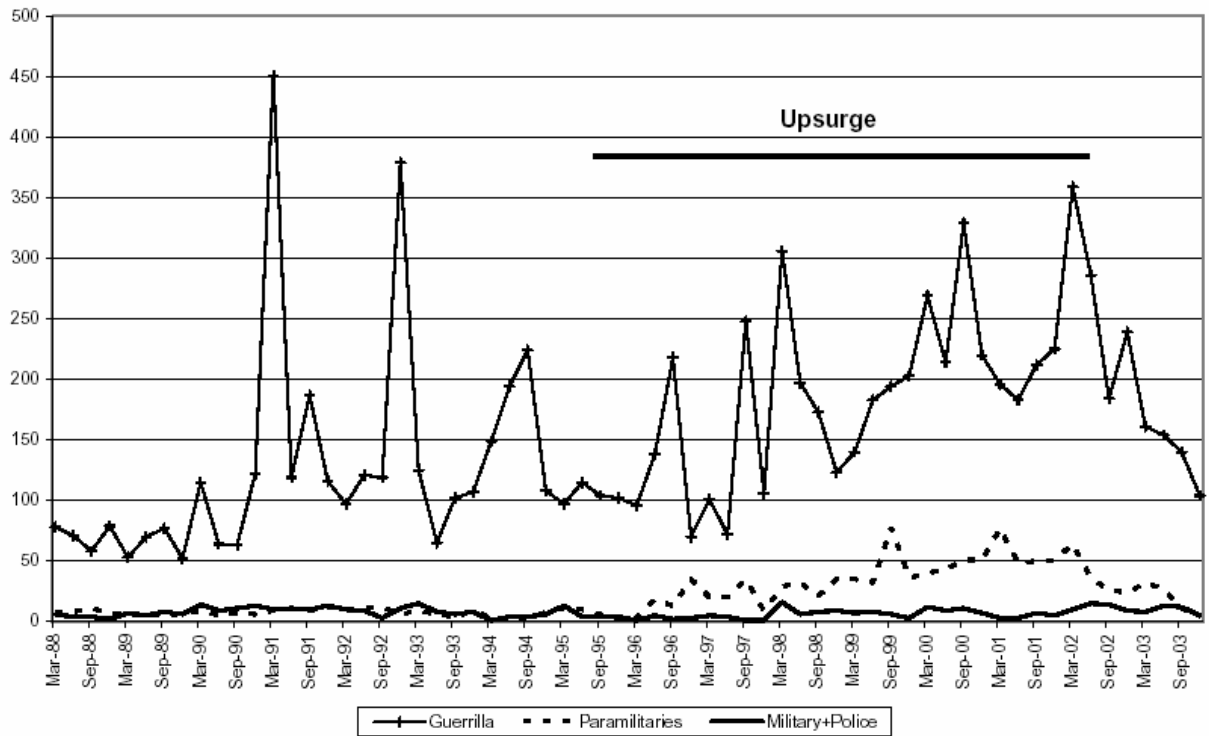
Table 1. Attacks and Casualties per Month by Period

	Periods				
	Uribe Government	Late	Upsurge	"Despeje" period	Previous to Uribe
	8/2002 – 12/2003	1/1999 – 7/2002	Entire	10/1998 - 2/2002	1/1988 – 7/2002
People Killed	259	269	219	255	175
People Injured	140	124	109	119	85
Guerrilla Attacks	54	76	65	71	53
Paramilitary Attacks	7	21	12	16	7

Fuente: Base de datos Jorge Restrepo y Miguel Spagat, 2004.

En la figura 26 se presentan datos trimestrales de muertes y heridos del conflicto colombiano; en ella se aprecia un periodo de repunte en su intensidad desde 1996 y que termina justo en el momento en que Uribe Vélez toma posesión.

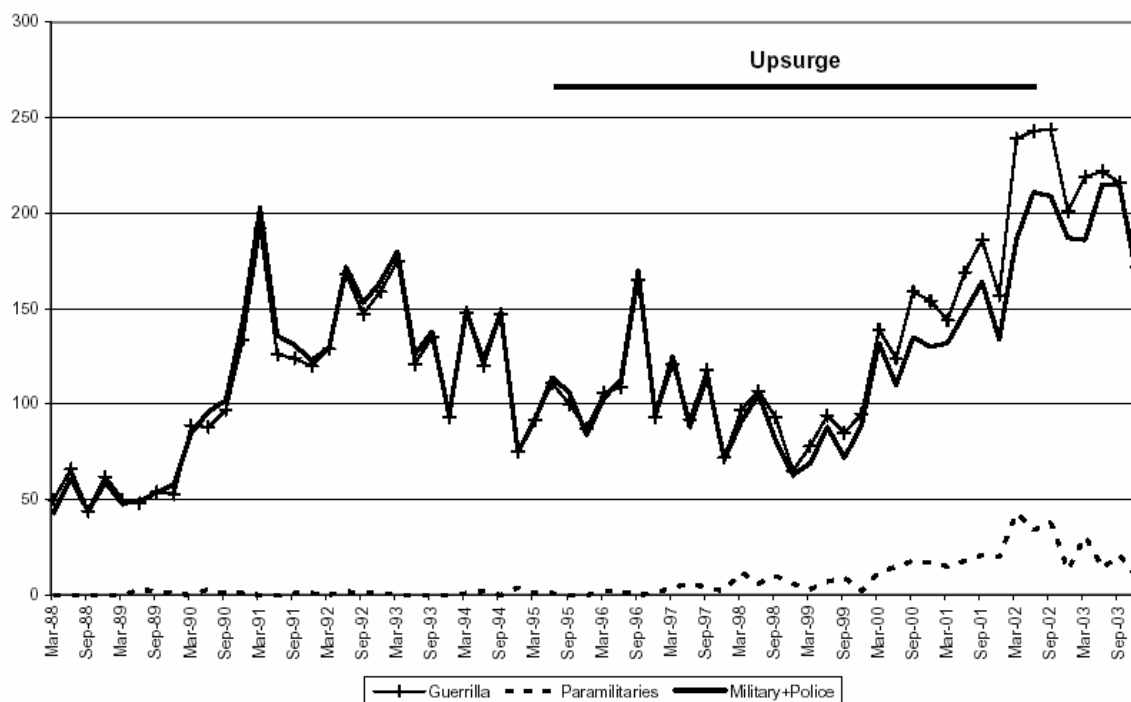
Figura 26: Datos trimestrales de número de ataques por grupo



Fuente: Base de datos Jorge Restrepo y Miguel Spagat, 2004.

Con estos datos se constata cómo los ataques de los grupos armados tanto guerrilleros como de autodefensa han descendido considerablemente, siendo, paradójicamente mucho más bajos que los registrados durante el tiempo en que se llevaron a cabo los diálogos de paz y se disponía de la zona de despeje. De hecho, si se observa la figura 27, estos ataques han descendido hasta llegar a los promedios de largo plazo. El análisis de esta y la siguiente figura, puede dar una falsa idea del papel y la importancia que cumplen los grupos de paramilitares. Sin embargo, se tiene que decir que su relevancia es indiscutible, pues el número de muertes registradas por estos actores, superan en demasía, las proporciones en las que se ven envueltos en ataques o en encuentros militares.

Figura 27: Datos trimestrales de número de encuentros por grupos



Fuente: Base de datos Jorge Restrepo y Miguel Spagat, 2004.

Tomadas las cifras agregadamente se pueden ver los principales frutos de la actual administración, pues se ha logrado salvar la extensa brecha que existía entre los ataques de grupos al margen de la ley: los encuentros militares llevados a cabo por estos tienen una mayor dificultad de llevar a cabo emboscadas y tomas de poblaciones debido a la mayor presencia de la fuerza pública que no sólo ha aumentado, sino que ha podido acceder a zonas donde durante por décadas su inexistencia era la regla; lo cual ha permitido que acciones de los mencionados agentes, que se perfilaban como simples ataques, se conviertan en encuentros, dada la rápida reacción de los diferentes organismos de seguridad del estado (Revista Semana nº1188, febrero 6 de 2005).

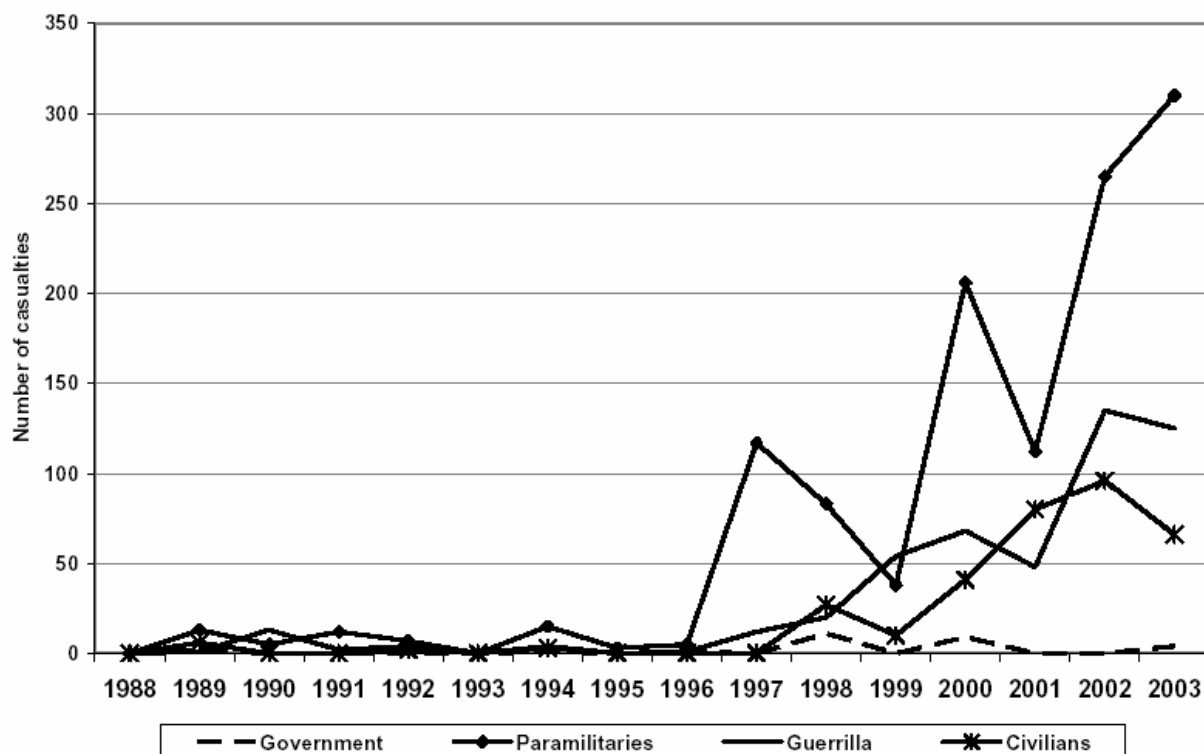
Otras de las tendencias que resalta el análisis de Restrepo y Spagat (2004) es la que ha venido tomando el conflicto nacional, es la de la disminución de las bajas civiles, que va en contravía con el aumento en el número de civiles heridos y lesionados provocados por los ataques indiscriminados de los actores armados. Esto reflejaría que, sobre todo los grupos guerrilleros, concretamente las FARC, han venido desarrollando acciones que van en directo detrimento de la integridad de la población civil, tales como atentados terroristas urbanos, la utilización persistente de “pipetas de gas” como proyectiles, el uso de minas antipersonales, etcétera. De otro lado, a pesar de que se empieza a sentir una atmósfera de mayor seguridad para los civiles, no podría decirse lo mismo de la seguridad de los combatientes, pues en este mandato ha aumentado drásticamente el número de bajas en combate.

La tendencia en el número de muertes de civiles ha variado y está principalmente a cargo de los grupos paramilitares, secundándolos los grupos de guerrilla. Sus acciones más que perjudicar a la población mediante los efectos colaterales de sus acciones, indicaría que éstas están directa e intencionalmente encaminadas contra la integridad de civiles. De lo anterior, se halla que las razones por las cuales el número de bajas civiles ha venido presentando una apreciable tendencia a la disminución: el hecho de que los principales responsables de la muerte de población civil hayan iniciado un cese de hostilidades, que si bien no se ha respetado a cabalidad, explicaría esta propensión.

Es pertinente señalar que en el comportamiento de los grupos paramilitares se puede notar una disminución en sus acciones cuando se disponen llevar a cabo un proceso de posible desmovilización con el gobierno, mientras que en el caso de la guerrilla de las FARC, cuando se encontraban en plenos diálogos de paz, sus hostilidades crecieron sin precedentes.

Como se mencionó, los paramilitares son los principales culpables de lesionar la integridad de los civiles, sin embargo cuando se indaga acerca de la efectividad que disfrutaban estos grupos se puede encontrar con la sorpresa de que son muy ineficientes en combate, de hecho, las bajas de civiles representan un alto porcentaje en el total de las ocasionadas en acciones, presentándose también el hecho de que sufren una cantidad superior de bajas con relación a las establecidas a sus enemigos. Esto testifica, sin lugar a dudas, que la importancia traducida en el poderío militar y territorial por parte de los grupos de ultraderecha tiene su fundamento en las concurrentes acciones de guerra escabrosa representadas en las masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento masivo de población civil. Esta podría ser una conclusión algo severa, pero ante los datos que atestiguan su ineficacia e ineficiencia militar deja pocas opciones para encontrar otros argumentos explicativos (Figura 28).

Figura 28: Datos anuales de número de bajas relacionados con acciones de grupos paramilitares



Fuente: Base de datos Jorge Restrepo y Miguel Spagat, 2004.

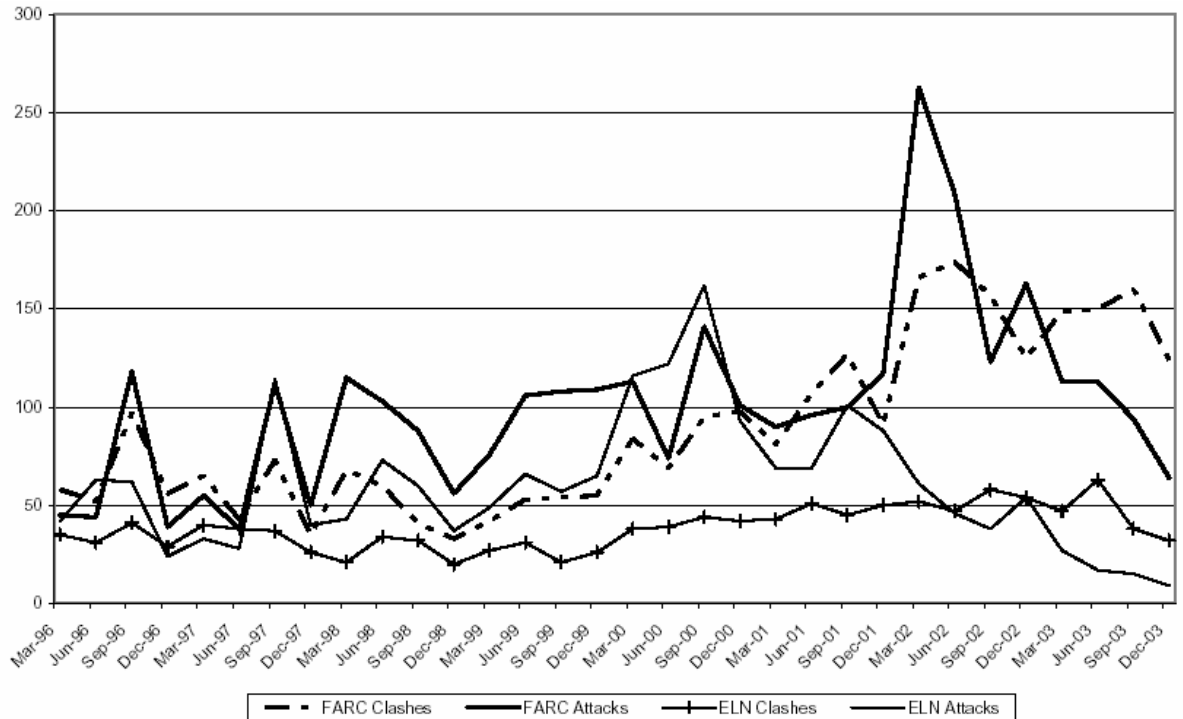
Otro de los elementos que es de importancia señalar aquí, es el relacionado con las acusaciones que diferentes organizaciones no gubernamentales realizan contra el gobierno de Uribe por el aumento de las violaciones de derechos humanos. La perspectiva que se ha venido presentando es una tendencia descendente en las lesiones provocadas por organismos de las fuerzas del Estado. Sin embargo, se percibe una continua protesta por parte de las ONG's quienes presentan diferentes cifras que sustentarían el aumento de este tipo de violaciones. Restrepo y Spagat plantean que el problema reside en que estos entes engruesan las cifras al sumar indiscriminadamente el número de civiles muertos y lesionados, con otras

cantidades como, por ejemplo, las transgresiones provocadas a la gran masa de personas que son detenidas injustamente por indicios de pertenecer a grupos al margen de la ley, hecho que distorsiona ampliamente la verdadera situación de derechos humanos en el país.

Una de las características que a todas luces sobresale a lo largo de los últimos 16 años, con excepción de algunos hechos presentados en el 2002, es la marcada propensión que ha presentado el gobierno de atacar frontalmente a los grupos guerrilleros, mientras que ha mostrado una peculiar condescendencia con los grupos paramilitares, dado que ha involucrado siempre una mayor proporción de recursos a combatir los grupos de izquierda que los de derecha, después de todo, no es disimulado que las guerrillas propenden por la destrucción del statu quo, mientras que las autodefensas intentan mantenerlo, esto es real y podría ser un incentivo que impulsaría a los diferentes gobiernos de priorizar los esfuerzos en dicho sentido.

Por su parte, otro de los agentes que ha sido pieza importante en el conflicto, el ELN, ha entrado en una senda de marcado declive, principalmente a partir del año 2000, influenciada, tal vez, por el fallecimiento de su más notorio líder, el padre Manuel Pérez en el año 1998. Si se tienen en cuenta, tan sólo los ataques perpetrados y los encuentros en los que se ven envueltos se podría pensar que este grupo como fuerza beligerante prácticamente ha desaparecido; sin embargo esta podría ser una afirmación demasiado prematura. Lo cierto es que, desde el mandato de Uribe Vélez, se ha hecho notorio el descenso en los ataques de ambos grupos, al igual que los encuentros o choques militares han empezado a superar a aquellos.

Figura 29: Ataques y choques guerrilleros por grupo



Fuente: Base de datos Jorge Restrepo y Miguel Spagat, 2004.

Resumiendo, se podría decir que los ataques de la guerrilla y los paramilitares han venido reduciéndose notablemente hasta llegar a valores de promedios de largo plazo. Esto es principalmente notorio en los últimos tres trimestres del 2003, es decir, en el mandato de Uribe Vélez. De igual forma se hace notorio el aumento de las bajas en combates, al tiempo que se presenta una disminución en las muertes de población civil, aunque las lesiones a ésta, se han visto incrementada en niveles nunca antes registrados.

A pesar de la acogida y del éxito indiscutible que ha representado la política de Seguridad Democrática emprendida por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tanto en términos de una sensación de mayor seguridad por parte de

la población, como en resultados concretos en cifras de bajas y de capturas de grupos al margen de la ley, los analistas son muy cautos en la percepción que tienen acerca de la senda que de aquí en adelante puede tomar el conflicto, pues consideran que es muy temprano para esperar que esté próximo el final de la guerra, y definitivamente todavía no se tiene la superioridad militar para obtener una victoria en este sentido.

De otro lado, como conclusión más notable para Restrepo y Spagat es que la dinámica actual del conflicto tan sólo ha sido llevada a un estado que, comparadas con la situación presentada durante los últimos 16 años no ha sufrido cambios estructurales, es decir, los valores de las diferentes variables que miden el desenvolvimiento de la guerra en el país, siguen oscilando alrededor de sus valores de largo plazo. Por lo tanto, las acciones del gobierno podrían seguir recogiendo frutos, como también podría darse el caso que aquellos tomaran una senda de retroceso.

Ante la estrategia de la acción ofensiva gubernamental, la respuesta de las FARC ha consistido en aceptar el reto y pujar también por su propia contraofensiva con el objetivo de aguantar a toda costa, mediante un repliegue táctico porque en el pasado fue duramente golpeada en su intento de creación de más frentes militares, sobretodo gracias a la superioridad numérica y a la infinitamente mayor y más moderna dotación de las Fuerzas Armadas gubernamentales. Pero ante el desencadenamiento de una guerra más o menos abierta, las FARC confían en que cuanto más dure el infierno tiene más a perder un Gobierno sometido a la presión del horror de la opinión pública que una guerrilla muy curtida en el modelo de la guerra popular prolongada. Para ello ha procurado una combinación de estrategias, mediante acciones de sabotaje económico y un intento de aproximación a las ciudades a través de golpes seleccionados. Así pretende optimizar sus

potentes recursos de combatientes y armas, a la vez que intenta neutralizar sus debilidades en la implantación territorial y en las acciones armadas de tipo convencional. De ese modo pretende aguantar y tratar de reeditar el mismo esquema de negociación mantenido con el Gobierno anterior.

En el caso de la guerrilla del ELN y los grupos paramilitares (AUC), la apuesta del presidente Uribe consiste en lograr una negociación independiente pero simultánea. El objetivo es presentar una opción balanceada para neutralizar cualquier crítica desde la opinión pública ante las eventuales concesiones que resulten de las negociaciones, a la vez que intenta despejar el escenario reduciendo los actores armados para que sólo queden las FARC. Pero esta estrategia oculta que la fuerza real de ambos contingentes es extremadamente desigual, pues mientras el duro castigo infligido durante los últimos años al ELN –mediante el hostigamiento combinado de las FFAA y los grupos paramilitares- ha llevado a su declive, las AUC no han dejado de crecer. De ese modo, esta solución se enfrenta a otros problemas, ya que la misma debilidad ha convertido al ELN en una fuerza relativamente desmembrada y sin un liderazgo consolidado con el que negociar. Así, el resultado final del ELN podría quedar a medio camino entre la negociación y el abandono de las armas por algunos de sus miembros y la continuidad del resto, ya sea manteniendo la lucha por su cuenta, como alistándose en cualquiera de los otros grupos armados o en la delincuencia.

Por ahora la negociación actual introduce una preocupación frente a la factibilidad de una eventual reproducción futura de los grupos paramilitares. Hasta ahora estos grupos habían sido considerados ambiguamente desde el Estado, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos de dentro y fuera del país. Esto ocurre porque el Gobierno debe decidir si los trata como delincuentes o como grupo político alzado en armas, y también

por las connivencias mantenidas con ellos desde diferentes instancias del mismo Estado. En el primer caso está claro, según Restrepo y Spagat, que a la resolución del contencioso se llega aplicando la legislación penal, mientras que en el segundo se llega mediante una negociación. Pero en ambos casos es imposible obviar las complicidades mencionadas, una circunstancia muy delicada si se tiene en cuenta el historial criminal de esas organizaciones, que están acusadas de practicar la guerra sucia en el país, con el resultado de que las guerrillas izquierdistas han visto en ello un motivo para reivindicar la legitimidad de su lucha.

De momento, el presidente Uribe, con la iniciativa negociadora y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, alcanzado con las AUC en julio de 2003, se inclina por el reconocimiento de los paramilitares como grupo alzado, pero queda por ver como responderá al desafío que plantea una negociación sin concesiones a la impunidad.

5.2.1 Internacionalización del conflicto.

En el Gobierno de Estados Unidos, particularmente después del 11 de septiembre de 2001, se empezó a apostar por una estrategia de seguridad internacional donde se considera al terrorismo entre los principales temas de la agenda, una posición que desde Europa se observaba de forma más controvertida.

El fracaso de las negociaciones tuvo también la consecuencia de cambiar el contenido de la agenda internacional, pues la búsqueda del Gobierno colombiano de una diplomacia de paz acabó cediendo el puesto a la demanda de un alineamiento internacional en su lucha contra los grupos alzados. Esta estrategia, más perfilada y decidida durante el Gobierno de

Uribe, conectó con la nueva doctrina de EEUU, que acabó levantando las restricciones sobre la ayuda militar, y también forzó a los europeos a solventar sus contradicciones hacia una mayor definición en la misma dirección. Bajo la insistente iniciativa española, desde la UE se procedió a un mayor acercamiento a las posiciones de EEUU, por ejemplo pasando a incluir a las FARC y al ELN en la lista de grupos terroristas que hasta entonces sólo reservaban a las AUC. De todas formas, desde Europa aún se mantienen algunas percepciones diferenciales, como la consideración de las raíces socio-económicas del conflicto, la firmeza en la demanda a las partes para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, o la orientación de la cooperación hacia la ayuda a los desplazados y a proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil, cuyo ejemplo serían los Laboratorios de Paz.

La deriva internacional sobre las percepciones del conflicto ha presionado sobremanera a los países vecinos para definir sus posiciones ante el mismo, aunque la preferencia generalizada sigue siendo evitar involucrarse. Si el Plan Colombia inicialmente produjo alarma y rechazo, principalmente por el temor al intervencionismo de Estados Unidos, la evolución del contexto internacional y la presión de la demanda solidaria del presidente Uribe cada vez les obliga a dedicar una mayor atención al caso.

La dinámica externa poco ha contribuido al desarrollo de un clima favorable el entendimiento entre las partes. La situación de los vecinos de Colombia (Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Brasil) no es muy propicia para avanzar en ese sentido, ya que la mayoría -salvo Brasil- son países débiles, y además cada uno de ellos tiene algún motivo interno de inestabilidad. Y sin embargo, estos mismos países están preocupados por el desbordamiento de la violencia en Colombia, que les obliga a movilizar tropas para efectuar un

control más rígido de sus fronteras. Tampoco han sido nada fáciles las relaciones con Estados Unidos, que desde hace años tiene a Colombia en la lista de países que anualmente evalúan por la producción y el tráfico de drogas. Mientras, los esfuerzos internacionales para facilitar los arreglos pacíficos, como los patrocinados por las Naciones Unidas y los diferentes Grupos de Países Amigos, aunque han contribuido a crear una atención desde el exterior hacia la situación colombiana y podrían procurar un acompañamiento en un proceso de paz, tienen poco que hacer si no hay una mayor voluntad de las partes en conflicto para llegar a ese objetivo.

De alguna forma, esta situación es insólita y por lo pronto ha provocado que afloren las contradicciones y las suspicacias, tanto sobre el tratamiento a dar a los grupos insurgentes como respecto a las posiciones tradicionales sobre la intervención. Para Brasil la situación también es contradictoria y a la vez supone un reto a sus aspiraciones de influencia en el continente sudamericano. Además, tampoco hay tradición de cooperación política en la región andina y mucho menos en materias que afecten a la seguridad. Buena prueba de ello es que Uribe ha ido a buscar el apoyo a su proyecto primero en Estados Unidos y una vez asegurado éste se ha acercado a sus vecinos. Todas estas circunstancias pesarán mucho para que la respuesta latinoamericana se mueva más por inercia que por cambios sustanciales, y que prefieran antes una mediación de un organismo multilateral como las Naciones Unidas.

CONCLUSIONES

- En la historia de conflictos del mundo la guerra colombiana ha tendido a intensificarse. En el siglo XX, tendió a ser uno de los cinco más largos e intensos de la historia en el periodo 1950 – 1998 y el único, junto con Sudán, en repetirse con duraciones de 10 años o más.
- Aunque pueda parecer obvio y reiterativo al lector de este trabajo, es importante destacar la necesidad de seguir construyendo el marco de estudio en cuanto a la relación de la guerra colombiana en el escenario mundial, debido a que la lucha que vive el país es vista como la expresión de un tipo de conflicto enmarcado en un concepto totalmente llamado “nueva guerra”. Esta teoría tiene las características que Mary Kaldor anota que obedecen a las modificaciones que desde los años ochenta ha mostrado la violencia organizada en el mundo. En estas nuevas guerras, exacerbadas con el avance de la globalización, la distinción entre lucha revolucionaria, crimen organizado y violación de los derechos humanos se ha hecho difusa. En efecto, el proceso globalizador en lo político, económico y militar ha erosionado la autonomía del Estado y está conduciendo, en muchos países, a su desintegración. Esto, a su vez, ha reducido de modo drástico la capacidad estatal de usar legítimamente la fuerza.
- Las diferencias entre las nuevas y las viejas guerras se da en varios aspectos. Primero, los objetivos ideológicos se eclipsan; no se trata ya de luchas orientadas a la liberación nacional, estimuladas por proyectos emancipatorios de naturaleza amplia, sino de la reafirmación de

particularismos que tienden hacia la fragmentación y la exclusión. Segundo, las estrategias de combate cambian; los grupos armados combinan tácticas de guerrilla (búsqueda de dominio territorial a través del control político de las personas) y de contrainsurgencia (desestabilizar al oponente mediante el miedo y el terror). Por lo tanto, la estrategia de guerra predominante se ha vuelto una conjunción de férreo dominio de la población que adhiere y masiva expulsión y aniquilamiento de la población que difiere.

- El escenario de la confrontación ya no se presenta con enfrentamientos entre unidades de dos bandos opuestos, sino con el entrecruzamiento de insurgentes, paramilitares, "señores de la guerra" (warlords), grupos criminales, mercenarios, narcotráfico y ejército. Actores del conflicto armado como narcotraficantes, paramilitares y disidencias guerrilleras operan de manera descentralizada.
- Aparece una lógica económica dentro de las nuevas guerras que convierte el conflicto en una actividad rentable. En consecuencia, las partes enfrentadas incrementan su autonomía financiera, lo que desemboca en una prolongación de las hostilidades y en un incremento de sus efectos devastadores. Así, la guerra en Colombia proporciona la validez de diversas formas criminales de enriquecimiento privado necesarias para sostener el conflicto, ya que las partes enfrentadas necesitan una lucha más o menos permanente para reproducir sus posiciones de poder y poseer acceso a los recursos.
- La economía se ha visto afectada por la guerra. En medio del proceso de globalización que genera fuertes desequilibrios económicos, mayor inequidad entre grupos sociales y un Estado debilitado, los agentes

armados de distinto signo imponen una economía del saqueo a los ciudadanos a través de la extorsión, el contrabando de mercancías lícitas e ilícitas (drogas, armas, petróleo, diamantes, etc.) y los impuestos (legítimos e ilegítimos) de diverso tipo.

- La teoría económica indica que un conflicto de estas características disminuye la senda de acumulación de capital y afecta el crecimiento de la economía. La magnitud de dicho impacto depende a su vez de si el choque de violencia es percibido por los individuos como temporal o permante. En el primer caso produce una corta desaceleración de la economía que se refleja en una caída en la tasa de crecimiento anual. Pero si es percibido como permante, el cambio de los individuos se traduce en un cambio permante en las decisiones el ahorro e inversión, en la escogencia de diferentes naciones para resguardar el capital, en la asignación de trabajo y capital, en el gasto público y privado, efectos que desvían la economía de su senda de acumulación original.
- A pesar del avance analítico por parte de la ciencia económica en el tema de la guerra, existen en ella falencias teóricas que no alcanzan a explicar los costos no cuantificables que son también determinantes de la problemática tratada. Para corregir lo anterior se necesita incorporar en este punto las herramientas que ofrecen otras ciencias (como la historia y la política) para lograr disgregar la dificultad aquí trabajada.
- El consenso que se ha ido formando en los nuevos estudios colombianos sobre el tema, plantea que el fenómeno violento y la guerra tienen su origen en varios fenómenos mutuamente relacionados: las particularidades del desarrollo de algunas economías de frontera y el pillaje en zonas de alta productividad de ciertos productos primarios, el

desplome de la justicia, el consecuente aumento de la impunidad y el impacto del narcotráfico.

- En el comportamiento guerrillero se ha observado que existe una tendencia hacia la diversificación de la forma en que hacen presencia, según las características de cada región: las zonas de colonización periférica donde surgieron se han convertido en zonas de refugio, mientras que las zonas donde se consolidaron significativamente antes de 1985 se consideran zonas para la captación de recursos.
- El GFP colombiano crece aceleradamente, debido principalmente al aumento del gasto de funcionamiento que representa, cerca del 90% del gasto total en Fuerza Pública, y que además se hace costoso puesto que el retorno sobre la inversión en seguridad es mínimo, debido a que los recursos utilizados han significado una buena partida que durante mucho tiempo no reportó una reducción significativa del conflicto.
- Se encontró que el aumento sostenido del GFP no ha desplazado en gran medida los gastos de educación y salud al permanecer éstos constantes en el tiempo estudiado; pero si ha contribuido al aumento del total del gasto del gobierno central nacional. A futuro no quiere decir que el aumento del gasto militar no pueda influir en el detrimento de la participación del presupuesto social del Estado, ya que la necesidad de reducir el déficit fiscal es incompatible con el incremento del GFP que se propone en la actualidad.
- En Colombia el flujo de recursos hacia los agentes ilegales emana principalmente del producto de la exportación de las drogas y en menor

escala, el petróleo, el carbón, el oro y el banano que figuran entre los productos de tributación de guerrilla y paramilitares.

- La consolidación de la economía del narcotráfico en las zonas de dominio guerrillero ha dado paso a alianzas que han permitido el fortalecimiento económico de los grupos insurgentes, y por ende, la escalada del conflicto armado que se vió durante los años noventa. De ahí la necesidad de la lucha contra el narcotráfico, como herramienta para frenar esta fuente de recursos de la guerra.
- En la actualidad, el nuevo contexto internacional junto a la evolución de la situación interna del país, ha modificado la correlación política y militar de fuerzas entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y la guerrilla, posibilitando que el Estado recupere la confianza y se lance a recuperar terreno perdido.

BIBLIOGRAFÍA

_____ “Violencia y Conflicto en los noventa”, en: *Coyuntura Social*, N° 22, Mayo de 2001.

ABELL, D. "Defense spending and unemployment rates: an empirical analysis disaregated by race", *Cambridge journal of economics*, Vol 14, 1990.

AGUIRRE, Mariano. Prólogo a la edición española de Desarrollo en estados de guerra, Barcelona, Oxfam-CIP, 1998, p. 6.

AMAYA PULIDO, Pedro J. *Colombia, un país por construir*, Bogotá, Universidad Nacional, 2000.

BANCO DE LA REPÚBLICA, *Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República*, pp.50, marzo de 2002.

BAYO, Francesc. “Balance del conflicto en Colombia bajo el Gobierno de Uribe”, CIDOB, Barcelona, 2003.

BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”, *Journal of Political Economy*, Vol. 78, marzo – abril, 1968.

_____, Gary. “Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior”, *Journal of Political Economy*, Vol. 101, N° 3, 1993.

BEJARANO, Ana María. “Conflicto y paz en Colombia: cuatro tesis con implicaciones para la negociación en curso”, Ponencia preparada para *The Center for Latin American Studies and the Colombia Working Group* at the Univesity of California, Berkeley, Marzo 2 de 2001. p.1

BEJARANO, Jesús A., “Efectos de la violencia en la producción agropecuaria”, *Coyuntura Económica*, Bogotá: Fedesarrollo, volumen XVIII, N° 3, pp. 185-194, 1998.

_____ “Democracia, conflicto y eficiencia económica”, en: Bejarano J. A. (editor), *Construir la paz*, Bogotá, CEREC, 1990.

_____ *Una agenda para la paz*, Bogotá, 1995

_____, Camilo Echandia Castilla, Rodolfo Escobedo y Enrique León. *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*. Bogotá, FONADE – Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997.

BUSHNELL, David. “Politics and Violence in Nineteenth-Century Colombia” en Bergquist, Peñaranda y Sánchez, pp. 11-30, 1992.

CABALLERO, Antonio. “La Estrategia de Seguridad Democrática y la Economía Colombiana: Un Ensayo Sobre la Macroeconomía de la Seguridad”, *Borradores de Economía*, Banco de la República 234, 2003.

CAMELO MANCILLA, Nelson. Tesis para optar al título de economista: “Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Santander (1995 - 1998)”, Universidad Industrial de Santander, 2001.

CARBÓ, Eduardo Posada. *¿Guerra civil? El lenguaje del conflicto en Colombia*, Bogotá, Alfaomega, 2001.

CHESTER, E. “Military expenditure and capitalism stability”, *Journal of Economics*, Cambridge vol 2, 293 – 298, 1978.

CLAUSEWITZ, Karl Von. *De la Guerra, Táctica y Estrategia*, Ideas Books, España, 1999.

CLAVIJO S. “Dividendos de Paz y Costos de la Guerra en Colombia: La Fuerza Pública y su Presión Fiscal”, Documento CEDE 98-15, 1998a.

CLAVIJO S. *Política fiscal y Estado en Colombia*, Uniandes, Bogotá, 1998b.

COLLIER, Paul. “Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas”, Pag. Internet: Banco Mundial, 2000.

_____ y Anke Hoeffler, *Greed and Grievance*: Banco Mundial, Página de internet, 2001.

COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA, *Colombia: Violencia y democracia*, IEPRI, Universidad Nacional, Colciencias (4ª edición), 1995.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Indicadores de justicia, 2003, Internet.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, *Realidad de la Deuda Externa en el Sector Defensa y Seguridad*, Informe 14, pp.10, junio de 2002.

CUBIDES, Fernando. “De lo privado y de lo público en la violencia colombiana: los paramilitares” en Jaime Arocha, Fernando Cubides, y Myriam Jimeno, *Las Violencias: una inclusión creciente*, CES, Universidad Nacional, Bogotá.

_____, “Los paramilitares y su estrategia”, en: *Reconocer la guerra para reconstruir la paz*, Bogotá, Ediciones Uniandes, CEREC, Norma, 1999.

DEAS, Malcom y Fernando Gaitán. *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, FONADE – DNP, 1995.

_____ y María Victoria Llorente, Comp. *Reconocer la Guerra para Construir la Paz*, Bogotá, Uniandes, CEREC, Norma, 1999.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, *Los cultivos ilícitos*. Política mundial y realidad en Colombia, agosto de 2000.

DEGER S. "Military Expenditure and Economic Development, Issues and debates" en World Bank Discussion Papers, *Military Expenditure and Economic Development, a Symposium on Research Issues*, 1992.

DNP, Dirección de Seguridad y Justicia. *Cifras de Violencia periodo 1996-2002*, V.0 No 1, 2003.

_____, Plan Colombia. *Institutional Strengthening and Social development 2000-2002*. Report to the support group for the peace process, July, 2000.

ECHANDÍA CASTILLO, Camilo. “*Expansión territorial de la guerrilla colombiana: geografía, economía y violencia*”, Documento de Trabajo No 1, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Mayo de 1997.

_____ “*Grado de Concentración de la Guerrilla Colombiana*”, Documento de Trabajo. Paz Pública, Bogotá, Universidad de los Andes, 1998.

_____ “*Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia*”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*, compilado por M. Deas y M. Llorente. CEREC, Uniandes, 1999.

ECHEVERRY, J., Salazar N., Navas V. “¿Nos Parecemos al Resto del Mundo? El conflicto Colombiano en el Contexto Internacional”, Archivos de Macroeconomía No 143, 2001.

_____ y Zeinab Partow, “¿Por qué la justicia no responde al crimen?: el caso de la cocaína en Colombia”, en *Corrupción, Crimen y Justicia: una perspectiva histórica*, Tercer Mundo- Fedesarrollo, 1998.

ESTRADA, Fernando. “El escudo de Aquiles”, en: *Terrorismo y Seguridad*, Bogotá, Planeta, 2003.

FAJNZYLBBER, P., D. Lederman y N. Loaiza, “Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. An Empirical Assessment”: World Bank Latin American and Caribbean Studies, World Bank, 1998.

GAITÁN, Fernando. “Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia”, en *Dos ensayos sobre la violencia en Colombia*: FONADE – DNP, 1995.

GARAY, Luis Jorge. “Crisis y construcción de sociedad: apuntes para el caso de Colombia”, en *¿Para dónde va Colombia?*, compilado por H. Gómez Buendía, Tercer Mundo Editores y Colciencias, 1999.

GAVIRIA, Alejandro, “Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: The case of Colombia”, *Journal of Development Economics*, Vol. 61, 2000.

GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. Compilador, *¿Para dónde va Colombia?*, Tercer Mundo Editores Y Colciencias, 1999.

GONZÁLEZ F., Posada C. Criminalidad, violencia y gasto público en defensa seguridad y justicia” en: *Revista de Economía Institucional*, No 4, 2001.

_____, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, *Evolución reciente de los actores de la guerra en Colombia, cambios en la naturaleza del conflicto armado y sus implicaciones para el Estado*. Informe final, CINEP, Bogotá, marzo de 2001.

GRANADA, C. y L. Rojas, “Los costos económicos del conflicto armado en Colombia: 1990-1999”, en *Revista de Planeación y Desarrollo*, DNP, vol. 26, n° 4, octubre-diciembre, 1995.

HEO. "Modeling the defense-growth relationship around the globe", *Journal of conflict resolution*, Vol. 42 No.5, 1998.

KALDOR, Mary. *Nuevas Guerras, Violencia organizada en la era global*, Kriterion Tusquets Editores, Barcelona, 2001.

KALMANOVITZ, Salomón. *Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia*, Editorial Norma, Cali, 2001.

LANDAU D. “*The Economic impact of military expenditures*”, World Bank Working, papers 1138, 1993.

LEAL, Diana. *La coca y la guerra en Colombia*, Seattle, Colombia Committee, <http://www.seattlecolombia.org/leal.es.php>, 2000.

LEONGÓMEZ, Eduardo Pizarro. “Terrorismo y Democracia, el caso de Colombia”, en: *Terrorismo y Seguridad*, Bogotá, Planeta, 2003.

LOCK, Peter. “Transformaciones de la guerra: hacia la dominación de la violencia reguladora”. *Ponencia en el Foro Social Mundial Temático*, Cartagena de Indias, 16 al 20 de junio de 2003 .

LÓPEZ RESTREPO, Andrés. “Costos del combate a la producción, comercialización y consumo de drogas y a la violencia generada por el narcotráfico 1978-1994” en: *Drogas Ilícitas en Colombia, su impacto económico, político y social*, Bogotá, PNUD, Ministerio de Justicia y del Derecho-Dirección Nacional de Estupefacientes, Ariel Ciencia Política, 1997.

MEYER, Jean. “*La Guerra y la Paz*”, Centro de Investigación y Docencia Económica -CIDE- División de Historia, México, Año II, Número 8, Primavera del 2000.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, “*Los grupos ilegales de autodefensa en Colombia*”, Bogotá, publicación de diciembre, 2000.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. *Informe Anual de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario*, 2001.

MOLANO, Alfredo. *Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare*, 4ª reimpresión: Áncora Editores, 1999.

MONTENEGRO, Armando y Posada, Carlos Esteban. “Criminalidad en Colombia”, en: *Coyuntura Económica*, Vol. XXV, Nª 1, 1995.

_____, Carlos Esteban Posada y Gabriel Piraquive, “Violencia, Criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía”, *Coyuntura Económica*, Vol. XXX, N° 2, 2000.

_____ y Carlos Esteban Posada. *La Violencia en Colombia*, Editorial Alfaomega- Cambio, Bogotá, mayo de 2001.

NACIONES UNIDAS, Centre for International Crime Prevention, “*Global report on Crime and Justice*”, 1999.

NORTH, Douglas. *El análisis económico de la usura, el crimen y la pobreza*. México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

ORTIZ, Román D. “El estado colombiano frente a las FARC”, en: *Terrorismo y Seguridad*, Bogotá, Planeta, 2003.

_____ “Guerra civil y descentralización de la violencia: el caso de Colombia” en *Papeles de Cuestiones Internacionales*, Uniandes, Bogotá, n° 65, 1998.

PARDO, Rafael. “De procesos y rupturas”, *revista Cambio*, 29 de enero – 5 de febrero, 2001.

PARRA C. “*Determinantes de la inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia*”, Archivos de Macroeconomía, No 84, 1998.

PEÑATE, Andrés, “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*, compilado por M. Deas y M. Llorente: CEREC- Uniandes, 1999.

PERCIPIANO, Yilberto Lahuerta, Luis Eduardo Alvarado y Andrés Vergara Ballén en “*Comportamiento e Impacto del Gasto en la Lucha contra las Drogas: 1995 – 1999*”, Departamento Nacional de Planeación, Dirección Nacional de Estupefacientes, Febrero de 2001.

PÉREZ, Bernardo, “*Los vericuetos del laberinto colombiano*”, documento del Observatorio del Conflicto Armado - Universidad Externado de Colombia, pp. 9, 2003.

PERIÓDICO EL COLOMBIANO, Edición del 20 de marzo de 2000.

PERIÓDICO EL ESPECTADOR, Edición del 27 de febrero de 2001.

PERIÓDICO EL TIEMPO, Edición del 27 de octubre, 1996.

PERIÓDICO LA REPÚBLICA, Edición del 21 de marzo de 2000.

PETRAS, James: *"La geopolítica del Plan Colombia"*, en: Revista Paradigmas y Utopías N°3, La Habana, 2001.

POSADA, Carlos. *"Modelos económicos de la criminalidad y la posibilidad de una dinámica prolongada"* , en Archivos de Macroeconomía (DNP), Documento 26, Abril 1994.

RAMONEDA, Joseph. "Genealogía de la nueva guerra", en: *Diario El País, suplemento Babelia*, Madrid, 22 de Septiembre de 2001.

RANGEL, Alfredo. *Colombia: guerra en el fin de siglo*. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1999.

_____ "Parasites and Predators: Guerrillas and the Insurrection Economy in Colombia", en *Journal of International Affairs*, primavera, N° 2, 2000.

_____ *Guerra Insurgente*. Intermedio Editores. Bogotá, 2001a .

_____ Foro Nacional Ambiental, Proyecto paz, guerra y medio ambiente en: *Colombia naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia y sus efectos sobre el medio ambiente*, Bogotá, 22 de octubre de 2001b.

RESTREPO, Jorge Restrepo Y Michael Spagat. *"The Colombian conflict: Uribe's first 17 months"*, University of London, Abril 2004.

REVISTA SEMANA, n° 1188, febrero 6 de 2005.

ROCHA, Ricardo, *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*. UNDCP y Siglo del Hombre Editores, 2000.

RUBIO, Mauricio. "Violencia y conflicto en los noventa", en: *Coyuntura Social* No 22, Bogotá, Mayo 2001.

_____ , *Crimen e Impunidad*. Precisiones sobre la Violencia, Bogotá, CEDE-Tercer Mundo, 1999a.

_____ , "La justicia en una sociedad violenta", en *Reconocer la guerra para construir la Paz*, compilado por M. Deas y M. V. Llorente, CEREC y Uniandes, 1999b.

SALAZAR, Boris y María del Pilar Castillo, *La hora de los dinosaurios: conflicto y depredación en Colombia*, CEREC, Bogotá, 2001.

SÁNCHEZ, Fabio y Núñez, Jairo. “*Estimaciones trimestrales de la línea de pobreza y sus relaciones con el desempeño macroeconómico colombiano (1977 – 1997)*”, Archivos de Macroeconomía (DNP), documento 110, mayo de 1999.

_____, “*Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia*”, documento CEDE 2001-02, Universidad de los Andes, Enero, Bogotá, 2001-2002.

_____, Ana María Díaz y Michael Fomisano. “*Conflicto, Violencia y Actividad Criminal en Colombia: Un análisis Espacial*”. Documento CEDE 2003-05, Marzo de 2003.

SARMIENTO, Anzola, Libardo. “*Conflicto, intervención y economía política de la guerra*” en: Crisis humanitaria sin precedentes, <http://www.redvoltaire.net/autor561.html>, 2001.

SARMIENTO, Alfredo. “*Violencia y equidad*”, documento inédito, misión social, DNP, 1999.

_____ y Lidia Marina Becerra, “*Análisis de las relaciones entre violencia y equidad*”, Archivos de Macroeconomía (DNP), documento 93, agosto de 1998.

SKOCPOL, Theda. *States and social Revolution*, New York, Cambridge University Press, 1979.

SMITH R. (1979). “Military expenditure and capitalism: a reply”, *Cambridge Journal of Economics*, Vol 2, 299-304.

THOUMET, Jacques. “Uribe, el más popular de la historia”, *Agence France Preese*, Bogotá, Enero 21 de 2004.

THOUMI, Francisco. *Economía política y narcotráfico*, Bogotá, Tercer mundo Editores, 1996.

_____, Sergio Uribe, Ricardo Rocha García, Alejandro Reyes, Edgar Alfredo Garzón Saboyá, Andrés López Restrepo, J. *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*. Bogotá, PNUD-Ministerio de Justicia y del Derecho Dirección Nacional de Estupefacientes, Editorial Ariel Norma, 1997.

_____, Francisco E. *El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes*, Bogotá. IEPRI – Planeta, 2002.

TOBAR M., Soto A., El Gasto Militar en Colombia Aspectos Macroeconómicos y Microeconómicos, *Revista de la CEPAL* No 69, 1999.

TOBAR, G. "Eliminación del conflicto interno en Colombia y el dividendo de paz", tomado de Echeverry, Juan et al, 2001, "¿Nos parecemos al resto del mundo? El conflicto colombiano en el contexto internacional", Archivos de Macroeconomía, No 143, 2000.

TOVAR PINZÓN, Hermes. *Colombia: droga, economía, guerra y paz*. Planeta Colombiana Editores, 1999.

TRUJILLO CIRO, Edgar y BADEL RUEDA, Martha Elena. *Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996*, Archivos de Macroeconomía, Documento 76, Departamento Nacional de Planeación, 10 de Marzo de 1998.

VARGAS, Alejo. *Las Fuerzas Armadas en el Conflicto Colombiano Antecedentes y Perspectivas*, Intermedio, Bogotá, 2002.

_____, *Colonización y Conflicto Armado en el Magdalena Medio Santandereano*, Bogotá, Editorial CINEP, 1992.

_____, *Las Fuerzas Armadas en el Conflicto Colombiano. Antecedentes y perspectivas*, Intermedio, Bogotá, 2002.

VARGAS, Andrés M. y Mauro A. Reyes, *Algunas consideraciones sobre el gasto en fuerza pública colombiano: incidencia en la economía*, U. Externado de Colombia, 2003.

VÁSQUEZ, Teófilo. "Análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia de los actores armados en Colombia en la década de los noventa", en: *Evolución reciente de los actores de la guerra en Colombia, cambios en la naturaleza del conflicto armado y sus implicaciones para el Estado*. Informe final, CINEP, Bogotá, marzo de 2001.

WALDMANN, Peter. "Guerra civil. Aproximación a un concepto difícil de formular", en: *Sociedades en Guerra Civil*. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, 1999.

WALZER, Michael. "Excusas para el terrorismo. Las políticas de la apología ideológica", en: *The American Prospect*, N° 18, 2001.

ANEXOS

Apéndice A. Ingresos de factores colombianos

El proceso global de las drogas hasta el consumidor final se pueden dividir en tres fases básicas: producción, transporte y distribución. No es nuestro fin ahondar en cada una de ellas, en virtud de lo cual presentamos los ingresos netos de factores colombianos por el tráfico de droga estarían dados fundamentalmente por:

$$Y_{totc} = Y_{pc} + Y_{tc} + Y_{dc}$$

Donde, Y_{pc} es el ingreso de factores colombianos por concepto del procesamiento de cocaína. Y_{tc} , el ingreso de factores colombianos por concepto de transporte de cocaína. Y_{dc} , el ingreso de factores colombianos por concepto de la distribución de cocaína.

Según se hagan las estimaciones, es decir basadas en la marihuana o la cocaína, el valor agregado nacional de la economía de las drogas variará.

Cuando el cálculo exceptúa la etapa de procesamiento, después de determinar las cantidades producidas se procede a hacer las deducciones por concepto de consumo interno, pérdidas y confiscaciones para determinar las cantidades netas exportables. A esas cantidades se le adecuan los precios correspondientes para obtener los ingresos, sin restar los insumos importados. De este modo resulta:

$$Y_{td(i)} = Y_{totc} + Totm$$

Donde, Y_{tdi} es igual al ingreso total del año (i). Y_{totc} , el ingreso total de cocaína y T_{otm} , el ingreso total de la marihuana.

Adicionalmente se complementa este cálculo con una metodología que se dispone a estudiar la producción y el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, y la otra al consumo doméstico²⁰.

(*) Participación colombiana de la economía colombiana en la economía de la coca

En términos de las actividades ilegales, la pretensión de determinar fielmente las cifras destacadas es incierta, pues a pesar del intento año tras año por refinar los cálculos y la metodología, las imprecisiones siguen siendo una limitación crítica.

La producción de la droga puede ser identificada con hechos reales tales como fotografías aéreas, insumos e incluso las incautaciones. Además, la combinación de los factores que sirven en la fabricación de la producción está limitada por factores de tipo tecnológico.

Siendo esto así, los estimativos del lado de la oferta siguen una serie de técnicas para medir la producción.

La metodología plantea el proceso de cálculo que sigue²¹:

Hoja producida	- (Pérdida, confiscaciones y uso legal)
Hoja disponible	x (Coeficiente técnico)
Pasta de coca	- (Pérdidas y confiscaciones)
Pasta de coca para refinar	x (Coeficiente técnico)
Clorhidrato	

²⁰Las valoraciones de estos cálculos se encuentran en: Carlos Gustavo Arrieta y otros, *Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales*. Bogotá, Tercer Mundo Editores-ediciones unianandes, 1993.

²¹ Ibid, Arrieta.

de cocaína - (Consumo local, confiscaciones y
pérdidas)

Cocaína
exportable - (Cocaína exportada a otros países)

Cocaína exportada a los EE.UU.

Apéndice B. Aportes en Defensa

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES APORTADOS POR EE.UU. EN EL MARCO DEL PLAN COLOMBIA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Apoyo a las tareas de erradicación en el sur de Colombia	
-"Golpe al Sur de Colombia"	416,9
Apoyo a los programas de interdicción	378,6
Apoyo a la Policía Nacional de Colombia	115,6
Apoyo al desarrollo económico y alternativo (incluyendo programas nacionales y en el sur de Colombia)	106,0
Apoyo a programas de promoción de derechos humanos y de reforma del sistema judicial	119,0
Apoyo a otros programas regionales y al proceso de paz	183,0
Total del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia	1.319,1

Fuente: Embajada de EE.UU. en Bogotá

DESAGREGACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ERRADICACIÓN (GOLPE AL SUR DE COLOMBIA) MONTO TOTAL: 416.9 RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Apoyo a los Batallones Antinarcóticos	21,2
Entrenamiento y equipamiento de batallones	1,0
Establecimiento de la sede de la Brigada Antinarcóticos	13,2
Infraestructura de apoyo a la aviación del Ejército colombiano	5,0
Información de apoyo aéreo antinarcóticos	6,0
Reforma militar	5,0
Total de recursos del Departamento de Defensa	51,4

Fuente: Embajada de EE.UU. en Bogotá

RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO
(EN MILLONES DE DÓLARES)

Entrenamiento y equipamiento de Batallones Antinarcóticos	7,0
Equipo aéreo del Batallón Antinarcóticos, Blackhawks (UH-60)	208,0
Equipo aéreo del Batallón Antinarcóticos, Huey (UH-1N)	60,0
Programa Huey II	60,0
Sostenimiento de operaciones antinarcóticos	6,0
Infraestructura de los Batallones Antinarcóticos	3,0
Aumento de protección de las fuerzas	4,0
Mejor apoyo logístico	4,4
Información de apoyo aéreo antinarcóticos	9,0
Operaciones de entrenamiento conjunto para altos mandos	1,1
Comunicaciones seguras para sedes y operativos	3,0
Total Recursos del Departamento de Estado	365,5

Fuente: Embajada de EE.UU. en Bogotá

DESAGREGACIÓN DEL APOYO A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. MONTO TOTAL:115.6
(EN MILLONES DE DÓLARES)

Establecimiento de comunicaciones seguras con las Fuerzas Armadas colombianas	3,0
Armamento y municiones	3,0
Aumento de apoyo logístico	2,0
Aumento de capacidades de operaciones de avanzada	5,0
Construcción de bases de frontera de la Policía Nacional	5,0
Suministro de una unidad aérea adicional	2,0
Mejorar equipos aéreos de la Policía Nacional	8,0
Suministro de aeronaves adicionales para fumigación	20,0
Repotenciación de aeronaves de la Policía Nacional	5,0
Sostenimiento y Operativos	5,0
Repotenciación de Helicópteros UH-1 a Huey II	20,6
Entrenamiento	2,0
Seguridad en pistas de aterrizaje	2,0
Aumento de actividades de erradicación	4,0
Repuestos	3,0
Blackhawks UH-60	26,0
Apoyo total a la Policía Nacional de Colombia	115,6

Fuente: Embajada de EE.UU. en Bogotá